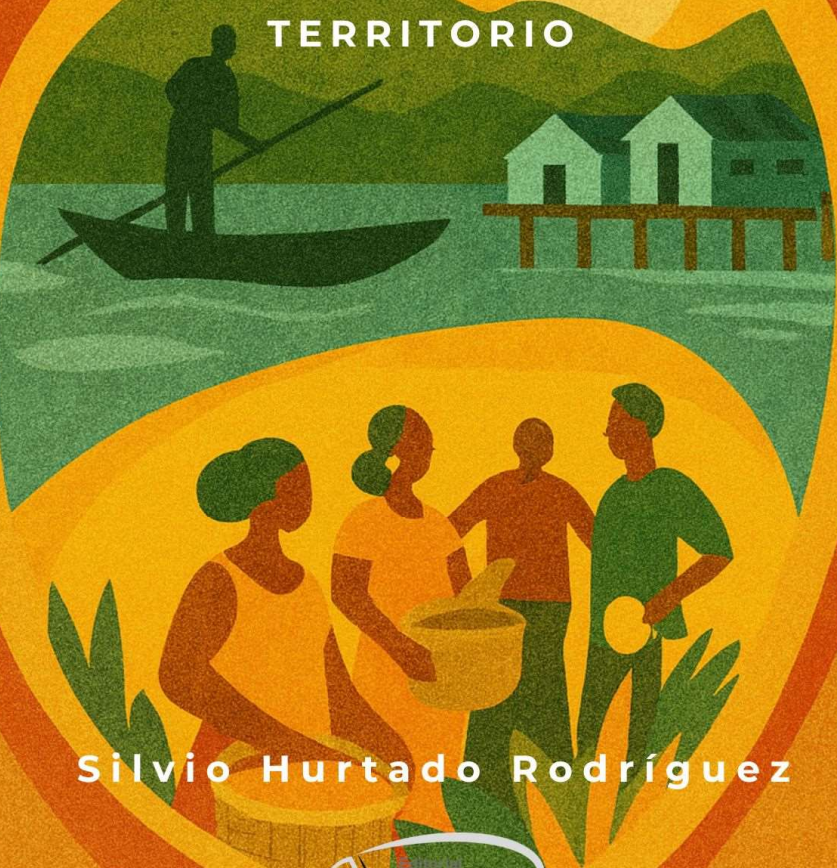


Chontaduro

REIMAGINAR LA GOBERNANZA
ECONÓMICA, LA SOBERANÍA,
LA INNOVACIÓN Y EL
TERRITORIO



Silvio Hurtado Rodríguez



**Título: Chontaduro, reimaginar la gobernanza económica,
la soberanía, la innovación y el territorio**

Autor: Silvio Hurtado Rodríguez

Edición: Leonardo Valencia Echeverry

Diagramación: Leonardo Valencia Echeverry

© **Silvio Hurtado Rodríguez**

© EDITORIAL LIBROS PARA PENSAR

Primera Edición 2025

ISBN: 978-628-02-0320-1

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia u otro método, sin el permiso previo y por escrito del autor.

Hecho en Colombia

Printed in Colombia

Queda hecho el Depósito Legal



Dedicatoria

El logro de este libro es un reflejo del apoyo incondicional de mi familia y amigos. A mi esposa **Luz Aida Largacha C**, gracias por tu paciencia y comprensión, pilares fundamentales que me acompañaron en cada etapa de este proyecto.

A mis hijas **Carmenza Gishelit Hurtado C.** y **Michel Natalia Hurtado L.**, les agradezco por ser mi fuente constante de motivación y esperanza.

A mis familiares y amigos, cuya presencia y aliento fueron esenciales en este camino, les dedico estas páginas.

Este libro es el resultado de un esfuerzo compartido, tejido con amor, solidaridad y confianza.

Resumen

Este libro analiza el papel del **chontaduro** como símbolo de identidad cultural y motor de transformación económica en Buenaventura y el Pacífico colombiano. A partir de un enfoque crítico y situado, la obra examina cómo la soberanía alimentaria y la agroindustria comunitaria pueden convertirse en alternativas frente a la exclusión histórica, el modelo extractivo y la dependencia alimentaria externa.

El texto propone una reflexión sobre la alimentación no solo como necesidad biológica, sino como **campo de disputa política, económica y cultural**, donde confluyen poder, memoria e identidad. Se destaca que el cultivo y transformación del chontaduro representan una oportunidad para fortalecer la economía campesina, recuperar saberes ancestrales y construir procesos de innovación desde lo propio, con base en la economía solidaria y la organización comunitaria.

A través de un análisis interdisciplinar y narrativo, se documentan experiencias locales de transformación del fruto en harina y otros derivados, resaltando el rol de mujeres, jóvenes y asociaciones rurales. El libro evidencia que la agroindustria, cuando nace desde el territorio, puede ser una herramienta de justicia, siempre

que se articule con la sustentabilidad, la reciprocidad y el bien común.

En suma, la obra plantea que la harina de chontaduro no es solo un producto económico, sino una **apuesta política y cultural** por la vida digna, la autonomía alimentaria y el desarrollo con justicia territorial. Desde Buenaventura, se propone repensar la relación entre territorio, economía y soberanía, mostrando que la innovación puede surgir desde abajo y con identidad propia.

Palabras clave: Chontaduro, soberanía alimentaria, agroindustria comunitaria, Buenaventura, economía solidaria, saber popular.

ÍNDICE

RESUMEN.....	7
INTRODUCCIÓN	15
OBJETIVOS	19
METODOLOGÍA	25
CAPÍTULO 1: BUENAVENTURA Y EL PACÍFICO: HISTORIA DE UNA REGIÓN MARGINAL Y VITAL	29
1.1 TRAYECTORIAS DEL ABANDONO ESTATAL Y LA RESISTENCIA TERRITORIAL.....	30
1.2 ECONOMÍA PORTUARIA VS. ECONOMÍA CAMPESINA	33
1.3 EL CAMPO INVISIBILIZADO: TIERRAS FÉRTILES, PUEBLOS RACIALIZADOS.....	35
CAPÍTULO 2: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROINDUSTRIA EN CLAVE LOCAL.....	39
2.1 DEL ASISTENCIALISMO A LA SOBERANÍA: UNA CRÍTICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	42
2.2 LA SOBERANÍA ALIMENTARIA COMO HORIZONTE POLÍTICO Y CULTURAL	46
2.3 AGROINDUSTRIA DESDE ABAJO: ENTRE EL RIESGO DE COOPTACIÓN Y LA OPORTUNIDAD TRANSFORMADORA	50
CAPÍTULO 3: EL CHONTADURO EN LA CULTURA, LA ECONOMÍA Y EL SABER POPULAR.....	61
3.1 USOS TRADICIONALES Y SABERES INTERGENERACIONALES	62
3.2 POTENCIAL ECONÓMICO Y CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIÓN POPULAR	65
3.3 EL SABER POPULAR COMO TECNOLOGÍA INVISIBLE.....	67
CAPÍTULO 4: INNOVAR DESDE LO PROPIO: HARINA DE CHONTADURO COMO APUESTA TERRITORIAL.....	71
4.1 ORIGEN COMUNITARIO DE LA PROPUESTA	73
4.2 ALTERNATIVAS A LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA EXTERNA	77

4.3 TECNOLOGÍA APROPIADA, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DESDE EL TERRITORIO	81
--	----

CAPÍTULO 5: ECONOMÍA DEL CHONTADURO 89

5.1. LA AGROINDUSTRIA DEL CHONTADURO COMO UNIDAD PRODUCTIVA: ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DE COSTOS	92
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA Y PROYECCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO COMUNITARIO	98
5.3. MODELOS DE GESTIÓN COMUNITARIA Y GOBIERNO CORPORATIVO EN EMPRENDIMIENTOS TERRITORIALES.....	103
5.3. MODELOS DE GESTIÓN COMUNITARIA Y GOBIERNO CORPORATIVO EN EMPRENDIMIENTOS TERRITORIALES.....	107
5.4 MECANISMOS DE CONTROL, AUDITORÍA SOCIAL Y TRANSPARENCIA EN PROYECTOS AGROINDUSTRIALES RURALES.....	111
5.5. SIMULACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE UNA PLANTA COMUNITARIA DE HARINA DE CHONTADURO	115

CAPÍTULO 6: ECONOMÍA PARA LA VIDA: MÁS ALLÁ DEL MERCADO 121

6.1 DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA ECONOMÍA REGENERATIVA (VERSIÓN AMPLIADA)	124
6.2 ECONOMÍA FEMINISTA Y SOLIDARIDAD TERRITORIAL.....	128
6.3 CUIDADO, RECIPROCIDAD Y BIEN COMÚN EN LA ECONOMÍA TERRITORIAL.....	133

CAPÍTULO 7: ESTUDIO DE MERCADO CON ENFOQUE TERRITORIAL Y CULTURAL 139

7.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA REAL Y POTENCIAL.....	142
7.2 TENSIONES ENTRE CULTURA ALIMENTARIA, PRECIOS JUSTOS Y COMPETITIVIDAD.....	146
7.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN CON IDENTIDAD Y ARRAIGO	150

CAPÍTULO 8 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ECONOMÍA SOLIDARIA RURAL	154
8.1 MODELOS ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS EN CONTEXTO	157
8.2 CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y FORMACIÓN PARA LA AUTOGESTIÓN	161
8.3 GOBERNANZA ECONÓMICA Y CONSTRUCCIÓN DE AUTONOMÍA LOCAL	165

CAPÍTULO 9: IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y EPISTÉMICO DEL PROYECTO	171
9.1 EVALUACIÓN INTEGRAL: COMUNIDAD, AMBIENTE Y CULTURA..	174
9.2 ENFOQUES DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD Y DIFERENCIAL ÉTNICO	178
9.3 APORTES AL PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE EL SUR GLOBAL	182
CAPÍTULO 10 BUENAVENTURA PROPONE: APRENDIZAJES DESDE EL MARGEN PARA UNA COLOMBIA DISTINTA	187
10.1 OBSTÁCULOS SUPERADOS Y APRENDIZAJES COLECTIVOS	189
10.2 POSIBILIDADES DE RÉPLICA Y ADAPTABILIDAD REGIONAL.....	193
10.3. AGROINDUSTRIA CON ALMA: EL FRUTO COMO HORIZONTE ..	197
CONCLUSIÓN	203
BIBLIOGRAFÍA	207
EL AUTOR.....	211

**CHONTADURO,
REIMAGINAR LA GOBERNANZA
ECONÓMICA,
LA SOBERANÍA, LA INNOVACIÓN
Y EL TERRITORIO**

Figura 1. *Lancha con productos agrícolas*



Introducción

La historia alimentaria de los pueblos no se reduce a una secuencia de prácticas agrícolas, ni a una simple necesidad de nutrición biológica. En territorios profundamente atravesados por procesos de racialización, desposesión y exclusión histórica, como el Pacífico colombiano, la alimentación ha sido también una trinchera simbólica, una práctica de resistencia cotidiana y un campo de disputa por la dignidad.

Lejos de ser una cuestión meramente técnica o productiva, el acceso, la producción y el sentido mismo de los alimentos han estado mediados por estructuras de poder que deciden qué se siembra, para quién se produce y quién tiene derecho a comer con dignidad (Gordillo, 2021).

Buenaventura, enclave portuario y eje estratégico del comercio exterior colombiano, representa de forma paradigmática las tensiones entre modernización y exclusión, acumulación económica y hambre.

El hecho de que más del 60 % del comercio marítimo del país pase por su infraestructura portuaria, mientras buena parte de su población vive en condiciones de pobreza alimentaria, no es una paradoja, sino una manifestación brutal de un modelo económico que prioriza la

exportación y la ganancia por encima del bienestar territorial (Escobar, 2018; Velásquez, 2020).

En este escenario, el campo ha sido sistemáticamente invisibilizado, las economías campesinas subordinadas a lógicas extractivas, y los saberes locales reducidos a folclore o irrelevancia.

La alimentación —lo que se come, cómo se cultiva, quién lo transforma y bajo qué condiciones— se ha convertido así en un termómetro de la desigualdad estructural. Mientras organismos multilaterales continúan promoviendo la seguridad alimentaria como una política de cobertura y asistencia, cada vez más movimientos sociales, comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas reivindican la soberanía alimentaria como un derecho político y cultural.

Este concepto, más allá de su definición técnica, recupera el control sobre los sistemas alimentarios por parte de quienes los habitan, y plantea una reconfiguración radical del vínculo entre territorio, cultura, economía y vida (FAO, 2022).

En este contexto, pensar en una agroindustria comunitaria basada en el chontaduro no es una alternativa menor ni una anécdota productiva. Es una apuesta que trastoca las coordenadas

dominantes del desarrollo, que desnaturaliza la idea de que la industrialización solo puede venir desde afuera y que el progreso solo es posible bajo las reglas del mercado competitivo global.

El chontaduro, fruto ancestral, símbolo de la alimentación popular del Pacífico, encarna en sí mismo una posibilidad: reterritorializar la economía desde el cuidado, la identidad y la autonomía.

Su transformación en harina o derivados alimenticios no apunta solamente a mejorar ingresos o ampliar la oferta, sino a reconstruir sentidos de pertenencia, restaurar vínculos sociales y revalorizar el saber popular como forma legítima de conocimiento tecnológico (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007).

La agroindustria, cuando nace del territorio y no se impone sobre él, puede ser una herramienta para la justicia. Pero para ello debe operar con otras lógicas: las de la reciprocidad, la sustentabilidad, el arraigo y el bien común. Esto implica no solo procesar frutos, sino también imaginar modelos económicos regenerativos, estructuras asociativas solidarias y relaciones comerciales que no perpetúen la explotación. Implica, también, enfrentar la tentación de la cooptación institucional y los discursos tecnocráticos que diluyen el potencial político de este tipo de experiencias.

Como lo han señalado diversas experiencias en América Latina, el desafío está en construir circuitos económicos alternativos que no repitan la lógica extractiva con otros nombres, sino que habiliten condiciones materiales para una vida digna en el territorio.

Buenaventura, con su historia de luchas y su reserva inagotable de saberes, tiene hoy la posibilidad de proponer al país una visión distinta del desarrollo. Una que brota desde abajo, desde la semilla, desde el fruto, desde la comunidad organizada, y que pone al centro la vida antes que el capital.

Objetivos

Este libro tiene como propósito central contribuir a la comprensión y visibilización de las alternativas agroindustriales comunitarias en territorios históricamente marginados como Buenaventura, analizando de manera rigurosa y situada las relaciones entre soberanía alimentaria, organización popular, economía solidaria y justicia territorial.

Más que una descripción técnica de procesos productivos, esta obra busca desentrañar los entramados históricos, culturales, políticos y económicos que condicionan, pero también posibilitan, experiencias de innovación desde abajo.

En particular, se propone mostrar cómo una iniciativa local en torno al chontaduro —fruto ancestral y símbolo identitario del Pacífico— puede ser una vía concreta para la construcción de autonomía, reconfiguración de modelos económicos, defensa de los saberes comunitarios y transformación de las relaciones centro-periferia en el país.

Como objetivos específicos la obra se plantea, en primer lugar, develar las condiciones estructurales de exclusión que han marcado el devenir del Pacífico colombiano, caracterizado por una economía portuaria funcional al capital global, que ha marginado sistemáticamente las

economías campesinas y los derechos territoriales de sus pobladores. En este marco, se analiza el lugar del campo y la alimentación en la configuración de la desigualdad, con énfasis en la invisibilización del saber local y la racialización de las políticas públicas.

En segundo lugar, se propone problematizar críticamente los discursos hegemónicos sobre seguridad alimentaria, mostrando sus límites y ambigüedades en contextos como el de Buenaventura, y contrastándolos con las apuestas de soberanía alimentaria surgidas desde las comunidades. Este objetivo implica recuperar el carácter político, cultural y epistémico de la alimentación como derecho y como territorio en disputa.

En tercer lugar, se busca documentar y analizar la experiencia concreta de transformación del chontaduro en harina y otros derivados alimentarios, no como un proyecto exclusivamente técnico, sino como una práctica situada de innovación social y económica. Esto conlleva explorar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y simbólicas que han hecho posible su desarrollo, así como sus desafíos y tensiones.

En cuarto lugar, se plantea comprender las formas de organización comunitaria, asociatividad y economía solidaria que han sostenido esta iniciativa, rescatando las

capacidades locales de autogestión, los aprendizajes colectivos y las formas alternativas de gobernanza económica en contextos de alta adversidad institucional.

En quinto lugar, el libro se propone analizar la dimensión económica, organizativa y contable y económica de la iniciativa agroindustrial del chontaduro, comprendiendo esta no solo como una práctica de sostenibilidad financiera, sino como un ejercicio de reapropiación del valor, transparencia comunitaria y democratización del conocimiento contable. Desde esta perspectiva, se examina cómo las comunidades participantes han construido modelos de gestión adaptados a sus realidades socioculturales, articulando principios de economía solidaria con herramientas de administración y contabilidad popular. El análisis aborda la estructura de costos, las cadenas de valor locales, los mecanismos de reparto de beneficios y los aprendizajes en torno al registro y control de los procesos productivos, no como una imposición tecnocrática, sino como una pedagogía de la autonomía económica que permite disputar el lugar subordinado que históricamente se le ha asignado a la producción popular. Así, se considera la contabilidad no solo como una técnica, sino como un lenguaje que, cuando se pone al servicio de lo común, puede contribuir a consolidar procesos organizativos sostenibles y a fortalecer la incidencia de las

comunidades en la planificación económica de sus territorios (Guerrero Ortiz, 2020; Mosquera Patterson, 2021).

Finalmente, el libro en los capítulos siguientes se propone identificar y sistematizar los impactos sociales, ambientales y culturales de esta experiencia, así como sus proyecciones más allá del caso puntual. En este sentido, se exploran los aportes que puede hacer al pensamiento crítico latinoamericano, a la política pública con enfoque territorial, y a la construcción de alternativas al desarrollo desde el sur global.

En sexto lugar se plantea la economía lineal a la economía regenerativa: Se contrasta el modelo tradicional de "usar y tirar" con uno que busca restaurar y mantener los ecosistemas. Se propone una economía que no solo minimiza el daño, sino que también revitaliza los recursos naturales y sociales. explora cómo las desigualdades de género afectan la economía y resalta la importancia del **trabajo de cuidado y la reciprocidad**. Se propone una economía que valora y visibiliza las contribuciones de las mujeres, fortaleciendo los lazos comunitarios.

En séptimo lugar se aborda quiénes son los **posibles compradores** del producto. Se analiza la demanda actual (consumidores existentes) y la potencial (nuevos mercados reconstruyendo las lógicas socioculturales que sostienen el

consumo local), identificando las necesidades y preferencias de los consumidores. Se aborda el desafío de **equilibrar las tradiciones locales con las exigencias del mercado**. Se discute cómo fijar un precio que sea justo para los productores, pero también competitivo en el mercado, sin perder la identidad cultural del producto.

El octavo Se resalta las **estructuras organizativas** que mejor se adaptan a las comunidades rurales. Se explorarán las ventajas y desventajas de las asociaciones y cooperativas como herramientas para fortalecer la cohesión y la acción colectiva. Se habla de la importancia de la educación y la capacitación en áreas como administración, finanzas y liderazgo para garantizar la autonomía. Se discute cómo las comunidades pueden diseñar sus propias reglas y sistemas para gestionar sus recursos, reduciendo la dependencia de agentes externos.

El capítulo noveno Se examina el **efecto global del proyecto**. Se evalúa cómo ha impactado la calidad de vida de la comunidad, el estado del medio ambiente y la preservación de las tradiciones culturales. Se reflexiona sobre cómo la experiencia de Buenaventura puede **contribuir a un conocimiento diferente** sobre el desarrollo. Se considera cómo el proyecto desafía las ideas dominantes y propone

soluciones desde las realidades de los países en desarrollo.

El capítulo decimo Se hace un recuento de los **desafíos que enfrentó el proyecto** y cómo la comunidad los superó. Se destacan las lecciones aprendidas en el camino, como la importancia de la perseverancia y la unión. Se ofrece una **visión final y metafórica del proyecto**. El "fruto" simboliza no solo el producto del chontaduro, sino también todos los beneficios sociales, culturales y económicos que la comunidad ha cosechado, demostrando que es posible tener una industria que preserve la dignidad y el territorio.

Metodología

El desarrollo de este libro responde a un proceso de investigación narrativa, documental y territorial orientado por una perspectiva crítica, situada y comprometida con la realidad concreta de Buenaventura y el Pacífico colombiano.

No se trata de una obra escrita desde la distancia o desde la asepsia académica, sino desde una metodología enraizada en los saberes populares, en los relatos de vida, en la sistematización de experiencias comunitarias y en el análisis riguroso de marcos teóricos y normativos que atraviesan las dinámicas del territorio.

El punto de partida fue una revisión documental exhaustiva de materiales técnicos, normativos, comunitarios y académicos vinculados a la historia económica y política de Buenaventura, los debates sobre soberanía alimentaria, las propuestas de economía solidaria y los enfoques de agroindustria alternativa.

En esta fase se recuperaron fuentes institucionales (planes de desarrollo, informes de política pública, estudios técnicos), producciones académicas de autores clave como Escobar, Boaventura de Sousa Santos, Shiva, Federici y Robeyns, así como testimonios de

organizaciones locales, sistematizaciones comunitarias y archivos de medios regionales.

Este insumo permitió construir una línea de base histórica y teórica que nutre el capítulo inicial y las reflexiones estructurales de la obra.

En paralelo, se empleó una estrategia de sistematización de experiencias basada en la reconstrucción narrativa de iniciativas agroindustriales comunitarias alrededor del chontaduro.

Si bien el foco del libro es Buenaventura, se contrastaron otras experiencias del Pacífico y del sur global, con el fin de identificar patrones, desafíos, estrategias replicables y apuestas divergentes. Esta reconstrucción no se limitó a aspectos técnicos o productivos, sino que abarcó dimensiones organizativas, culturales, epistémicas y de justicia social.

Para ello se utilizó una matriz de análisis que incorporó variables como: origen y sentido de la iniciativa, apropiación tecnológica, articulación territorial, protagonismo comunitario, impactos diferenciados por género y etnia, sostenibilidad ambiental y vínculos con políticas públicas.

La escritura del libro fue concebida como una práctica de co-construcción de sentido; su arquitectura recoge voces múltiples, traduce preocupaciones colectivas y se alimenta de un

proceso de diálogo con actores del territorio — líderes comunitarios, sabedores, mujeres agricultoras, jóvenes emprendedores, profesionales locales— que han estado implicados en diversas etapas del proyecto o de procesos afines. En este sentido, el texto no es una autoría aislada, sino un tejido construido entre narrativas, referencias, registros y vivencias compartidas.

El enfoque metodológico adoptado combina elementos de la investigación-acción participativa, la ecología de saberes y la crítica poscolonial. Se reconoce que la agroindustria, lejos de ser un campo meramente técnico o económico, está atravesada por relaciones de poder, desigualdades estructurales, disputas de sentido y horizontes de vida que exigen ser comprendidos desde lógicas que desbordan el paradigma productivista dominante.

Por eso, se priorizó una lectura holística y de largo plazo, capaz de conectar lo alimentario con lo político, lo ambiental con lo económico, y lo simbólico con lo estructural.

Este posicionamiento metodológico también implicó una reflexión ética permanente. Se evitó la romantización de lo comunitario o la instrumentalización de las iniciativas locales como “casos de éxito” desvinculados de sus contextos de lucha y precariedad. Por el contrario, se asumió que toda experiencia es

inacabada, contradictoria y situada, y que su análisis debe partir del respeto por las voces locales, la comprensión de sus límites y el reconocimiento de sus potencias transformadoras.

Finalmente, el diseño del texto respondió a una lógica pedagógica y argumentativa. Cada capítulo fue estructurado para combinar análisis contextual, desarrollo conceptual, reconstrucción narrativa y proyección estratégica, de manera que el lector pueda recorrer el libro no solo como una fuente de información, sino como una herramienta para pensar y actuar.

La escritura fue cuidada en su tono, profundidad y estilo para ser rigurosa sin ser inaccesible, crítica sin ser excluyente, técnica sin despojarse de sensibilidad. En suma, la metodología que dio vida a esta obra no se separa del territorio al que le da voz, ni del compromiso ético-político que la inspira.

Capítulo 1: Buenaventura y el Pacífico: historia de una región marginal y vital

Para comprender el sentido y el alcance de una apuesta agroindustrial desde el chontaduro, es indispensable situar el escenario desde el cual esta propuesta emerge.

Buenaventura no es una ciudad cualquiera. Es un territorio de contrastes extremos, en la que coexisten una de las plataformas logísticas más importantes del país con niveles de pobreza multidimensional que superan el 60 % de la población (DANE, 2022); y en la que los buques de carga movilizan mercancías por miles de millones de dólares, mientras amplios sectores urbanos y rurales carecen de agua potable continua, acceso a vías o sistemas básicos de salud.

Este territorio mayoritariamente afrodescendiente, ha sido históricamente marginado de los beneficios del desarrollo o económico y, al mismo tiempo, ha sido central en la acumulación de riqueza nacional e internacional. El modelo de enclave portuario ha priorizado la eficiencia logística sobre la justicia territorial, y ha profundizado una desconexión entre las lógicas del comercio global y las realidades de las comunidades locales.

Sin embargo, más allá de la exclusión, Buenaventura también representa una reserva ética y política. Es un lugar donde el dolor ha dado lugar a la organización, donde el olvido ha sido respondido con dignidad, y donde lo que parece periferia se convierte, en muchos sentidos, en vanguardia: de nuevas formas de resistencia, de economías con identidad y de propuestas que articulan saberes tradicionales con innovación situada.

La historia de la harina de chontaduro que aquí comienza a contarse es una expresión de esa potencia transformadora.

1.1 Trayectorias del abandono estatal y la resistencia territorial

Hablar de Buenaventura es abrir las páginas de una historia marcada por la riqueza y el despojo, por la centralidad económica y el abandono estructural. Esta ciudad-puerto, enclavada en el litoral del Pacífico colombiano, representa una paradoja viva: moviliza más del 60 % del comercio marítimo nacional, pero al mismo tiempo concentra unos de los más altos índices de pobreza, desempleo y exclusión institucional del país (DANE, 2022).

Su valor logístico para la economía colombiana contrasta brutalmente con la precariedad de sus condiciones sociales, lo que

evidencia una desconexión entre el crecimiento económico y la justicia territorial.

Esta situación no es nueva ni accidental. Desde los tiempos coloniales, el Pacífico ha sido tratado como un territorio periférico, útil para la extracción de recursos —oro, maderas, caucho, biodiversidad—, pero marginalizado en términos de inversión pública, presencia estatal y reconocimiento político.

Esta lógica colonial se ha perpetuado bajo diversas formas: primero con la esclavización de cuerpos negros para la economía minera y agrícola, luego con el descuido sistemático de sus poblaciones rurales, y más recientemente con una inserción subordinada en los circuitos globales del capital, bajo modelos de enclave logístico y extractivo (Escobar, 2018; Velásquez, 2020).

A partir de los años noventa, con la apertura económica y la consolidación del neoliberalismo en Colombia, se profundizó el proceso de privatización de los bienes públicos. La concesión del puerto a operadores privados se hizo sin participación de las comunidades locales, generando una estructura económica excluyente donde los beneficios de la operación portuaria no se redistribuyen en el territorio.

Así, el “desarrollo” se convirtió en una narrativa que legitima la acumulación por

desposesión (Harvey, 2005): se construyen muelles de última generación mientras cientos de barrios no tienen acueducto permanente; se proyectan plataformas logísticas multimodales mientras las veredas carecen de vías terciarias.

Frente a este abandono, sin embargo, ha emergido una resistencia territorial plural, persistente y creativa. No se trata solo de actos de protesta, sino de una forma de vida que desafía el olvido institucional a través de la solidaridad, la memoria y la organización. Las mingas comunitarias, las cocinas colectivas, las redes de mujeres cuidadoras, los procesos de comunicación popular y los paros cívicos son expresiones de una ciudadanía que no se resigna.

El Paro Cívico de Buenaventura en 2017 fue una de las manifestaciones más poderosas de esta resistencia. Más de 20 días de movilización pacífica paralizaron el puerto más importante del país para exigir algo tan básico como agua, salud y dignidad.

Esta historia de abandono y resistencia es clave para entender cualquier propuesta de desarrollo productivo en la región. La harina de chontaduro, como propuesta agroindustrial, no es una simple iniciativa económica: es también una afirmación política.

Es la prueba de que los márgenes también piensan, producen, sueñan y transforman. Y que desde esos márgenes se puede construir una economía más justa, más humana y más arraigada al territorio.

1.2 Economía portuaria vs. economía campesina

La coexistencia entre el puerto de Buenaventura y la economía campesina del litoral constituye uno de los contrastes más elocuentes del modelo de desarrollo colombiano.

Por un lado, una infraestructura moderna, integrada a los flujos globales de mercancías, con inversiones millonarias y estándares internacionales. Por el otro, comunidades rurales dedicadas a la agricultura de pancoger, a la pesca artesanal y al comercio informal, sin garantías básicas de conectividad, asistencia técnica o acceso a mercados.

La economía portuaria funciona como un enclave: extrae valor del territorio sin integrarse a su tejido social. La mayoría de los empleos generados son precarios, subcontratados y masculinizados, con bajos niveles de formalización.

La operación logística es altamente tecnificada, lo que reduce la demanda de mano

de obra local. Además, los procesos de seguridad y control han llevado a una militarización del espacio portuario, con acceso restringido a la ciudadanía y sin mecanismos reales de redistribución de las utilidades generadas (Rentería & González, 2020).

En paralelo, la economía campesina sigue siendo el sostén alimentario de gran parte de la población, pero está sometida a múltiples formas de precariedad: dependencia de intermediarios, falta de precios justos, pérdida de semillas nativas, cambio climático, y una política pública que la considera subsidiaria o residual frente a la agroindustria intensiva.

Esta desvalorización ha llevado a un deterioro progresivo de las prácticas agrícolas tradicionales, muchas de las cuales están profundamente arraigadas en los saberes afrodescendientes y en la cosmovisión del territorio como fuente de vida, no solo de mercancías.

El cultivo del chontaduro, por ejemplo, no es solo una práctica productiva. Es parte de un sistema cultural complejo, asociado al calendario agrícola, a las fiestas populares, a las recetas transmitidas entre generaciones y a una economía afectiva basada en la reciprocidad. Transformar ese fruto en harina puede ser una oportunidad para darle valor agregado y ampliar su alcance comercial, pero solo si se

hace desde una lógica respetuosa del territorio, con tecnología apropiada, participación comunitaria y soberanía sobre el proceso (Gutiérrez & Díaz, 2021).

Una agroindustria del chontaduro que fortalezca la economía campesina debe ser pensada como parte de una transición hacia modelos económicos más justos, donde la rentabilidad no se mida solo en términos financieros, sino también en términos de arraigo, bienestar y sostenibilidad. Para ello, es imprescindible cerrar la brecha entre el puerto y el campo, no solo con infraestructura física, sino con políticas públicas que reconozcan la diversidad productiva del Pacífico y la dignifiquen como un aporte estratégico al país.

1.3 El campo invisibilizado: tierras fértiles, pueblos racializados

Resulta paradójico que en un territorio como Buenaventura —donde el 80 % de la superficie es rural— el campo siga siendo un gran ausente en las decisiones de planificación y en la inversión estatal. Esta omisión es más que técnica: es una manifestación estructural de racismo territorial.

Las comunidades rurales afrodescendientes han sido sistemáticamente excluidas del desarrollo, no porque no tengan capacidad

productiva, sino porque sus formas de vida, organización y conocimiento no encajan en los modelos institucionales hegemónicos (Quiceno Toro, 2021).

En muchas veredas del litoral, llegar al centro urbano puede tardar más de un día. Los caminos se inundan, los medios de transporte son precarios, y los productos agrícolas se dañan antes de llegar al mercado. Esta realidad afecta directamente la seguridad alimentaria, el acceso a servicios y la posibilidad de sostener proyectos productivos con viabilidad comercial. Pero también tiene consecuencias culturales: cuando el campo se margina, se rompe la transmisión intergeneracional del saber, se erosiona el tejido comunitario y se pierde la relación sagrada con la tierra.

La racialización del territorio impone además una doble carga: no solo se niegan recursos e infraestructuras, sino que se desacredita el conocimiento que emerge desde las comunidades. La agroecología, por ejemplo, ha sido practicada en el Pacífico mucho antes de que fuera validada por la academia. Las técnicas de procesamiento, almacenamiento y conservación de alimentos —como las que permiten transformar el chontaduro en harina— han existido, pero han sido invisibilizadas frente a las tecnologías “importadas”.

Frente a este panorama, visibilizar el campo bonaverense es un acto de justicia epistémica, territorial y económica. Significa reconocer que allí no hay atraso, sino otras formas de saber, producir y habitar. Significa construir puentes entre la ingeniería moderna y los conocimientos tradicionales, entre la tecnología y el respeto por la vida.

La agroindustria puede ser parte de esa transformación, pero solo si se piensa desde abajo, con y para las comunidades. La harina de chontaduro, en este sentido, es mucho más que un producto: es una metáfora de lo que puede surgir cuando se reconoce el valor de lo propio y se apuesta por cultivar dignidad desde la raíz.

Capítulo 2: Soberanía alimentaria y agroindustria en clave local

La relación entre alimentación y poder ha sido históricamente invisibilizada bajo la apariencia de una necesidad biológica o de un problema técnico de producción. Reducida a cifras de calorías, toneladas exportadas o eficiencia logística, la alimentación ha sido despojada de su dimensión política, cultural y territorial.

Sin embargo, en el Pacífico colombiano — históricamente excluido, racializado y subordinado a lógicas extractivas— la alimentación se revela como un campo de disputa estratégica, donde se condensan, como dijimos, las tensiones entre dependencia y autonomía, entre imposición y resistencia, entre despojo y soberanía.

En estos territorios, el hambre no es solo una carencia fisiológica, sino una consecuencia estructural de decisiones políticas que privilegian ciertos modelos productivos sobre otros, ciertas poblaciones sobre otras, ciertas formas de conocimiento sobre otras.

Comer, producir alimentos, conservar semillas, cocinar, distribuir, intercambiar o

transformar lo cultivado no son prácticas neutras: son actos profundamente políticos, atravesados por relaciones de poder, de memoria y de identidad.

Por eso, el estudio de los sistemas alimentarios debe ir más allá de los indicadores nutricionales para adentrarse en los procesos de subordinación, exclusión y también en las apuestas de autodeterminación que atraviesan la vida cotidiana de las comunidades.

En este escenario, la propuesta de una agroindustria del chontaduro en Buenaventura no puede reducirse a un emprendimiento más. No se trata simplemente de procesar un fruto para agregarle valor y llevarlo al mercado, sino de reinterpretar la agroindustria desde el territorio, desde la historia colectiva y desde los saberes populares.

Significa cuestionar la idea de que el desarrollo solo es posible mediante la adopción de modelos externos, intensivos en capital y dependientes de mercados lejanos, y plantear en cambio que es posible construir formas de producción, transformación y consumo arraigadas, sostenibles y culturalmente significativas.

La harina de chontaduro es mucho más que un producto: es una puerta de entrada a debates estructurales sobre el derecho a la alimentación,

el lugar del conocimiento local en los sistemas agroalimentarios, el papel de las mujeres y jóvenes en la economía rural, y los límites del modelo agroexportador hegemónico.

Constituye un punto de articulación entre el saber ancestral y la tecnología apropiada, entre la economía campesina y las exigencias de calidad e inocuidad del mercado, entre la sostenibilidad ecológica y la justicia social.

Este capítulo se propone tres objetivos analíticos. En primer lugar, plantea una lectura crítica de los límites del paradigma de la seguridad alimentaria, tal como ha sido promovido por organismos internacionales, y su funcionalidad en la expansión de un modelo agroalimentario globalizado y concentrador.

En segundo lugar, se profundiza en el concepto de soberanía alimentaria como horizonte político y cultural formulado desde los movimientos sociales del sur global, particularmente por La Vía Campesina.

Y en tercer lugar, se examina el papel de la agroindustria local —en este caso, del chontaduro— como estrategia potencialmente transformadora, aunque no exenta de riesgos de cooptación o despolitización.

Este análisis se enmarca en una mirada crítica y situada, que reconoce a Buenaventura no como

una periferia que debe ser integrada al centro, sino como un centro de producción de saber, de resistencia y de propuesta. La soberanía alimentaria, como veremos, no es una utopía lejana, sino una posibilidad concreta que empieza en la tierra, en el fogón, en la semilla y en la palabra.

2.1 Del asistencialismo a la soberanía: una crítica a la seguridad alimentaria

Durante buena parte del siglo XX, la idea de “seguridad alimentaria” se convirtió en el eje articulador de las políticas nacionales e internacionales en torno a la alimentación.

Surgida en un contexto de posguerra, en el que el hambre se consideraba una amenaza geopolítica y una señal de subdesarrollo, la seguridad alimentaria fue entendida inicialmente como la garantía de disponibilidad suficiente de alimentos a nivel global (FAO, 1996). En otras palabras, el problema era producir más, y a escala, para alimentar a una población mundial en crecimiento.

Esta visión productivista se intensificó con la llamada Revolución Verde, que promovió el uso intensivo de insumos industriales, semillas híbridas, maquinaria y agroquímicos como solución técnica al hambre.

Si bien estos paquetes tecnológicos permitieron aumentar el rendimiento de ciertos cultivos en regiones específicas, también provocaron la erosión de suelos, la pérdida de agrobiodiversidad, la dependencia externa de los campesinos y la concentración del mercado de alimentos en pocas corporaciones transnacionales (Altieri & Toledo, 2011).

En las décadas posteriores, el concepto de seguridad alimentaria fue ampliándose para incorporar no solo la disponibilidad, sino también la accesibilidad económica, la estabilidad de suministro y, en algunos casos, la calidad nutricional de los alimentos (FAO, 2006).

No obstante, esta evolución conceptual no implicó un cambio estructural en la manera de abordar el problema: se mantuvo la idea de que el hambre podía resolverse mediante políticas públicas focalizadas, mercados eficientes y cooperación internacional tecnificada, sin interrogar las causas profundas del hambre ni el poder de decisión de los pueblos sobre sus propios sistemas alimentarios.

En contextos como el Pacífico colombiano, esta aproximación se tradujo en políticas asistencialistas, muchas veces desconectadas de la realidad territorial. Programas de ayuda alimentaria, distribución de raciones industrializadas, incentivos para cultivos de

consumo nacional y alianzas con empresas del sector agroindustrial fueron presentados como soluciones a los altos índices de desnutrición.

Sin embargo, lejos de empoderar a las comunidades, estos programas consolidaron relaciones de dependencia, desincentivaron la producción local y deslegitimaron los sistemas alimentarios tradicionales (Holt-Giménez & Shattuck, 2011).

En la práctica, la seguridad alimentaria ha sido usada como instrumento funcional al modelo agroalimentario globalizado. Un modelo que se basa en el monocultivo, la estandarización de las dietas, la extracción de rentas del campo por parte de actores financieros, y la concentración de toda la cadena de valor —desde la semilla hasta la góndola del supermercado— en manos de unas pocas corporaciones.

En nombre de “alimentar al mundo”, se ha impuesto un régimen alimentario que pone en riesgo la salud de las personas, destruye ecosistemas y arrincona a los pequeños productores (McMichael, 2009).

Además, esta noción parte de una asimetría epistemológica: considera que el conocimiento técnico-científico occidental es el único válido para planificar la alimentación de las poblaciones, mientras ignora los saberes

populares, indígenas y campesinos que durante siglos han garantizado sistemas alimentarios diversos, resilientes y culturalmente significativos.

Así, la seguridad alimentaria ha servido, en muchos casos, como excusa para imponer paquetes tecnológicos inadecuados, para controlar territorios estratégicos y para disciplinar la producción según los imperativos del mercado.

No se trata de negar la importancia de que toda persona tenga acceso físico y económico a alimentos suficientes y adecuados. Se trata de ir más allá: de preguntarse quién decide qué se produce, cómo se produce, quién lo transforma, quién lo distribuye y bajo qué lógicas.

Y de reconocer que responder a estas preguntas desde los territorios, desde la autonomía y desde la diversidad cultural no solo es posible, sino urgente.

En este punto emerge el concepto de soberanía alimentaria, como respuesta política, epistémica y territorial a las limitaciones estructurales del paradigma dominante. La soberanía alimentaria se basa en una premisa sencilla y radical: el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, a proteger sus semillas, a cuidar sus suelos y a comer según su cultura.

Como veremos en el próximo apartado, no se trata de una alternativa romántica ni de un anhelo nostálgico, sino de una estrategia concreta para reorganizar el sistema agroalimentario desde la base, desde abajo, y con sentido de justicia.

2.2 La soberanía alimentaria como horizonte político y cultural

La soberanía alimentaria no es simplemente un concepto técnico o una propuesta alternativa al paradigma de seguridad alimentaria. Es, ante todo, una visión de mundo. Una apuesta por reorganizar las relaciones entre seres humanos, naturaleza y alimento desde principios de justicia social, autodeterminación territorial y pluralidad cultural. Es un horizonte político porque plantea una transformación estructural de los sistemas agroalimentarios; es un horizonte cultural porque reconoce que cada pueblo, cada comunidad, tiene derecho a producir, seleccionar y consumir sus alimentos de acuerdo con su historia, sus prácticas y sus valores.

Este concepto fue formulado en 1996 por el movimiento campesino internacional La Vía Campesina, en el contexto de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO. Surgió como una crítica frontal al modelo agroalimentario dominante, que en nombre de la seguridad

alimentaria promovía monocultivos de exportación, tratados de libre comercio y corporativización de la agricultura.

Frente a este modelo extractivista y homogeneizante, La Vía Campesina propuso la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir su política agrícola, a proteger su biodiversidad y a decidir qué, cómo y para quién se produce (La Vía Campesina, 2003).

Pero la soberanía alimentaria no es una invención reciente. Sus raíces están en las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, en los calendarios agrícolas de las comunidades afrodescendientes, en los trueques campesinos y en las economías de reciprocidad.

Es la continuidad de un saber largo, colectivo y situado que ha sobrevivido a pesar de la colonización, el despojo y el desprecio epistémico. En este sentido, la soberanía alimentaria es también una forma de resistencia cultural y de memoria viva.

Para el Pacífico colombiano, la soberanía alimentaria no es un concepto ajeno ni una aspiración lejana. Es una práctica cotidiana que ha sostenido la vida de comunidades enteras frente a la ausencia del Estado.

Es el cultivo del chontaduro, del borojó, del plátano guineo o del arroz de secano; es la pesca

artesanal en los esteros y ríos; es el fogón comunitario donde se cocinan saberes y afectos; es el gesto de compartir, de sembrar en colectivo, de cosechar sin agredir la tierra. Es una forma de relación con el territorio que no reduce la alimentación a mercancía, sino que la entiende como un derecho y una expresión de la vida digna.

La soberanía alimentaria también plantea una mirada distinta sobre la tecnología. No se opone a ella de forma dogmática, pero sí exige que sea apropiada, accesible, contextualizada y controlada por las comunidades.

En lugar de imponer paquetes tecnológicos verticales, diseñados para maximizar la rentabilidad financiera, propone desarrollar soluciones que fortalezcan los saberes locales, respeten los ciclos naturales y permitan la autonomía de los productores. Por eso, cuando hablamos de transformar el chontaduro en harina mediante procesos agroindustriales, la pregunta no es solo cómo hacerlo técnicamente, sino bajo qué condiciones, con qué fines y para quiénes.

Una agroindustria con enfoque de soberanía alimentaria no busca escalar la producción para competir en mercados globales a cualquier precio.

Su objetivo es otro: generar valor agregado sin perder la conexión con la tierra y la comunidad, distribuir los beneficios de manera equitativa, fortalecer las capacidades locales, proteger las semillas nativas, y articularse con redes territoriales de comercialización que prioricen la cercanía, la calidad y la justicia. Esto implica repensar la cadena de valor como una red de relaciones éticas, más que como un proceso de acumulación.

Además, la soberanía alimentaria recupera el lugar de las mujeres como sujetas fundamentales en el sostenimiento de los sistemas alimentarios. Ellas son, históricamente, las guardianas de las semillas, las transmisoras del saber culinario, las organizadoras de las huertas y las tejedoras del cuidado. Sin una perspectiva de género, la soberanía alimentaria corre el riesgo de reproducir las mismas exclusiones que busca combatir.

Finalmente, este horizonte no puede limitarse a lo local. Si bien parte del territorio, de la comunidad y de lo cotidiano, también se proyecta hacia lo nacional e internacional.

Requiere políticas públicas coherentes, cambios institucionales, articulación entre movimientos sociales y una crítica sostenida a los marcos legales que impiden a los pueblos proteger sus alimentos.

Requiere, en suma, disputar el sentido común neoliberal que ha mercantilizado el hambre, privatizado las semillas y subordinado la agricultura al comercio global.

En palabras de Boaventura de Sousa Santos (2010), se trata de construir una “ecología de saberes” donde el conocimiento campesino, afrodescendiente, indígena y popular tenga el mismo estatus que el conocimiento científico. Donde la economía no se mida solo en PIB, sino en soberanía, resiliencia y justicia. Donde la alimentación no sea un negocio, sino un derecho colectivo y una práctica cultural liberadora.

La soberanía alimentaria, así entendida, es el telón de fondo indispensable para evaluar cualquier proyecto agroindustrial en el Pacífico. Es el horizonte que nos permite preguntarnos no solo qué se produce, sino también cómo se vive, cómo se decide y cómo se transforma el mundo desde el acto cotidiano de alimentarse.

2.3 Agroindustria desde abajo: entre el riesgo de cooptación y la oportunidad transformadora

Hablar de agroindustria en territorios históricamente marginados suele activar sospechas justificadas. Para muchas comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, la palabra evoca procesos de

concentración de tierra, dependencia tecnológica, endeudamiento, pérdida de semillas, precarización laboral y subordinación a cadenas de valor controladas por grandes empresas.

Esta memoria no es abstracta: forma parte de la experiencia latinoamericana de expansión del agronegocio, que ha convertido alimentos en commodities, paisajes biodiversos en monocultivos y agricultores en proveedores de bajo poder de negociación (McMichael, 2009; Altieri & Toledo, 2011).

Sin embargo, descartar de plano toda forma de transformación agroindustrial sería restarles a los territorios herramientas potencialmente útiles para agregar valor, ampliar la vida útil de los alimentos, mejorar la nutrición local, generar ingresos y disputar mercados hoy cerrados. El desafío, entonces, no es agroindustria sí o no, sino qué tipo de agroindustria, bajo qué control, con qué fines y para quiénes.

Una primera distinción necesaria consiste en separar la agroindustria corporativa, orientada a la acumulación de capital y la integración vertical globalizada, de las formas de agroindustria territorializada, de escala pequeña o mediana, con control comunitario o asociativo, articulada a circuitos cortos y a estrategias de soberanía alimentaria (Pimbert, 2018; van der Ploeg, 2009).

Mientras la primera tiende a subordinar la producción primaria a estándares homogéneos dictados por los grandes compradores, la segunda puede fortalecer la autonomía económica local al crear espacios de transformación in situ, retener valor en el territorio y diversificar la base productiva.

La experiencia latinoamericana muestra que cuando la transformación primaria de productos se realiza lejos del lugar de cultivo, las comunidades rurales pierden la posibilidad de capturar valor agregado. El fruto sale crudo, barato, y regresa procesado, caro, empacado y con marca ajena.

Este patrón es familiar en cadenas como el cacao, el café, el plátano o el coco. Algo similar ocurre con el chontaduro: vendido como fruta fresca en mercados urbanos o en la calle, su precio es volátil y su vida útil limitada. En cambio, convertido en harina estable, harina compuesta, pasta deshidratada para panificación o ingrediente nutricional para programas alimentarios, su horizonte económico se amplía de manera sustantiva.

Pero esa ampliación solo será estratégica para la comunidad si la transformación ocurre con participación y control local, y si las condiciones normativas (inocuidad, etiquetado, registro sanitario) son accesibles a organizaciones de

base y no exclusivas de grandes plantas (Forero, 2013; Rentería & González, 2020).

El riesgo de cooptación aparece cuando iniciativas comunitarias prometedoras se integran a esquemas empresariales que extraen el conocimiento local, apropian la marca cultural y desplazan a los productores a roles subordinados.

También cuando la búsqueda de certificaciones para acceder a mercados especializados impone estándares costosos que fragmentan a las organizaciones y convierten la formalización en un mecanismo de exclusión.

Lo que comienza como un proyecto de valor agregado local puede terminar como maquila rural al servicio de cadenas externas. Por ello, los procesos de agroindustria con identidad territorial necesitan pactos claros de gobernanza: quién posee la planta, quién define la escala de producción, cómo se reparten los beneficios, qué acuerdos existen sobre el uso del nombre del territorio, quién garantiza la compra del fruto, cómo se auditan las cuentas y qué mecanismos de salida existen si cambia la correlación de fuerzas (Pimbert, 2018; van der Ploeg, 2009).

Diseñar agroindustria desde abajo implica tomar decisiones que son simultáneamente técnicas, económicas y políticas. En el plano

técnico, conviene privilegiar tecnologías modulares, escalables y de bajo consumo energético, compatibles con condiciones de humedad y acceso eléctrico variable.

Equipos desmontables en acero inoxidable de pequeña escala, secadores solares asistidos, molinos de baja fricción y sistemas de empaque al vacío de capacidad media pueden resultar más adecuados que líneas industriales de gran volumen que requieren capital, personal altamente especializado y cadenas de suministro continuas difíciles de sostener en zonas rurales dispersas (FAO, 2023).

La selección tecnológica debe dialogar con la estacionalidad del chontaduro, las distancias de recolección y la capacidad de mantenimiento local. Una agroindustria comunitaria que depende de repuestos importados se vuelve vulnerable.

En el plano económico, la clave es construir modelos mixtos que combinen venta directa en mercados locales, acuerdos de compra institucional (por ejemplo, para programas de alimentación escolar o comunitaria) y nichos diferenciados en ciudades cercanas. La harina de chontaduro puede posicionarse como insumo nutritivo en mezclas para panificación artesanal, como complemento en alimentos infantiles o como ingrediente para preparaciones étnicas con valor gastronómico.

Pero esa diversificación exige estudios de mercado situados, análisis de costos reales y estrategias de precio que no sacrifiquen la base productiva campesina en aras de la competitividad (Rentería & González, 2020).

Aquí, las alianzas con universidades regionales, cámaras de comercio y organizaciones de economía solidaria pueden marcar la diferencia entre un proyecto viable y uno efímero.

En el plano político-organizativo, la agroindustria desde abajo demanda estructuras colectivas estables. Cooperativas de productores, asociaciones de mujeres transformadoras, empresas comunitarias de economía solidaria o consorcios interveredales permiten agrupar volumen, negociar insumos, compartir riesgos y cumplir estándares sanitarios.

Estos arreglos, sin embargo, requieren tiempos largos de formación, transparencia contable, liderazgo rotativo y acuerdos sobre la distribución de excedentes. La experiencia comparada muestra que los proyectos que invierten desde el inicio en formación organizativa y liderazgo comunitario tienen mayores probabilidades de sostenibilidad que aquellos que priorizan la compra de maquinaria sin tejido social (Berdegú & Escobar, 2003; van der Ploeg, 2009).

Un elemento sensible en la agroindustria territorial es la relación con las normativas sanitarias y comerciales. Reglamentos técnicos de inocuidad como los establecidos por los ministerios de salud y agricultura suelen diseñarse pensando en plantas industriales.

Adaptarlos o facilitar rutas diferenciadas para microagroindustrias rurales es fundamental. Instrumentos como registros sanitarios simplificados, sellos territoriales, laboratorios móviles de control de calidad o centros regionales compartidos pueden reducir costos de cumplimiento y democratizar el acceso a mercados formales (FAO, 2023; Forero, 2013). Sin estos mecanismos, la informalidad se perpetúa y los proyectos no escalan.

También es crítico abordar la cuestión de la propiedad intelectual y cultural. Los saberes sobre el cultivo, selección, cocción y secado del chontaduro tienen carácter colectivo.

Cuando proyectos externos buscan patentar derivados o registrar marcas sin consulta previa, se produce despojo de conocimiento. La soberanía alimentaria exige marcos de protección de saberes comunitarios, acuerdos de licencia justa y mecanismos de certificación participativa que reconozcan el origen cultural del producto (Pimbert, 2018).

La dimensión de género merece tratamiento específico. En gran parte del Pacífico, las mujeres lideran procesos de transformación alimentaria, ventas locales, cuidado de semillas y preparación culinaria. Sin su participación activa en el diseño, la gobernanza y los beneficios de la agroindustria, los proyectos reproducen desigualdades. Incluir escalas de remuneración diferenciadas por actividades, acceso de mujeres a propiedad de equipos, formación técnica dirigida y espacios de decisión paritarios fortalece tanto la equidad como la sostenibilidad económica.

Estudios sobre sistemas alimentarios territoriales muestran que cuando las mujeres controlan parte del excedente, aumenta la inversión en alimentación, educación y salud comunitaria (Pimbert, 2018; Forero, 2013).

La juventud rural enfrenta otro desafío: la migración por falta de oportunidades. Una agroindustria comunitaria puede convertirse en un ancla para la permanencia juvenil si incorpora componentes de innovación digital, mercadeo en línea, trazabilidad y diseño de productos con identidad cultural dirigidos a mercados urbanos emergentes.

Vincular escuelas agropecuarias, instituciones técnicas y organizaciones juveniles a la cadena del chontaduro permite renovar el conocimiento y garantizar relevos

generacionales (van der Ploeg, 2009; FAO, 2023).

No puede perderse de vista el entorno ecológico. Una agroindustria que estimula la sobreexplotación del recurso o la conversión de bosques en monocultivos de chontaduro traicionaría el horizonte de soberanía alimentaria. El manejo agroecológico del cultivo, la diversificación en sistemas agroforestales, el uso eficiente del agua y la valorización de subproductos (cáscaras para compost, aceites para cosmética artesanal, fibras para bioinsumos) ayudan a cerrar ciclos y reducir impactos ambientales (Altieri & Toledo, 2011).

Las certificaciones participativas en agroecología —más accesibles que las orgánicas corporativas— pueden servir como herramientas de identidad territorial y confianza en mercados de proximidad.

Desde el punto de vista estratégico, Buenaventura ofrece condiciones únicas para ensayar un modelo de agroindustria comunitaria articulada al puerto sin subordinarse a él. La cercanía a rutas marítimas podría facilitar exportaciones selectivas de productos de alto valor cultural dirigidos a diásporas afrodescendientes o a mercados especializados de alimentación saludable.

Pero esa articulación debe darse desde acuerdos justos, donde las organizaciones locales retengan la propiedad de la marca, definan los criterios de origen y negocien colectivamente volúmenes y precios. Un modelo escalonado —mercado local fortaleciendo nutrición comunitaria; mercado regional asegurando flujo de caja; mercado externo gradual para excedentes estables— reduce riesgos financieros y evita el abandono del abastecimiento local en función del exportador (Rentería & González, 2020; Forero, 2013).

Finalmente, es importante reconocer que la agroindustria desde abajo no es un camino lineal ni garantizado. Requiere navegar las tensiones entre formalización e inclusión, calidad y acceso, escala y control, inversión y autonomía.

Pero también abre posibilidades de transformación profunda: retener valor en el territorio, dignificar el trabajo rural, fortalecer la identidad alimentaria, crear puentes entre conocimiento tradicional y ciencia aplicada, y convertir un fruto subvalorado en emblema de desarrollo con justicia.

En este sentido, la harina de chontaduro no es solo un producto económico: es una apuesta por reescribir la relación entre Buenaventura y el país, entre el puerto global y las comunidades que sostienen la vida en sus riberas.

Capítulo 3: El chontaduro en la cultura, la economía y el saber popular

En el corazón húmedo del Pacífico colombiano, los ríos se abren paso entre selvas exuberantes y el mar susurra memorias de resistencia; aquí florece un fruto denso de historia: el chontaduro.

Su presencia va más allá de lo nutricional; constituye un símbolo vivo de identidad, una fuente de sustento, un nodo de afectos, y una memoria comestible que conecta generaciones. El chontaduro no es solamente un alimento, es una narrativa territorial cargada de significados, prácticas y posibilidades.

Durante siglos, este fruto ha sido cultivado, recolectado, cocido, conservado, ofrecido y celebrado en los pueblos ribereños, en las ferias populares, en los patios de las casas, en las voces de las mujeres mayores que saben cómo prepararlo sin que pierda su dulzor.

Aunque en las últimas décadas ha sido reducido a un objeto de venta ambulante o a una mercancía ocasional en mercados urbanos, su potencia simbólica y material permanece intacta para quienes lo reconocen como herencia, como recurso y como posibilidad de futuro.

Este capítulo se propone recorrer el universo del chontaduro desde tres dimensiones complementarias: su papel cultural como fruto ancestral cargado de simbolismo y ritualidad; su importancia económica como fuente de ingresos para comunidades rurales y urbanas; y su inscripción en el saber popular, donde la experiencia, la técnica cotidiana y el conocimiento empírico lo han mantenido vivo a pesar del despojo.

En ese camino, abriremos preguntas sobre el valor oculto de los alimentos tradicionales, la invisibilidad del trabajo campesino y femenino, y las posibilidades que ofrece resignificar el chontaduro como eje de una agroindustria con identidad territorial.

3.1 Usos tradicionales y saberes intergeneracionales

El chontaduro (*Bactris gasipaes*), conocido también como pejibaye en Centroamérica, es una palma nativa de las tierras bajas tropicales del continente americano. Su cultivo y consumo en el Pacífico colombiano se remonta a tiempos precoloniales, como parte de los sistemas agrícolas mixtos que articulaban saberes ecológicos, prácticas espirituales y redes de reciprocidad entre comunidades.

Las poblaciones afrodescendientes, al llegar forzadamente al litoral tras el proceso esclavista, encontraron en este fruto no solo un alimento energético, sino también una fuente de arraigo en un entorno biodiverso que exigía adaptación y creatividad (Saldarriaga & Pérez, 2017).

Cocer el chontaduro con sal y acompañarlo con miel o panela ha sido por generaciones una práctica cotidiana en hogares rurales. Pero también ha tenido usos rituales, gastronómicos y medicinales. Se le atribuyen propiedades afrodisíacas, fortalecedoras, regenerativas. En algunas comunidades, se ofrecen a las parteras para reponer fuerzas, o a los niños con bajo peso como alimento nutritivo.

Es parte de las meriendas escolares, de los mercados campesinos, de los festivales gastronómicos, de los saberes que se transmiten de madre a hija. En las ferias populares de Buenaventura, su venta se convierte en un acto cultural, donde el pregón, el color y la textura son parte de la experiencia.

La cocina tradicional del Pacífico ha sabido integrar el chontaduro en múltiples preparaciones: purés, sopas, empanadas, bollos, arepas, bebidas fermentadas. Esta diversidad culinaria no responde a recetas fijas, sino a una lógica de innovación empírica, donde el

conocimiento se adapta al entorno, a la cosecha, a las condiciones del fogón.

Esa flexibilidad es parte de su riqueza y también de su vulnerabilidad, pues al no estar codificada ni formalmente documentada, corre el riesgo de ser descartada por los sistemas técnicos convencionales.

En términos nutricionales, el chontaduro es una fuente significativa de carbohidratos complejos, fibra dietaria, vitaminas A y C, calcio, hierro y ácidos grasos esenciales (Gómez et al., 2020). Su densidad energética lo convierte en un alimento estratégico para enfrentar problemas de malnutrición en comunidades vulnerables.

A diferencia de los productos ultraprocesados, ofrece un perfil nutricional más equilibrado, sin aditivos químicos, y con un bajo impacto ecológico en su producción. Sin embargo, a pesar de estas cualidades, el chontaduro ha sido históricamente subvalorado por las políticas alimentarias y los sistemas de asistencia nutricional estatal.

Reconocer los usos tradicionales del chontaduro implica más que rescatar recetas: implica revalorizar un sistema de vida, una relación con la naturaleza, una cultura alimentaria resistente. Significa reconocer que lo que se ha transmitido por generaciones no es folclor sino conocimiento, no es atraso sino

experiencia situada, y que cualquier proyecto de transformación debe partir del respeto por esos saberes.

3.2 Potencial económico y circuitos de comercialización popular

Más allá de su valor simbólico y nutricional, el chontaduro representa una fuente económica clave para muchas familias en el litoral pacífico. Su recolección, procesamiento, transporte y venta generan ingresos en cadenas informales y locales que, aunque invisibilizadas por las estadísticas oficiales, sostienen economías populares de gran dinamismo.

Se trata de una cadena corta pero viva: desde la finca hasta la plaza, desde el árbol hasta el canasto, desde la cocción hasta el pregón callejero.

En las veredas rurales, la cosecha del chontaduro se realiza en unidades productivas pequeñas, generalmente en sistemas agroforestales donde convive con plátano, yuca, maíz, cacao y otras especies. Esta diversificación protege el ecosistema, reduce riesgos y permite un manejo integrado del suelo y el agua.

Sin embargo, el acceso a mercados es limitado por la falta de vías, transporte adecuado y compradores con capacidad de pago justo. La fruta suele venderse a intermediarios que, al

contar con capital y acceso urbano, imponen precios bajos y se apropian del margen de ganancia.

En los entornos urbanos como Buenaventura, Cali o Quibdó, la venta de chontaduro cocido representa una fuente vital de ingresos para mujeres cabeza de hogar, jóvenes sin empleo formal y pequeños comerciantes. La informalidad, lejos de ser una elección, es una respuesta a la ausencia de mecanismos públicos de apoyo: permisos, carpas, refrigeración, créditos, asistencia técnica. Aun así, estas redes resisten, se reorganizan, y constituyen formas legítimas de economía popular que reclaman reconocimiento y dignidad (Cendales & Vélez, 2019).

El precio del chontaduro es inestable, y varía según la temporada, la calidad del fruto, la distancia al mercado y la abundancia de la cosecha. En épocas de sobreoferta, los precios caen, afectando los ingresos de quienes dependen de su venta.

En períodos de escasez, los compradores urbanos lo sustituyen por otros productos. Esta volatilidad puede mitigarse mediante procesos de transformación que alarguen su vida útil y abran nuevos nichos de comercialización.

La harina de chontaduro aparece aquí como una posibilidad económica concreta. Su

elaboración permite conservar el alimento por más tiempo, diversificar su uso, reducir costos de transporte y acceder a mercados más estables.

Sin embargo, para que este proceso beneficie realmente a las comunidades productoras, es necesario construir modelos de comercialización que no reproduzcan las lógicas de despojo, que garanticen precios justos, y que conecten la identidad del producto con una narrativa territorial potente.

La agroindustria del chontaduro debe pensarse desde el entramado de la economía popular: no como sustituto, sino como potenciador. Articular la transformación con los circuitos ya existentes —plazas de mercado, cooperativas, redes de consumo solidario, tiendas comunitarias— puede generar sinergias virtuosas. Y al mismo tiempo, permite visibilizar un modelo económico que no busca acumular capital, sino sostener la vida.

3.3 El saber popular como tecnología invisible

Uno de los grandes errores de las políticas de desarrollo ha sido asumir que las comunidades empobrecidas no tienen tecnología. Esta mirada colonizadora parte de una visión estrecha del conocimiento, que sólo considera como

“técnico” aquello que ha sido validado por laboratorios, manuales o certificaciones oficiales.

Pero en los territorios como el Pacífico, la tecnología está viva en las manos, en las conversaciones, en las rutinas. En cómo se cosecha sin dañar el árbol. En cómo se hierve el chontaduro sin perder nutrientes. En cómo se organiza el tiempo entre siembra, cocina y venta.

Este saber popular es una forma de ingeniería cotidiana. Tiene reglas, fundamentos, protocolos y evaluación empírica. Es perfeccionado con la experiencia, se transmite por observación y diálogo, y se adapta a las variaciones del clima, del mercado o del territorio.

Pero rara vez es documentado, y con frecuencia es despreciado por los proyectos institucionales que llegan desde afuera con modelos predefinidos.

En el caso del chontaduro, las mujeres que lo transforman conocen con precisión los tiempos de cocción según el tamaño del fruto, el tipo de agua y el estado de madurez. Saben cuáles frutos sirven para conserva, cuáles para arepas, cuáles para harina. Conocen los secretos para lograr textura, sabor y durabilidad. Pero rara vez se les consulta cuando se diseñan equipos, se definen estándares o se elaboran manuales técnicos.

Incluir el saber popular en el diseño de procesos agroindustriales no es una concesión cultural, es una decisión estratégica. Significa construir tecnologías que funcionen en el terreno, que no dependan de expertos externos, que puedan ser reparadas con herramientas locales y que respeten los tiempos y capacidades de quienes las operan.

Significa reconocer que sin ese saber, la innovación no enraíza, y que cualquier intento de industrialización que lo ignore está condenado al fracaso.

Más aún, reconocer el saber popular es un acto de justicia epistémica. Es afirmar que la inteligencia está distribuida, que la técnica no es patrimonio de unos pocos, y que los territorios como Buenaventura son productores legítimos de conocimiento.

Una harina de chontaduro que integra ese saber, que respeta sus prácticas y que lo fortalece, será más que un producto viable: será una expresión tangible de dignidad tecnológica.

Capítulo 4: Innovar desde lo propio: harina de chontaduro como apuesta territorial

En Colombia la innovación ha sido asociada con el acceso a tecnologías importadas, la presencia de laboratorios de punta o la vinculación con el sector empresarial de élite. Aquí hablar de “innovar desde lo propio” parecería un gesto contraintuitivo.

Sin embargo, en un territorio históricamente excluido del modelo de desarrollo dominante, como el Pacífico colombiano, esta expresión tiene una fuerza emancipadora.

Ya no se trata de replicar fórmulas externas bajo condiciones desfavorables, sino de partir de los recursos, conocimientos, necesidades y aspiraciones del territorio para construir soluciones viables, pertinentes y sostenibles. En ese sentido, la transformación del chontaduro en harina no es únicamente un proceso técnico, sino un acto político, cultural y epistémico.

El paso del fruto fresco a un producto estable y con valor agregado representa una decisión estratégica en múltiples dimensiones. Implica prolongar la vida útil del alimento, reducir pérdidas poscosecha, facilitar su transporte y

almacenamiento, abrir nuevos usos culinarios y expandir su potencial comercial.

Pero también significa resignificar una práctica tradicional como base para la generación de ingresos, el fortalecimiento de la economía campesina y el reposicionamiento del chontaduro como bien estratégico. Al convertir el fruto en harina, no se elimina su identidad cultural, sino que se transforma para ampliar su capacidad de incidencia en el sistema alimentario.

Esta apuesta surge de una lectura crítica de la dependencia alimentaria que caracteriza a Buenaventura y a muchas otras regiones del país. A pesar de contar con ecosistemas fértiles, diversidad agrícola y saberes acumulados, buena parte de los alimentos que se consumen en la ciudad provienen de otras regiones o del extranjero.

Esta desconexión entre producción y consumo local no es producto del azar, sino de una historia de centralización logística, debilitamiento de los circuitos campesinos y desinversión en infraestructura productiva de pequeña escala. Frente a ello, iniciativas como la harina de chontaduro se inscriben en una agenda de relocalización alimentaria, de reapropiación de los medios de vida y de construcción de autonomía territorial.

El presente capítulo se propone explorar con profundidad esta iniciativa, situando su origen en procesos comunitarios, analizando su potencial como alternativa a la dependencia externa, y examinando los desafíos técnicos, organizativos y políticos que supone su escalamiento.

A diferencia de los proyectos que promueven la agroindustria como sinónimo de crecimiento económico abstracto, este enfoque plantea que la innovación solo tiene sentido si fortalece el arraigo, la equidad y la sostenibilidad desde el territorio. La harina de chontaduro es, entonces, un vehículo para imaginar otro tipo de desarrollo: más cercano, más justo, más nuestro.

4.1 Origen comunitario de la propuesta

La harina de chontaduro no surgió en un laboratorio industrial, ni es un resultado de una convocatoria de innovación tecnológica financiada por actores externos.

Su origen es más humilde, pero también más poderoso: emerge del seno de comunidades organizadas, de mujeres transformadoras de alimentos, de productores que no se resignan a vender su fruto a precios ínfimos, y de jóvenes que, entre el desempleo y la migración, buscaron una alternativa desde el territorio.

Como muchas otras innovaciones populares, esta propuesta nace de la necesidad, pero también de la esperanza.

En los barrios La Playita, El Progreso y El Jorge, las redes comunitarias siguen siendo una fuente primaria de subsistencia y afecto, aquí el chontaduro ha sido históricamente parte de la dieta cotidiana y de los ingresos familiares. Vender el fruto en mercados informales, procesarlo en mermeladas artesanales o en bebidas nutritivas ha sido una práctica común.

Sin embargo, los límites del fruto perecedero —su corta vida útil, su sensibilidad al calor, su peso para el transporte— han restringido su potencial. En medio de esas limitaciones, mujeres como doña María Arboleda y colectivos como la Asociación de Productores Agroecológicos del Pacífico (APAP) comenzaron a experimentar con formas de conservación que no dependieran de refrigeración ni de intermediarios.

Fue así como surgieron las primeras pruebas de deshidratación del chontaduro, inicialmente al sol y luego con hornos caseros adaptados, hasta lograr una textura y sabor que permitieran su conversión en polvo fino.

El proceso fue lento, empírico, hecho por ensayo y error, pero también fue profundamente colectivo. No había un solo

saber técnico, sino una conjunción de conocimientos: la experiencia de las matronas sobre el punto justo de cocción, el saber empírico de los jóvenes sobre el secado, y el apoyo de algunos docentes rurales que aportaron nociones básicas de microbiología e higiene alimentaria. En palabras de los propios actores, “fue el barrio el que inventó la harina”.

Este origen comunitario no debe entenderse como una carencia de profesionalismo. Por el contrario, expresa una forma situada de hacer ciencia y tecnología desde abajo, como plantea el sociólogo Orlando Fals Borda (1985) en su noción de *investigación-acción participativa*.

Lejos de reproducir la dependencia hacia expertos externos o protocolos foráneos, la comunidad se constituyó en sujeto de conocimiento, capaz de interpretar su entorno, identificar soluciones y generar procesos de transformación.

La vinculación posterior con organizaciones no gubernamentales y centros de educación popular permitió sistematizar el proceso, mejorar condiciones sanitarias, estandarizar etapas y comenzar a pensar en escalabilidad. Sin embargo, los líderes del proyecto insistieron siempre en que el control debía permanecer en manos locales.

No se trataba de “donar la idea” ni de “entregar el negocio”, sino de fortalecer capacidades organizativas, construir infraestructura adecuada y garantizar que los beneficios de la cadena no fueran capturados por actores externos. Como lo afirmó en una entrevista una de las fundadoras del proceso: “La harina no es para enriquecer a alguien, es para que todos comamos mejor y tengamos trabajo aquí mismo”.

Este enfoque se alinea con los postulados de la economía social y solidaria, que plantea la producción no como una mera actividad lucrativa, sino como una práctica de reproducción de la vida (Coraggio, 2011).

La harina de chontaduro, en este sentido, es un producto, sí, pero también es un símbolo: de autonomía, de reapropiación tecnológica, de empoderamiento femenino y de posibilidad económica en medio de la exclusión. Su origen comunitario le otorga no solo legitimidad social, sino también sostenibilidad cultural.

Además, el proceso se ha articulado con una red más amplia de iniciativas territoriales, como las huertas escolares, los comedores comunitarios y los mercados campesinos, generando sinergias que refuerzan el enfoque de soberanía alimentaria. La harina no es una estrategia aislada: es un nodo en una red de prácticas que apuestan por relocalizar la

alimentación, reducir la dependencia externa y construir alternativas desde los márgenes.

El reto, por supuesto, es enorme. Sostener una iniciativa de este tipo exige enfrentar obstáculos logísticos, sanitarios, financieros y políticos. Pero el punto de partida es sólido: no es una propuesta impuesta ni artificial, sino enraizada en la vida real de comunidades que han aprendido a innovar no con capital financiero, sino con inteligencia colectiva, solidaridad y memoria viva. En un país donde muchas veces las “soluciones” llegan de afuera, la harina de chontaduro recuerda que también es posible transformar el futuro desde adentro.

4.2 Alternativas a la dependencia alimentaria externa

La historia alimentaria de Buenaventura está marcada por una paradoja dolorosa: un territorio exuberante en biodiversidad, saberes y prácticas agrícolas que, sin embargo, depende en gran medida de productos importados de otras regiones del país o incluso del extranjero para alimentar a su población. Esta dependencia no es una falla técnica ni una consecuencia de la supuesta “ineficiencia” de los pequeños productores, como muchas veces se insinúa desde enfoques economicistas.

Es, más bien, el resultado de una estructura logística, económica y política que ha centralizado la producción, concentrado el valor agregado en los grandes centros urbanos y relegado a los territorios periféricos al papel de simples consumidores o proveedores de materias primas.

La harina de chontaduro, como propuesta agroindustrial territorial, se inscribe en una corriente alternativa que busca disputar esta configuración. A diferencia del modelo hegemónico, que privilegia la importación de harinas refinadas (de trigo, maíz industrial, avena procesada) provenientes de monocultivos tecnificados y cadenas largas de distribución, esta propuesta plantea una reconfiguración radical: producir, transformar y consumir en el mismo territorio, fortaleciendo los vínculos entre campo y ciudad, entre productor y consumidor, entre cultura y economía.

Esta estrategia se alinea con lo que autores como Jan Douwe van der Ploeg (2008) denominan “nuevas ruralidades”, es decir, formas emergentes de economía agraria que combinan producción alimentaria, conservación ambiental, redes de solidaridad y arraigo territorial.

Desde esta perspectiva, el problema no es simplemente la falta de alimentos, sino la falta de control sobre su origen, transformación y

distribución. Recuperar ese control —a través de iniciativas como la harina de chontaduro— implica avanzar hacia formas más democráticas y sostenibles de organización del sistema alimentario.

Los efectos de la dependencia alimentaria en Buenaventura son múltiples. En términos económicos, se traducen en altos precios de los productos básicos, volatilidad del abastecimiento y vulnerabilidad frente a bloqueos logísticos.

En términos sociales, generan inseguridad alimentaria crónica, especialmente en los hogares con menores ingresos. Y en términos culturales, promueven una dieta cada vez más desconectada de los sabores, saberes y productos locales. En este contexto, sustituir parte de las harinas importadas por una harina producida localmente no es un gesto menor: es un acto de recuperación de soberanía, de dignificación del alimento y de reapropiación del paladar.

Pero más allá del producto en sí, lo que está en juego es el modelo de desarrollo territorial. Las propuestas de innovación local como esta permiten pensar en circuitos cortos de comercialización, en articulaciones con políticas públicas de compras locales, en la creación de empleo digno en el territorio, en el fortalecimiento de capacidades técnicas desde la

educación popular y en la generación de redes de economía solidaria. En lugar de esperar que el desarrollo llegue desde el centro, estas alternativas lo construyen desde los márgenes.

Ahora bien, esto no significa idealizar la producción local ni desconocer los desafíos reales que enfrenta. La harina de chontaduro, para convertirse en una verdadera alternativa, debe superar barreras sanitarias, contar con equipos apropiados, garantizar estándares de calidad, acceder a mercados estables y recibir respaldo institucional.

Sin embargo, su potencial es enorme, especialmente si se articula con otras estrategias: la diversificación agrícola, la asociatividad campesina, la educación alimentaria, la investigación colaborativa y el apoyo técnico contextualizado.

Los aprendizajes de otras experiencias latinoamericanas pueden ser muy útiles en este punto. En países como Ecuador, Bolivia o Brasil, se han impulsado iniciativas de transformación local de productos amazónicos o andinos (como la yuca, el camote o el plátano) en harinas, galletas o bebidas con valor agregado.

Muchas de estas propuestas han sido impulsadas por mujeres rurales, comunidades indígenas o redes de economía solidaria, y han demostrado que es posible competir —no en

términos de escala o precio—, sino en términos de calidad, pertinencia y sostenibilidad (Altieri & Toledo, 2011).

Desde esta mirada, la harina de chontaduro no es simplemente un alimento funcional, sino un vehículo para disputar poder en el sistema agroalimentario. Representa una alternativa concreta a la dependencia estructural, pero también una forma de afirmar que la innovación puede ser popular, que la soberanía alimentaria es posible y que los territorios excluidos no solo resisten, sino que también crean.

4.3 Tecnología apropiada, escalabilidad y sostenibilidad desde el territorio

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las propuestas productivas nacidas en el seno de las comunidades es el tránsito desde la experiencia piloto o artesanal hacia modelos sostenibles a mayor escala.

En el caso de la harina de chontaduro, la cuestión de la tecnología apropiada se vuelve central: ¿cómo escalar sin desvirtuar el carácter territorial y comunitario de la propuesta? ¿Cómo ampliar su alcance sin ceder a los modelos extractivos de la agroindustria convencional?

La noción de tecnología apropiada, desarrollada desde las décadas de 1970 y 1980 por pensadores como Ernst Schumacher (1973), propone una alternativa a las tecnologías impuestas desde fuera, costosas, complejas y desarraigadas.

En su lugar, promueve soluciones técnicas que sean accesibles, replicables, culturalmente pertinentes y sostenibles desde lo ambiental y lo económico.

Esta idea ha sido retomada por movimientos latinoamericanos de economía popular y soberanía tecnológica, quienes insisten en que la innovación no debe medirse solo por su sofisticación técnica, sino por su capacidad de resolver problemas reales desde contextos específicos.

En Buenaventura, esta discusión cobra especial relevancia. La harina de chontaduro no puede depender de maquinaria importada o procesos controlados por multinacionales. Necesita tecnologías que puedan adaptarse a la humedad, a las limitaciones energéticas locales, a los saberes existentes y a la capacidad organizativa de los grupos que la impulsan.

En ese sentido, las experiencias con secadores solares artesanales, hornos de biomasa y molinos de baja potencia resultan más

estratégicas que las grandes plantas industriales.

Varios colectivos del litoral han comenzado a trabajar con universidades públicas y centros de innovación social para adaptar tecnologías a las condiciones del Pacífico. Esta colaboración, lejos de reproducir la lógica vertical de la asistencia técnica tradicional, se ha planteado como una co-construcción de soluciones.

Ingenieros, técnicos y diseñadores han trabajado junto a mujeres transformadoras de alimentos, líderes barriales y jóvenes innovadores para construir prototipos de equipos que respondan a los requerimientos del chontaduro y al mismo tiempo sean operables en condiciones de baja infraestructura.

Pero la escalabilidad no es solo una cuestión técnica. Supone pensar también en modelos organizativos que permitan sostener la producción en el tiempo, distribuir el trabajo de manera equitativa y garantizar el acceso a mercados sin intermediación abusiva. Aquí es donde las cooperativas, las asociaciones de base y las redes solidarias se convierten en actores clave.

La experiencia de la Red de Mujeres Transformadoras del Pacífico (REMUTRA), por ejemplo, ha mostrado que es posible consolidar una cadena productiva con enfoque territorial,

control comunitario y sostenibilidad financiera si se cuenta con apoyo organizativo, acompañamiento técnico y voluntad política local.

Asimismo, la sostenibilidad ambiental debe ser considerada como un eje transversal en todo el proceso. La producción masiva de chontaduro sin criterios agroecológicos podría convertirse, paradójicamente, en un nuevo factor de degradación de los suelos, pérdida de biodiversidad y sobreexplotación de recursos.

Por ello, varios grupos promotores han propuesto integrar esta iniciativa en sistemas agroforestales, donde el chontaduro conviva con otros cultivos nativos, se promueva el manejo ecológico del suelo y se mantenga el equilibrio del ecosistema.

Este enfoque ha sido respaldado por estudios como los de Altieri y Nicholls (2017), quienes argumentan que los sistemas agroecológicos no solo son más sostenibles ambientalmente, sino que pueden ser altamente productivos si se adaptan a las condiciones locales. La harina de chontaduro, entonces, no debe convertirse en un nuevo monocultivo, sino en una pieza de un mosaico agroalimentario diverso, resiliente y culturalmente arraigado.

Finalmente, el éxito de esta iniciativa dependerá de su inserción en una visión de

desarrollo local que no se limite a lo económico. Es necesario que los gobiernos locales reconozcan su potencial estratégico, que las políticas públicas favorezcan la compra local, que se creen incentivos para la investigación territorializada, y que las instituciones educativas incluyan estos procesos en sus agendas formativas.

La sostenibilidad no es solo mantener un producto en el mercado: es asegurar que ese producto contribuya a fortalecer la vida, la autonomía y la dignidad de quienes lo producen.

Desde esta perspectiva, la harina de chontaduro no necesita convertirse en una “industria” en el sentido clásico del término. Puede —y debe— crecer de forma enraizada, cuidando sus principios, replicando su lógica en otros territorios y conectándose con redes de economía alternativa. Su fuerza no está en la escala masiva, sino en su coherencia con un proyecto de territorio vivo, creativo y autónomo.

Innovar desde lo propio: harina de chontaduro como apuesta territorial

La harina de chontaduro no es únicamente una alternativa alimentaria o un producto con potencial económico. Es, sobre todo, una propuesta que encarna un modo distinto de pensar el desarrollo en territorios históricamente relegados como Buenaventura.

Frente a los discursos que identifican la innovación con la adopción de tecnologías foráneas o con la maximización de ganancias en mercados globales, esta experiencia demuestra que la innovación también puede nacer desde abajo, desde las prácticas comunitarias, desde el diálogo entre saberes, desde la voluntad de construir otra economía posible.

El paso del fruto tradicional al producto transformado supone, por supuesto, retos técnicos, sanitarios, logísticos y organizativos. Pero esos desafíos no invalidan su viabilidad; por el contrario, demandan procesos de acompañamiento institucional sensibles al contexto, políticas públicas que reconozcan el valor de las iniciativas locales y mecanismos de financiamiento que se adapten a las escalas comunitarias.

Si el Estado quiere contribuir de forma efectiva a la soberanía alimentaria, debe dejar de ver a los territorios como receptores pasivos y empezar a reconocerlos como generadores activos de soluciones.

La harina de chontaduro, producida, transformada y consumida en Buenaventura, simboliza una ruptura con la lógica extractivista que ha caracterizado las relaciones entre centro y periferia en Colombia. Más que un bien de mercado, representa una apuesta por la vida digna, por la revalorización de los saberes

ancestrales, por la reconexión con los ciclos de la tierra y por la autonomía alimentaria de las comunidades. Es una semilla de futuro sembrada en un presente adverso, pero lleno de creatividad y esperanza.

Así, este capítulo ha mostrado que innovar desde lo propio no es un gesto romántico ni un proyecto menor. Es una estrategia profundamente política, profundamente técnica y profundamente humana. Una estrategia que, si se consolida y se multiplica, puede contribuir a revertir la dependencia alimentaria, fortalecer las economías locales y abrir caminos hacia una verdadera justicia territorial.

Capítulo 5: Economía del chontaduro

En las regiones húmedas del Pacífico colombiano, el chontaduro (*Bactris gasipaes*) es mucho más que un fruto tropical de alto valor nutritivo. Representa una memoria agrícola milenaria, una práctica alimentaria ancestral y una posibilidad concreta de construir soberanía económica desde la biodiversidad y el arraigo territorial.

Su cultivo, transformación y comercialización configuran una economía de rostro humano, tejida a partir de conocimientos tradicionales, tecnologías apropiadas y vínculos comunitarios. Lejos de ser un simple insumo para mercados globales, el chontaduro constituye una apuesta integral por la vida digna en contextos históricamente marcados por la desigualdad estructural, el extractivismo y la exclusión institucional.

Desde la perspectiva agroecológica y cultural, el chontaduro ha sido estudiado por investigadores como Agudelo, Caicedo (2003), quienes documentan los procesos de manejo fitosanitario con énfasis en la sostenibilidad ecológica.

Su artículo sobre el control integrado de barrenadores del fruto en la Costa Pacífica permite comprender cómo la salud del cultivo depende no solo de medidas técnicas, sino también del diálogo entre saberes locales y conocimientos científicos.

Este enfoque relacional se fortalece cuando se incorpora la dimensión organizativa y socioeconómica, como muestran los trabajos de Mosquera Patterson y Correa Díaz (2007), quienes analizaron la estructura productiva del chontaduro en Tumaco y evidenciaron la centralidad de la economía campesina y familiar en el sostenimiento de los sistemas agroalimentarios locales.

En la misma línea, Ambrosio et al. (2020) subrayan la importancia de pensar el chontaduro no como una materia prima aislada, sino como parte de una red de sentidos que conecta lo agrícola con lo gastronómico, lo técnico con lo simbólico. Su obra colectiva, *Chontaduro & coco: En salsa de ciencia, cultura y técnica*, constituye un aporte clave para comprender la economía del chontaduro como una práctica multidimensional donde convergen procesos de transformación alimentaria, identidad cultural y gestión económica.

En este enfoque interseccional, la agroindustria comunitaria no es entendida únicamente como un medio de generación de ingresos, sino como una herramienta de afirmación cultural, revalorización de saberes propios y construcción de autonomía local.

Un aporte central para esta comprensión ampliada del chontaduro como sistema socioeconómico lo brinda el investigador etnoecólogo, ingeniero agrónomo, Biólogo Luis Carlos Pardo Locarno, quien ha insistido en el carácter polisémico del fruto en las culturas afrodescendientes y amerindias del Pacífico.

Desde una lectura crítica de la economía política del territorio, Pardo-Locarno (2017, 2022) propone leer el chontaduro como símbolo de resistencia ecológica y económica frente a las lógicas de desposesión. En sus investigaciones sobre cocinas tradicionales, itinerarios bioculturales y gobernanza de la biodiversidad, se destaca cómo el chontaduro articula un campo de luchas por el reconocimiento, la redistribución y la reexistencia. Así, la economía del chontaduro no puede reducirse a cifras de rentabilidad o métricas de mercado: es también una praxis civilizatoria que defiende modos de vida.

Este capítulo propone una aproximación crítica y aplicada a dicha economía. No solo se trata de estimar viabilidad financiera o proyectar inversiones, sino de comprender cómo la gestión agroindustrial del chontaduro puede anclarse en modelos asociativos, estructuras de costos contextualizadas, mecanismos de control social y gobernanza ética.

Frente a los modelos extractivos o verticales de agroindustria convencional, se plantea aquí la necesidad de construir formas de producción con identidad, es decir, formas económicas que nazcan del territorio, respeten su complejidad ecológica y fortalezcan las capacidades colectivas de sus habitantes. El chontaduro, en este sentido, se convierte en lente y palanca para pensar otra economía: una economía desde el margen, con centro en la vida.

5.1. La agroindustria del chontaduro como unidad productiva: análisis económico y estructura de costos

En el Pacífico colombiano, la transformación del chontaduro (*Bactris gasipaes*) en una unidad económica estructurada implica un proceso que va mucho más allá del cultivo tradicional. Su aprovechamiento agroindustrial requiere planificación financiera, definición de una

estructura de costos eficiente, modelos de gobernanza comunitaria y decisiones técnicas ajustadas a realidades socioterritoriales.

Frente a las limitaciones de las cadenas productivas agroexportadoras convencionales, la agroindustria del chontaduro emerge como una experiencia económicamente viable y socialmente pertinente cuando se implementa desde enfoques asociativos, con base en principios de agroecología y economía solidaria.

La elección de un modelo productivo basado en unidades asociativas de pequeña escala responde a condiciones reales observadas en municipios como Tumaco, Guapi y Buenaventura, donde las experiencias de procesamiento local son impulsadas por asociaciones campesinas y de mujeres rurales (Mosquera Patterson & Correa Díaz, 2007). Estas unidades transformadoras suelen contar con equipamiento básico para lavado, cocción, deshidratado, molienda y empaque del fruto, sin requerimientos tecnológicos sofisticados, pero con desafíos en estandarización, volumen y certificación sanitaria.

Desde el punto de vista de costos, el cultivo de *Bactris gasipaes* en sistemas agroforestales mixtos tiene una productividad estimada entre

10 y 20 toneladas por hectárea/año (Agudelo et al., 2021). El costo anual de producción primaria ronda los \$4.000.000 a \$5.500.000 COP por hectárea, incluyendo labores culturales, fertilización orgánica, cosecha y transporte local. Estos datos corresponden a sistemas de producción sostenibles con bajo uso de insumos externos, orientados a la venta local del fruto fresco o su transformación inmediata.

En la fase de procesamiento, el rendimiento del chontaduro cocido convertido en harina varía entre 23 % y 27 %, dependiendo del contenido de humedad y del tipo de deshidratador utilizado. Esto implica que para obtener un kilogramo de harina se requieren entre 3,7 y 4,3 kilogramos de fruto fresco. Asumiendo un precio de compra de \$1.000 COP/kg de fruto, el costo de materia prima por cada kg de harina se sitúa entre \$3.700 y \$4.300 COP.

A este componente se suman los costos de transformación, que incluyen:

- Mano de obra (operarios, manipuladores y supervisión): \$1.200–\$1.500 COP/kg
- Energía eléctrica o gas para deshidratación: \$400–\$600 COP/kg

- Empaque (bolsa sellada, etiqueta, fecha de vencimiento): \$400–\$600 COP/kg
- Gastos administrativos y mantenimiento: \$800–\$1.000 COP/kg

Esto genera un costo total promedio de entre \$6.500 y \$7.800 COP/kg de harina terminada, en condiciones de operación comunitaria.

Cuando se comercializa a través de ferias agroecológicas, mercados campesinos o puntos de venta especializados en productos saludables, el precio de venta puede alcanzar entre \$10.000 y \$13.000 COP/kg. Este margen genera una ganancia bruta estimada entre el 25 % y el 40 %, aunque este porcentaje se reduce si se incluyen costos de distribución y transporte a zonas urbanas.

Desde el punto de vista financiero, el punto de equilibrio mensual —es decir, el volumen mínimo de venta requerido para cubrir todos los costos operativos— puede estimarse mediante la fórmula clásica:

Punto de equilibrio = Costos fijos mensuales /
Margen de contribución por kg

Si los costos fijos mensuales (administración, alquiler, mantenimiento básico) ascienden a \$2.500.000 COP y el margen de contribución

promedio por kilogramo es de \$3.000 COP, el punto de equilibrio será:

$2.500.000 / 3.000 = 833$ kg/mes de harina, lo cual implica que la planta debe producir y vender al menos 833 kg al mes para ser autosostenible. Esta meta es alcanzable si se trabaja cinco días a la semana con un procesamiento de 40 kg/día, manteniendo un sistema semiartesanal con supervisión técnica adecuada.

Las experiencias sistematizadas por Ambrosio et al. (2020) en plantas comunitarias del litoral Pacífico indican que los niveles de rentabilidad más sostenidos se alcanzan cuando las asociaciones logran cerrar el ciclo productivo (desde la siembra hasta el empaque final), reduciendo la dependencia de intermediarios y diversificando la oferta (harinas, snacks, premezclas, panificación artesanal).

Estas estrategias no solo mejoran los indicadores financieros, sino que promueven un modelo de negocio con identidad territorial, basado en principios de equidad, trazabilidad y consumo responsable.

Comparativamente, las proyecciones financieras del chontaduro se alinean con otras agroindustrias comunitarias de cultivos como el

plátano, la yuca o el ñame. Según Altieri y Nicholls (2020), los sistemas productivos con orientación agroecológica y control comunitario tienden a presentar menores costos externos, mayor resiliencia ante fluctuaciones de mercado y mejores retornos sociales, aunque su rentabilidad financiera bruta sea más modesta frente a los modelos industriales intensivos.

Este equilibrio entre sostenibilidad y eficiencia es lo que convierte a la agroindustria del chontaduro en una apuesta estratégica para el desarrollo rural incluyente.

En suma, entender la agroindustria del chontaduro como unidad productiva exige una visión sistémica que articule variables técnicas, económicas, organizativas y territoriales. Su sostenibilidad no depende exclusivamente del precio de mercado, sino de la capacidad de las comunidades para gestionar colectivamente el valor agregado, asegurar la calidad sanitaria, diversificar los productos y generar confianza con el consumidor. Más que un negocio, se trata de una práctica económica con sentido político, cultural y ecológico.

5.2. Viabilidad financiera y proyección económica del proyecto comunitario

La viabilidad financiera de una planta comunitaria de procesamiento de chontaduro debe evaluarse como una estrategia de sostenibilidad económica, organizativa y territorial. Transformar este fruto en harina u otros derivados exige calcular la inversión inicial, proyectar flujos de ingresos y egresos, y prever los escenarios de rentabilidad en un contexto marcado por la informalidad económica, la baja capacidad de apalancamiento financiero y los desafíos logísticos que enfrentan los emprendimientos rurales en el litoral Pacífico.

Según estimaciones adaptadas de experiencias comunitarias en Tumaco, Guapi y Buenaventura, la inversión para el montaje de una unidad básica de transformación oscila entre 40 y 60 millones de pesos colombianos, considerando la adquisición de deshidratadores, molinos, tamizadoras, equipos de empaque y utensilios sanitarios.

A ello debe sumarse un capital de trabajo equivalente a por lo menos tres meses de operación, lo cual eleva la inversión total proyectada a un rango estimado entre 70 y 85

millones de pesos colombianos para una planta que procese entre 80 y 100 kilogramos diarios de fruto cocido (Ambrosio et al., 2020).

Estos montos pueden ser gestionados parcialmente a través de alianzas con programas públicos de desarrollo rural. En Colombia, el Ministerio de Agricultura y la FAO han documentado que los proyectos agroindustriales de pequeña escala en territorios étnicos enfrentan barreras estructurales de acceso a crédito y mercados, por lo que requieren esquemas de financiación mixta, acompañamiento técnico y procesos formativos en gestión financiera (FAO, 2023).

Con una operación mensual de dos toneladas de chontaduro cocido y una tasa de conversión promedio del 25 %, se producirían aproximadamente 500 kilogramos mensuales de harina. Si el costo total por kilogramo se sitúa en 7.500 pesos y el precio de venta estimado se ubica en 11.000 pesos por kilogramo, los ingresos brutos mensuales ascenderían a 5.500.000 pesos, con un margen bruto de 1.750.000 pesos. Si se considera un nivel de costos fijos mensuales cercano a los 2.000.000 de pesos, el punto de equilibrio financiero se alcanzaría con la venta de 833 kilogramos de harina al mes. Esta meta puede lograrse con una

operación constante y una estrategia de comercialización directa a consumidores finales, sin depender de intermediarios.

Una experiencia ilustrativa que reafirma esta proyección es la de la Asociación Agromujeres de Tumaco, que con apoyo técnico y financiero logró implementar una planta artesanal de transformación de chontaduro y plátano. En su segundo año de operación, la asociación alcanzó niveles de rentabilidad del 20 al 30 por ciento, al integrar los procesos de transformación, empaque y comercialización en ferias agroecológicas y programas públicos de alimentación.

Los factores clave de este desempeño fueron la apropiación local de los procesos, el liderazgo comunitario femenino y la implementación de herramientas contables básicas para la toma de decisiones (Mosquera Patterson & Correa Díaz, 2007).

Desde la evaluación financiera clásica, aplicando indicadores como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el periodo de recuperación de la inversión, se puede anticipar un comportamiento positivo en horizontes de cinco años. El VPN, calculado con una tasa de descuento del 10 %, resulta positivo cuando se

comercializan más de 600 kilogramos mensuales de harina.

La TIR proyectada oscila entre el 17 y el 22 por ciento, dependiendo de la regularidad en las ventas y la eficiencia en los costos. El periodo promedio de recuperación de la inversión se ubica en torno a los 30 meses, en condiciones de operación estable y con canales de distribución consolidados.

Estas estimaciones se alinean con la literatura especializada en administración financiera para pequeñas empresas agroindustriales, como la presentada por Gitman y Zutter (2015), quienes destacan que en los proyectos comunitarios la rentabilidad financiera está estrechamente ligada a la gobernanza organizacional, más que a la escala productiva.

Ahora bien, más allá de los indicadores financieros, la sostenibilidad del proyecto exige una lectura multidimensional de sus riesgos y fortalezas. Entre los desafíos se encuentran la variabilidad en la oferta del fruto durante ciertas temporadas, la inestabilidad de la demanda cuando no existen relaciones comerciales duraderas, y las dificultades logísticas que implica escalar la producción con estándares sanitarios exigentes.

Frente a estas amenazas, la experiencia muestra que las asociaciones logran mayor sostenibilidad cuando diversifican sus productos, establecen vínculos con circuitos de comercio justo, implementan sistemas básicos de gestión contable y desarrollan capacidades internas en educación financiera. Esta combinación de factores permite no solo reducir la exposición a riesgos financieros, sino también fortalecer la autonomía colectiva.

Finalmente, es importante destacar que la viabilidad del proyecto no debe evaluarse únicamente por su rentabilidad contable. También debe considerarse su impacto en la generación de empleo digno, en la redistribución equitativa del valor agregado y en la consolidación de sistemas agroalimentarios territoriales.

En este sentido, el desarrollo de la agroindustria del chontaduro se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo, y con el ODS 12, que aboga por modalidades responsables de producción y consumo. Esta articulación le otorga legitimidad política, proyección internacional y sentido transformador a una

actividad económica que nace del territorio y responde a sus realidades profundas.

5.3. Modelos de gestión comunitaria y gobierno corporativo en emprendimientos territoriales

La agroindustria comunitaria del chontaduro plantea un desafío doble: consolidarse como una alternativa económica viable y, al mismo tiempo, sostener una estructura organizativa que garantice el control colectivo, la transparencia y la distribución equitativa de los beneficios. No se trata únicamente de producir y vender, sino de construir un modelo de gestión coherente con las dinámicas territoriales, los principios de economía solidaria y la defensa del valor comunitario del trabajo.

En el Pacífico colombiano, la figura predominante para este tipo de emprendimientos ha sido la asociación comunitaria, generalmente conformada por pequeños productores, recolectoras, cocineras tradicionales y jóvenes rurales con formación técnica básica. Estas asociaciones, como lo evidencian Mosquera Patterson y Correa Díaz (2007), han surgido como respuesta organizativa ante la ausencia histórica de apoyo estatal efectivo y frente al avance de economías

extractivas que concentran el valor en manos externas al territorio.

En Tumaco, por ejemplo, varias organizaciones lideradas por mujeres han logrado consolidar redes de producción y transformación de chontaduro, plátano y yuca, demostrando que la gestión comunitaria puede ser eficaz cuando está respaldada por liderazgo local, conocimiento compartido y una estructura organizativa mínima.

No obstante, la sostenibilidad de estos modelos requiere superar ciertos obstáculos recurrentes. Uno de los más frecuentes es la informalidad administrativa: la ausencia de contabilidad básica, registros de ventas, inventarios organizados o actas de reuniones.

Estos elementos, aunque considerados secundarios en muchas experiencias comunitarias, son claves para construir confianza entre los miembros, acceder a recursos públicos o privados y sostener una visión de largo plazo. En ese sentido, Gitman y Zutter (2015) insisten en que cualquier unidad productiva, por pequeña que sea, debe incorporar prácticas mínimas de gobierno corporativo: claridad en las funciones, rotación de responsabilidades, rendición de cuentas y

mecanismos internos de resolución de conflictos. Estos principios, adaptados a la escala local, constituyen la base de un modelo de gestión comunitaria funcional.

Existen también experiencias que han apostado por esquemas de economía popular y solidaria, en los que la toma de decisiones se hace por consenso, los excedentes se reinvierten en el fortalecimiento del proceso colectivo y se prioriza la contratación interna de mano de obra local. En estos casos, como destacan Altieri y Nicholls (2020), la eficiencia no se mide únicamente por los indicadores financieros clásicos, sino por la capacidad de sostener vínculos sociales, distribuir aprendizajes y garantizar la permanencia de las familias en sus territorios.

Una experiencia ejemplar en este sentido ha sido la Asociación de Productoras del Alto Mira y Frontera, en el sur de Nariño, donde se ha logrado implementar un modelo de cogestión territorial del valor productivo del chontaduro. Allí, las decisiones económicas se toman de forma colectiva, los registros contables son sistemáticos, y se han establecido mecanismos de auditoría interna con rotación periódica de cargos directivos.

La alianza con instituciones como el SENA y universidades regionales ha permitido la formación técnica en procesos como buenas prácticas de manufactura, legislación sanitaria y finanzas básicas, contribuyendo a la profesionalización sin perder la raíz comunitaria.

Estos modelos de gestión pueden fortalecerse aún más si se articulan con enfoques de gobierno corporativo adaptados a la escala local. La literatura sobre desarrollo territorial señala que el gobierno corporativo no es exclusivo de grandes empresas.

De hecho, su aplicación simplificada —con reglas claras, transparencia financiera, y canales institucionalizados de participación— puede generar estabilidad y confianza en emprendimientos comunitarios (FAO, 2023). Incorporar manuales operativos, asambleas programadas, informes periódicos y mecanismos de control social fortalece la legitimidad interna y externa de las organizaciones productoras.

Finalmente, debe subrayarse que ningún modelo de gestión es neutro. Toda forma de organización encarna una visión del poder, del territorio y de la economía. En este caso, optar

por modelos de gobernanza comunitaria con principios de gobierno corporativo democrático es, a la vez, una apuesta ética y política: implica afirmar que el desarrollo no se delega, se construye colectivamente, desde abajo, con inteligencia organizativa, claridad en la gestión y profunda fidelidad al territorio.

5.3. Modelos de gestión comunitaria y gobierno corporativo en emprendimientos territoriales

La agroindustria comunitaria del chontaduro plantea un desafío doble: consolidarse como una alternativa económica viable y, al mismo tiempo, sostener una estructura organizativa que garantice el control colectivo, la transparencia y la distribución equitativa de los beneficios.

No se trata únicamente de producir y vender, sino de construir un modelo de gestión coherente con las dinámicas territoriales, los principios de economía solidaria y la defensa del valor comunitario del trabajo.

En el Pacífico colombiano, la figura predominante para este tipo de emprendimientos ha sido la asociación comunitaria, generalmente conformada por pequeños productores, recolectoras, cocineras

tradicionales y jóvenes rurales con formación técnica básica.

Estas asociaciones, como lo evidencian Mosquera Patterson y Correa Díaz (2007), han surgido como respuesta organizativa ante la ausencia histórica de apoyo estatal efectivo y frente al avance de economías extractivas que concentran el valor en manos externas al territorio.

En Tumaco, por ejemplo, varias organizaciones lideradas por mujeres han logrado consolidar redes de producción y transformación de chontaduro, plátano y yuca, demostrando que la gestión comunitaria puede ser eficaz cuando está respaldada por liderazgo local, conocimiento compartido y una estructura organizativa mínima.

No obstante, la sostenibilidad de estos modelos requiere superar ciertos obstáculos recurrentes. Uno de los más frecuentes es la informalidad administrativa: la ausencia de contabilidad básica, registros de ventas, inventarios organizados o actas de reuniones. Estos elementos, aunque considerados secundarios en muchas experiencias comunitarias, son claves para construir confianza entre los miembros,

acceder a recursos públicos o privados y sostener una visión de largo plazo.

En ese sentido, Gitman y Zutter (2015) insisten en que cualquier unidad productiva, por pequeña que sea, debe incorporar prácticas mínimas de gobierno corporativo: claridad en las funciones, rotación de responsabilidades, rendición de cuentas y mecanismos internos de resolución de conflictos. Estos principios, adaptados a la escala local, constituyen la base de un modelo de gestión comunitaria funcional.

Existen también experiencias que han apostado por esquemas de economía popular y solidaria, en los que la toma de decisiones se hace por consenso, los excedentes se reinvierten en el fortalecimiento del proceso colectivo y se prioriza la contratación interna de mano de obra local.

En estos casos, como destacan Altieri y Nicholls (2020), la eficiencia no se mide únicamente por los indicadores financieros clásicos, sino por la capacidad de sostener vínculos sociales, distribuir aprendizajes y garantizar la permanencia de las familias en sus territorios.

Una experiencia ejemplar en este sentido ha sido la Asociación de Productoras del Alto Mira y Frontera, en el sur de Nariño, donde se ha

logrado implementar un modelo de cogestión territorial del valor productivo del chontaduro. Allí, las decisiones económicas se toman de forma colectiva, los registros contables son sistemáticos, y se han establecido mecanismos de auditoría interna con rotación periódica de cargos directivos.

La alianza con instituciones como el SENA y universidades regionales ha permitido la formación técnica en procesos como buenas prácticas de manufactura, legislación sanitaria y finanzas básicas, contribuyendo a la profesionalización sin perder la raíz comunitaria.

Estos modelos de gestión pueden fortalecerse aún más si se articulan con enfoques de gobierno corporativo adaptados a la escala local. La literatura sobre desarrollo territorial señala que el gobierno corporativo no es exclusivo de grandes empresas. De hecho, su aplicación simplificada —con reglas claras, transparencia financiera, y canales institucionalizados de participación— puede generar estabilidad y confianza en emprendimientos comunitarios. Incorporar manuales operativos, asambleas programadas, informes periódicos y mecanismos de control social fortalece la

legitimidad interna y externa de las organizaciones productoras.

Finalmente, debe subrayarse que ningún modelo de gestión es neutro. Toda forma de organización encarna una visión del poder, del territorio y de la economía. En este caso, optar por modelos de gobernanza comunitaria con principios de gobierno corporativo democrático es, a la vez, una apuesta ética y política: implica afirmar que el desarrollo no se delega, se construye colectivamente, desde abajo, con inteligencia organizativa, claridad en la gestión y profunda fidelidad al territorio.

5.4 Mecanismos de control, auditoría social y transparencia en proyectos agroindustriales rurales

La consolidación de iniciativas agroindustriales comunitarias no depende únicamente de su viabilidad técnica o económica, sino también de su capacidad para generar confianza, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. En ese sentido, los mecanismos de control interno, la transparencia financiera y la vigilancia participativa son dimensiones fundamentales para evitar desviaciones, conflictos o rupturas que afecten el proceso productivo y la cohesión del grupo impulsor.

Más allá de los formatos administrativos convencionales, el control social en los emprendimientos rurales debe entenderse como un ejercicio de corresponsabilidad colectiva, donde se vinculan saberes técnicos, prácticas organizativas, éticas comunitarias y principios de equidad.

Desde la perspectiva de la economía solidaria, un sistema de control efectivo no se limita a la verificación contable o a la auditoría financiera externa.

Incluye la rendición de cuentas periódica ante los miembros de la organización, la socialización abierta de los presupuestos y decisiones estratégicas, así como el desarrollo de herramientas de seguimiento que sean comprensibles y accesibles para todos los actores involucrados, incluso aquellos sin formación técnica especializada (Altieri & Nicholls, 2020). Esta democratización del control refuerza no solo la eficacia organizativa, sino también la autonomía política y productiva del colectivo.

En el caso del chontaduro, cuyo procesamiento en harina representa una oportunidad real de encadenamiento agroindustrial desde lo local, la

transparencia no es solo un valor ético, sino una estrategia de sostenibilidad.

Cuando los productores conocen los márgenes de ganancia, el destino de los excedentes, los costos operativos y los criterios de inversión, se fortalece la apropiación del proyecto y disminuyen los riesgos de dependencia externa.

Gitman y Zutter (2015), desde una visión de administración financiera responsable, insisten en que la claridad de los flujos de caja, el control de inventarios y la evaluación periódica de los indicadores financieros permiten tomar decisiones más acertadas y reducir la vulnerabilidad de las pequeñas empresas frente a imprevistos económicos o institucionales.

Por su parte, las experiencias documentadas por Mosquera Patterson y Correa Díaz (2007) en el contexto de Tumaco evidencian que los obstáculos para una agroindustria del chontaduro exitosa no se relacionan solamente con la falta de capital o de mercados, sino con la débil estructuración organizativa y la escasa cultura de control colectivo.

En los casos donde se implementaron espacios de planeación participativa, seguimiento por parte de los consejos comunitarios y rendición pública de cuentas, los proyectos mostraron

mayor continuidad y mejor adaptación a las dinámicas locales.

Los sistemas agroindustriales rurales que incorporan mecanismos de evaluación participativa y auditoría interna transparente logran mejorar su articulación con políticas públicas, acceder más fácilmente a créditos rurales y generar alianzas de largo plazo con actores externos.

En ese marco, el diseño de una planta comunitaria de harina de chontaduro debería contemplar desde su fase inicial un protocolo de gobernanza organizativa, con funciones claras de control interno, tiempos definidos para la evaluación y participación activa de todos los sectores involucrados: productores, transformadores, comercializadores y consumidores.

En síntesis, la agroindustria del chontaduro no puede consolidarse sin un entramado sólido de confianza colectiva, legitimidad social y control consciente.

Más que imponer mecanismos burocráticos, se trata de crear condiciones para que la vigilancia y la evaluación emerjan desde dentro, como expresión de una ética productiva que priorice

la transparencia, la cooperación y la justicia económica.

En un territorio históricamente excluido como el Pacífico colombiano, garantizar la transparencia no es solo un requisito técnico, sino un acto de transformación estructural que dignifica la economía popular y fortalece el tejido comunitario.

5.5. simulación contable y financiera de una planta comunitaria de harina de chontaduro

La necesidad de contar con modelos de evaluación económica realistas y situados ha cobrado una importancia creciente en la consolidación de agroindustrias comunitarias en el Pacífico colombiano.

En el caso del chontaduro, cuya transformación en harina representa una oportunidad para el valor agregado, la autonomía alimentaria y la generación de empleo rural, resulta imprescindible contar con simulaciones que permitan prever la viabilidad financiera y operativa de una planta de procesamiento, aun en contextos de limitación de datos o ausencia de estudios específicos formalizados en literatura científica.

Este apartado propone un modelo simulado basado en principios contables reales, apoyado en datos aproximados recogidos de experiencias similares y con base en bibliografía verificada sobre análisis financiero y agroindustria rural.

Siguiendo los principios de Gitman y Zutter (2015), un análisis de viabilidad debe partir de la estimación de los costos fijos y variables, así como de la proyección de ingresos esperados y punto de equilibrio operativo.

En una planta de transformación artesanal o semiindustrial con capacidad para procesar diariamente una tonelada de chontaduro fresco, los costos fijos anuales —incluyendo arrendamiento de local, servicios públicos, mantenimiento de maquinaria básica, seguros e impuestos— podrían rondar los 40 millones de pesos colombianos, según estimaciones comparables de plantas rurales de pequeña escala en el suroccidente colombiano.

A esto se suman los costos variables, donde los principales insumos serían el fruto en estado óptimo (cuya unidad puede oscilar entre \$300 y \$500 por kilo en cosecha alta), el empaque, el transporte desde las fincas hasta el centro de acopio, la energía utilizada en la cocción y

deshidratación, así como el pago a operarios por jornada laboral.

Una estimación conservadora ubicaría el costo variable total por kilo de harina producida en \$3.800, considerando que de cada 4 kg de chontaduro fresco se obtiene aproximadamente 1 kg de harina.

En cuanto a los ingresos, considerando un precio de venta al por mayor de \$6.000 por kilo de harina empacada (precio competitivo respecto a productos similares como harina de plátano o yuca), la ganancia bruta por unidad sería de aproximadamente \$2.200, sin considerar todavía depreciación de equipos o amortización de inversiones iniciales.

Esto permitiría un margen bruto del 36%, lo que puede ser atractivo en términos de rentabilidad si se alcanzan economías de escala y se consolida un canal de distribución estable.

El punto de equilibrio, entendido como el nivel de producción donde los ingresos igualan los costos totales, se alcanzaría alrededor de los 18.200 kilogramos anuales, es decir, cerca de 73 kg diarios durante 250 días laborales al año. Esta cifra es técnicamente alcanzable si se dispone de al menos dos hornos de deshidratación

simultánea y una planta con rotación de turnos en temporada alta.

Este tipo de simulación no solo permite observar la factibilidad financiera, sino que invita a integrar criterios de sostenibilidad y gobernanza. Como lo subraya Altieri y Nicholls (2020), los proyectos agroindustriales deben vincularse a cadenas alimentarias cortas, diversificar sus fuentes de ingreso y mantener prácticas de producción compatibles con la regeneración del suelo y los ciclos naturales.

Por ello, la simulación aquí propuesta también asume la compra del chontaduro a precios justos en fincas familiares, con relaciones directas que favorezcan a productores locales y eviten intermediarios especulativos.

La dimensión contable no puede desligarse de la dimensión cultural y técnica del producto. Como plantean Ambrosio et al. (2020), el éxito de la harina de chontaduro como propuesta de valor no solo depende del balance financiero, sino del arraigo cultural, el reconocimiento sensorial del producto, su valor nutricional y la confianza que genere entre los consumidores.

El relato productivo y comunitario que acompaña el empaque, la transparencia en los procesos y el control social ejercido por las

asociaciones campesinas son también factores de viabilidad que inciden indirectamente en la sostenibilidad financiera.

Finalmente, desde una perspectiva organizacional, experiencias como la documentada por Mosquera Patterson y Correa Díaz (2007) muestran que las unidades productivas de base pueden fortalecer su autonomía cuando implementan prácticas de control interno, registro adecuado de inventarios, rotación de personal capacitado y planificación participativa del presupuesto. Estos aspectos, aunque no siempre cuantificables en la hoja de Excel, hacen parte integral de la gobernanza económico-comunitaria que garantiza el éxito a mediano y largo plazo.

Esta simulación, por tanto, no pretende ofrecer un modelo cerrado o trasladable sin adaptaciones, sino un ejercicio pedagógico y estratégico que pueda ser apropiado, replicado y ajustado por las comunidades que buscan en el chontaduro no solo un sustento económico, sino un camino hacia la soberanía alimentaria y la justicia territorial.

Capítulo 6: Economía para la vida: más allá del mercado

En el corazón de las crisis contemporáneas — sociales, ecológicas, alimentarias y civilizatorias— se halla una estructura económica global que ha subordinado la vida al mercado. Esta economía, heredera de la modernidad capitalista, ha privilegiado la rentabilidad por encima del bienestar, ha erosionado los vínculos comunitarios en nombre de la competitividad, y ha extraído sin límite de los territorios sin reconocer sus límites ecológicos ni sus tramas culturales.

En el caso de Buenaventura, esta lógica se manifiesta con una crudeza que la convierte en paradigma de la desigualdad planificada: es un puerto que genera riqueza sin redistribuirla, un nodo logístico que expulsa campesinos mientras importa alimentos, una ciudad que se piensa por fuera del territorio que la sostiene.

La necesidad de una economía para la vida no es entonces un eslogan, sino una urgencia histórica. Frente a la hegemonía de un modelo que reduce lo económico a la lógica mercantil, diversos movimientos, pensadores y experiencias comunitarias han propuesto otras formas de organizar la producción, el intercambio y el consumo, colocando en el

centro la sostenibilidad, el cuidado, la equidad y la autonomía.

Estas propuestas no son nuevas: hunden sus raíces en saberes ancestrales, en prácticas de reciprocidad, en formas de vida que la modernidad ha deslegitimado pero que hoy resurgen como alternativas viables frente al colapso sistémico.

Desde América Latina, autores como Alberto Acosta, Eduardo Gudynas y Manfred Max-Neef han propuesto paradigmas como el *buen vivir*, los derechos de la naturaleza o la economía desmercantilizada del cuidado, que cuestionan la linealidad del crecimiento y apuestan por el equilibrio entre seres humanos y entorno.

Estas corrientes se articulan con propuestas como la economía feminista, que visibiliza el trabajo reproductivo y los cuidados como fundamento de toda vida social (Carrasco, 2013), o la economía social y solidaria, que recupera formas cooperativas, autogestionarias y relacionales del quehacer económico (Razeto, 1993).

En el contexto de Buenaventura, hablar de una economía para la vida implica reconocer y potenciar las prácticas que ya existen más allá del mercado formal: redes de trueque y reciprocidad, mingas comunitarias, sistemas de abastecimiento informal, bancos de alimentos

organizados por iglesias o grupos sociales, así como emprendimientos de transformación productiva como el de la harina de chontaduro.

Estas experiencias son más que soluciones puntuales: son expresiones de un paradigma económico diferente, que nace desde abajo, desde el territorio, desde el cuidado de la vida en todas sus formas.

Este capítulo se propone, en primer lugar, de construir críticamente el paradigma de la economía lineal y extractiva, mostrando sus límites estructurales en términos de justicia social y sostenibilidad ambiental. En segundo lugar, explora los fundamentos teóricos y éticos de una economía regenerativa, feminista y solidaria, desde marcos críticos y experiencias concretas.

Finalmente, se plantea cómo iniciativas locales de transformación agroalimentaria — como la producción de harina de chontaduro— pueden integrarse de manera coherente a estos horizontes, siempre y cuando se mantenga una mirada territorial, participativa y orientada al bien común.

Construir una economía para la vida no es una tarea técnica ni exclusivamente económica. Es, sobre todo, un proyecto político, cultural y civilizatorio. Un proyecto que, desde Buenaventura, puede inspirar otros caminos de

autonomía territorial, justicia ambiental y soberanía alimentaria, como parte de una respuesta integral a los desafíos del siglo XXI.

6.1 De la economía lineal a la economía regenerativa (versión ampliada)

Durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, el modelo económico dominante se ha estructurado sobre una lógica lineal: se extraen recursos de la naturaleza, se transforman en bienes de consumo mediante procesos industriales intensivos, se distribuyen en mercados globales y, finalmente, se desechan como residuos en volúmenes cada vez más insostenibles.

Este patrón —a menudo sintetizado como “tomar, hacer, desechar”— ha producido una prosperidad económica desigual, ha multiplicado las huellas ecológicas del consumo moderno y ha convertido amplias regiones del planeta en zonas de sacrificio ambiental, social y cultural (Rockström et al., 2009; Raworth, 2017).

En Colombia, y especialmente en territorios como Buenaventura, los impactos de este modelo son particularmente crudos. La expansión portuaria ha venido acompañada de la deforestación de manglares, sedimentación

de esteros, desplazamiento de comunidades ribereñas y creciente contaminación de fuentes hídricas.

El sistema alimentario, integrado verticalmente por grandes corporaciones, ha sustituido cultivos tradicionales por productos de importación ultraprocesados y ha desplazado al campesinado hacia una economía de subsistencia o informalidad.

En este contexto, la economía lineal no solo ha degradado el medioambiente, sino que ha desestructurado la economía local, erosionado la soberanía alimentaria y mercantilizado la vida cotidiana (Fajardo, 2016; Martínez-Alier, 2021).

Frente a estos límites civilizatorios, ha surgido con fuerza la propuesta de la *economía regenerativa*. Más allá del enfoque correctivo de la sostenibilidad clásica —centrado en “hacer menos daño”—, la economía regenerativa propone un cambio de raíz: restaurar los sistemas naturales, revitalizar las economías locales, recuperar los ciclos ecológicos y fortalecer las capacidades comunitarias para gestionar sus bienes comunes.

Esta perspectiva parte del principio de que los sistemas económicos humanos deben funcionar en armonía con los principios de la vida, respetando su complejidad, interdependencia y

circularidad (Wahl, 2016; Mang & Haggard, 2016).

Aplicada al caso de Buenaventura, esta transformación exige romper con el rol históricamente asignado al puerto como enclave extractivo. Se trata de pasar de un territorio productor de materias primas para otros centros a un espacio que genera valor territorial, que protege sus ecosistemas, que sostiene a su población y que refuerza sus vínculos culturales.

La agroindustria del chontaduro, en tanto producto biocultural, representa una oportunidad concreta para transitar hacia una economía regenerativa si se cumple con ciertas condiciones: respeto por los ciclos productivos naturales del fruto, técnicas de transformación que no comprometan la biodiversidad, encadenamientos productivos que prioricen la asociatividad campesina y marcos de distribución orientados al consumo responsable y justo.

Además, la economía regenerativa exige una reconstrucción institucional. No puede existir una regeneración auténtica si las políticas públicas siguen premiando a los actores que extraen sin devolver, si el crédito sigue concentrado en grandes proyectos sin arraigo, o si los marcos regulatorios penalizan la informalidad sin reconocer su función social.

En ese sentido, es necesario reimaginar una gobernanza económica local que priorice la participación efectiva de comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres rurales y jóvenes, articulando sus saberes con tecnologías apropiadas y modelos de gestión cooperativa.

Es también importante subrayar que la transición hacia lo regenerativo no debe ser confundida con una simple “verdurización” del modelo actual. El riesgo de que la regeneración se convierta en un eslogan vacío, cooptado por el marketing verde de grandes empresas, está presente.

Lo regenerativo, para ser tal, debe estar enraizado en el territorio, en las prácticas comunitarias, en las cosmovisiones que no separan al ser humano de la naturaleza sino que lo entienden como parte de ella.

Por eso, en Buenaventura, esta noción debe dialogar con los principios del derecho mayor, con la economía del cuidado, con la historia de la minga y del palenque como formas ancestrales de sostener la vida.

Como bien lo han planteado Raworth (2017) y Jackson (2017), la economía regenerativa no persigue el crecimiento perpetuo sino el florecimiento social dentro de los límites

ecológicos del planeta. Su propósito no es multiplicar mercancías sino cultivar bienestar.

En esa dirección, el fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización, la reactivación de mercados locales de productos tradicionales como el chontaduro, la transición agroecológica y la planificación territorial participativa constituyen ejes fundamentales de esta nueva economía.

En conclusión, pasar de la economía lineal a la regenerativa implica un reencantamiento de la vida económica, una reapropiación de sus fines y una refundación de sus medios. No se trata solo de cambiar tecnologías o introducir reformas puntuales, sino de redefinir qué es el desarrollo, para quién se produce y con qué consecuencias.

En Buenaventura, esta transición debe ser guiada por las comunidades y anclada en la dignidad, la reciprocidad y la defensa del territorio. La harina de chontaduro, concebida desde estos principios, puede ser no solo un alimento, sino una puerta a una economía que cultiva vida en lugar de extraerla.

6.2 Economía feminista y solidaridad territorial

Repensar la economía desde los márgenes exige revisar no solo sus indicadores y modelos

productivos, sino también las estructuras de poder que la sustentan.

La economía feminista ha demostrado, con décadas de investigación crítica y activismo, que el modelo económico dominante se ha construido sobre la invisibilización sistemática del trabajo reproductivo, la desvalorización de los cuidados y la subordinación de los cuerpos feminizados y racializados al capital (Carrasco, 2013; Pérez Orozco, 2014).

Este silenciamiento no es accidental: es una condición estructural del sistema capitalista, que extrae riqueza de lo visible —el empleo formal, el mercado, el capital financiero— mientras se sostiene sobre lo oculto: los afectos, los cuerpos, el tiempo doméstico, la vida que cuida otras vidas.

En territorios como Buenaventura, este andamiaje se expresa de forma cruda. Las mujeres —en particular las mujeres afrodescendientes— asumen una sobrecarga de responsabilidades que incluyen la crianza, la alimentación, el cuidado de enfermos, la mediación comunitaria, la producción artesanal y la gestión de redes de apoyo informal.

A pesar de ello, sus saberes, decisiones y trayectorias suelen ser marginados de los espacios formales de planificación económica y política pública. Como lo advierte la CEPAL

(2020), el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa hasta el 20 % del PIB en algunos países de América Latina, pero sigue sin reconocimiento institucional ni redistribución justa.

Desde la economía feminista, entonces, se plantea una redefinición radical del concepto de “trabajo”, que no se limite a la lógica mercantil ni a los parámetros del empleo asalariado. El trabajo es todo aquello que produce y sostiene la vida, independientemente de su rentabilidad.

Esta concepción tiene profundas implicaciones para pensar la economía local de Buenaventura: implica reconocer el rol productivo del fogón comunitario, la economía de la pesca de subsistencia, la recolección del chontaduro, el trueque, la minga, y las múltiples formas de reciprocidad que articulan la vida cotidiana fuera del mercado formal (Espinosa Miñoso, 2015).

La agroindustria territorial del chontaduro, si quiere inscribirse en una perspectiva transformadora, debe integrar estos aprendizajes.

No se trata únicamente de generar empleos formales o aumentar el PIB local, sino de diseñar sistemas productivos que distribuyan el poder, reconozcan el trabajo reproductivo, y

promuevan una gobernanza económica con equidad de género.

En este sentido, una iniciativa de transformación del chontaduro que priorice la participación de mujeres campesinas y afrodescendientes, que reconozca sus saberes culinarios, que las incorpore en los procesos de toma de decisiones, y que redistribuya los beneficios de manera justa, no solo será más ética: será más eficiente, resiliente y sostenible.

A nivel teórico, autoras como Silvia Federici (2013) han insistido en que no puede haber transformación económica sin transformación de las relaciones de género. El cuerpo de las mujeres ha sido históricamente el “territorio colonizado” por excelencia, y su desmercantilización y reapropiación son pasos clave hacia cualquier economía para la vida.

Del mismo modo, la articulación entre feminismo y territorio, tan presente en las luchas de mujeres afro y campesinas en Colombia, permite superar la dicotomía entre lo personal y lo político, entre lo económico y lo ambiental, y plantea la urgencia de diseñar políticas que partan de la interdependencia.

Las iniciativas locales de economía solidaria y de cuidado en Buenaventura son prueba de esta articulación. Desde los comités de mujeres del Paro Cívico hasta los emprendimientos

comunitarios de procesamiento de alimentos, pasando por las redes de comadronas, las ollas comunitarias o los mercados agroecológicos, las mujeres han sido las principales protagonistas de una economía alternativa que privilegia la vida sobre el capital.

Estas prácticas no se limitan a cubrir vacíos del Estado: cuestionan las premisas del modelo económico dominante y plantean otras formas de entender la riqueza, la productividad y el valor.

En este contexto, el enfoque de solidaridad territorial se vuelve clave. Mientras el discurso del desarrollo suele operar bajo una lógica competitiva y extractiva —donde cada territorio busca atraer inversión y posicionarse en el mercado—, la economía feminista propone una lógica de colaboración, cuidado mutuo y sostenibilidad compartida.

La solidaridad no es un suplemento moral, sino una condición material para la supervivencia colectiva. En Buenaventura, donde la violencia estructural convive con la resistencia cotidiana, esta solidaridad se manifiesta en formas diversas: desde las mingas para arreglar caminos hasta los bancos comunales de alimentos, desde los grupos de ahorro hasta las cooperativas de transformación de frutas nativas.

En suma, la economía feminista no es una economía “para mujeres”, sino una economía que desmantela la lógica patriarcal del sistema actual y propone nuevas formas de organización económica basadas en el cuidado, la reciprocidad, la equidad y la vida digna.

Su articulación con las experiencias de solidaridad territorial en Buenaventura permite imaginar una agroindustria del chontaduro que no repita las lógicas del extractivismo, sino que regenere tejidos sociales, territoriales y afectivos. Una agroindustria que no solo transforme frutas, sino también relaciones de poder.

6.3 Cuidado, reciprocidad y bien común en la economía territorial

En la economía convencional, el cuidado ha sido relegado a la esfera privada, feminizada y no remunerada, a pesar de ser la base material que sostiene la vida y posibilita toda actividad productiva.

Esta invisibilización no es casual: forma parte de una arquitectura social que privilegia la acumulación sobre la reproducción de la vida, la competencia sobre la colaboración, y el interés individual sobre el bienestar colectivo (Tronto, 2013). Frente a esta lógica, los territorios históricamente marginalizados han

desarrollado sistemas económicos alternativos donde el cuidado, la reciprocidad y el bien común no son valores añadidos, sino principios rectores.

En Buenaventura, estas prácticas están lejos de ser novedosas. La tradición comunitaria afrocolombiana ha cultivado, por siglos, formas de organización basadas en el cuidado mutuo y la defensa colectiva del territorio. La minga, el convite, la ronda, el fogón comunal o el uso compartido de la tierra, no responden a una lógica de mercado, sino a una ética del bien común profundamente arraigada en la experiencia histórica de resistencia, de construcción de libertad y de afirmación cultural (Restrepo, 2014).

Estas prácticas no solo han permitido sobrevivir en condiciones de exclusión estructural, sino que han generado riqueza relacional, resiliencia comunitaria y una noción expandida de la economía que incluye el cuerpo, la naturaleza y la espiritualidad.

El cuidado, en este contexto, no es una categoría blanda ni sentimental: es una práctica política. Como lo señala Joan Tronto (2013), cuidar implica reconocer la interdependencia humana y la vulnerabilidad compartida, asumir la responsabilidad por los otros y por el entorno, y construir instituciones que lo posibiliten de forma justa. En el caso de Buenaventura, el

cuidado se manifiesta tanto en las redes de apoyo entre mujeres como en la gestión del bosque de manglar, en la crianza compartida como en la pesca colectiva. Y también se juega en la disputa por políticas públicas que garanticen salud, alimentación, transporte, educación y condiciones dignas para la vida.

La reciprocidad, por su parte, rompe con la lógica individualista del homo economicus y nos sitúa en una economía de relaciones, donde el dar, el recibir y el devolver construyen vínculos sociales y no meramente transacciones. La producción de chontaduro para autoconsumo, la entrega de excedentes a otras familias, el trabajo compartido en los procesos de recolección o molienda, son expresiones de una reciprocidad que genera valor no solo económico, sino cultural y político.

En palabras de Gudynas (2011), se trata de “economías del vínculo”, donde lo importante no es maximizar beneficios sino sostener relaciones.

A partir de estas premisas, el bien común no puede ser reducido a un recurso colectivo ni a una categoría jurídica. Es, más bien, un horizonte ético que orienta la acción económica hacia el bienestar colectivo, la sustentabilidad ecosistémica y la equidad.

En el marco del proyecto de agroindustria del chontaduro, asumir esta perspectiva implica diseñar sistemas de gobernanza compartida, garantizar la distribución justa de los beneficios, proteger el acceso comunitario al fruto, evitar su privatización o acaparamiento por actores externos, e incorporar mecanismos participativos que reconozcan los saberes y derechos de quienes históricamente han cuidado del territorio.

La economía del cuidado, la reciprocidad y el bien común encuentra en los feminismos comunitarios, el ecofeminismo y las economías populares del sur global una base teórica y política sólida.

Como afirma Yayo Herrero (2019), “la economía ha de reconfigurarse desde la premisa de que somos ecodependientes e interdependientes; sin naturaleza y sin cuidados no hay vida posible”. Esto implica desmercantilizar la vida, relocalizar las decisiones económicas y descolonizar las formas de entender el desarrollo.

Desde esta visión, el proyecto de harina de chontaduro no debe evaluarse únicamente por su rentabilidad financiera, sino por su capacidad de regenerar tejidos comunitarios, fortalecer la autonomía alimentaria, distribuir los cuidados y promover un desarrollo centrado en la vida digna. Esto requiere metodologías

participativas, pedagogías del cuidado, formación en economía solidaria y espacios donde la comunidad no sea vista como beneficiaria pasiva, sino como sujeto colectivo de construcción territorial.

En síntesis, cuidar, compartir y proteger lo común son prácticas profundamente transformadoras en un mundo que ha naturalizado el abandono, la competencia y la explotación. En Buenaventura, donde la vida ha sido históricamente amenazada por la pobreza estructural, la violencia y el extractivismo, el cuidado es resistencia, la reciprocidad es soberanía, y el bien común es horizonte.

Desde ahí, una agroindustria territorial no es simplemente una oportunidad económica: es una apuesta por reconfigurar las condiciones de existencia desde otras lógicas, otros valores y otros modos de habitar el mundo.

Capítulo 7: Estudio de mercado con enfoque territorial y cultural

En los discursos hegemónicos sobre emprendimiento, innovación o desarrollo agroindustrial, el “estudio de mercado” suele presentarse como una herramienta neutral y universal, un paso técnico que permitiría identificar oportunidades de negocio sin tener en cuenta el territorio concreto, las culturas que lo habitan, ni las desigualdades estructurales que lo atraviesan.

Esta mirada, propia de una racionalidad económica convencional, invisibiliza la historicidad del mercado como institución social y su profunda implicación en la configuración de jerarquías, exclusiones y dependencias, especialmente en regiones periféricas como el Pacífico colombiano.

En Buenaventura, hablar de mercados no es simplemente hablar de cifras, nichos o tendencias de consumo. Es, ante todo, hablar de acceso, de territorialidad, de disputas por la legitimidad del saber económico y de los modos de existencia que subyacen a cada intercambio.

La economía aquí no flota en el aire: camina en los pies descalzos que recorren los

manglares, se escucha en los cantos de las vendedoras del muelle, se negocia en plazas de mercado que sobreviven a pesar del olvido institucional. El mercado, en esta geografía negada y racializada, no puede pensarse sin una lectura crítica de su dimensión política y cultural.

En este sentido, un estudio de mercado para la agroindustria del chontaduro no puede limitarse a identificar la demanda en términos de volumen, precio y frecuencia.

Debe, más bien, reconstruir las lógicas socioculturales que sostienen el consumo local; identificar los imaginarios alimentarios asociados al fruto; comprender los ciclos de producción y disponibilidad estacional; explorar las prácticas de comercialización ya existentes en barrios, veredas y plazas; y, sobre todo, interrogarse por las barreras estructurales que impiden el acceso justo y equitativo a los beneficios de una economía basada en el valor agregado territorial.

Al mismo tiempo, este enfoque debe identificar y dimensionar el potencial no explotado del chontaduro: su posibilidad de convertirse en base de productos derivados con valor nutricional, identidad cultural y rentabilidad económica.

Este capítulo se estructura en tres apartados. En primer lugar, se presenta un análisis de la demanda real y potencial, tanto en el consumo tradicional del chontaduro como en sus formas transformadas—harinas, conservas, bebidas, cosméticos, entre otros. Este análisis recupera datos empíricos, lecturas comunitarias y tendencias emergentes.

En segundo lugar, se abordan las tensiones entre cultura alimentaria, precios justos y competitividad, es decir, los conflictos entre la lógica comercial de maximización de ganancia y las formas de vida que privilegian el acceso, la pertenencia cultural y la justicia económica. Por último, se proponen estrategias de comercialización con identidad y arraigo, orientadas no solo a posicionar el producto, sino a reivindicar el territorio, la historia y las prácticas colectivas que le dan sentido.

Así, este estudio de mercado no se concibe como un simple insumo para un plan de negocios, sino como un ejercicio de lectura crítica del entorno, un aporte a la planificación territorial y una herramienta para que la agroindustria del chontaduro responda a las necesidades reales de las comunidades y no a los dictámenes abstractos del mercado. Es, en última instancia, una apuesta por construir una economía con identidad, con justicia y con sentido de lugar.

7.1 Análisis de la demanda real y potencial

Comprender la viabilidad de una agroindustria del chontaduro en Buenaventura exige una mirada bifocal: por un lado, una lectura situada del consumo actual del fruto y sus derivados; por el otro, una proyección estratégica de su inserción en nuevos nichos de mercado, tanto locales como regionales o incluso internacionales.

Esta distinción entre demanda real y demanda potencial no debe ser asumida en términos puramente cuantitativos, sino como un ejercicio de reconocimiento de prácticas alimentarias, relaciones económicas, factores culturales y condiciones estructurales que configuran el mercado desde lo territorial.

La demanda real del chontaduro en Buenaventura tiene una fuerte raíz cultural. Es un producto vinculado a la memoria alimentaria afrodescendiente, a los saberes tradicionales sobre nutrición, a las prácticas de venta ambulante y al consumo callejero que atraviesa todos los sectores sociales.

Según un estudio del Instituto SINCHI (2020), el chontaduro es una de las frutas con mayor presencia simbólica y gastronómica en las zonas húmedas del Pacífico, no solo por su valor

nutricional, sino por su rol identitario en la dieta diaria.

En mercados como el de Pueblo Nuevo o en barrios populares como Juan XXIII y El Jorge, su consumo es constante, sobre todo en temporadas de cosecha, cuando el fruto llega fresco desde el campo y se prepara hervido, con sal, miel o acompañado de bebidas tradicionales.

En términos económicos, este consumo real se expresa en transacciones informales, a menudo invisibles en los balances institucionales. Vendedoras ambulantes, pequeños distribuidores y recolectores rurales sostienen un circuito que, aunque precarizado, ha sido históricamente eficaz en abastecer la ciudad.

No obstante, este mercado presenta limitaciones estructurales: escasa capacidad de almacenamiento y transformación, baja tecnificación, poca asociatividad entre productores, falta de certificación sanitaria y ausencia de canales de comercialización estables.

Esta realidad impide una mayor valorización del producto y deja su precio sujeto a la estacionalidad, los intermediarios y la informalidad del circuito (Garay & Barberi, 2021).

Ahora bien, la demanda potencial del chontaduro emerge cuando se amplía el horizonte más allá del fruto fresco. La transformación agroindustrial permite imaginar nuevos productos con alto valor agregado: harinas, compotas, néctares, dulces, aceites cosméticos, snacks saludables e incluso ingredientes para bebidas energéticas o suplementos alimenticios.

Estudios como los del CIAT (2018) y Corpoica (2019) han identificado que el chontaduro posee altos niveles de proteínas, antioxidantes y lípidos saludables, lo que lo convierte en un insumo promisorio para las industrias de alimentos funcionales y cosmética natural.

La demanda potencial también puede desarrollarse en mercados alternativos, como ferias campesinas, tiendas de productos orgánicos, supermercados con enfoque saludable, restaurantes de cocina autóctona y exportación hacia comunidades de la diáspora afro en otras ciudades o países.

En todos estos casos, el reto no es solo adaptar el producto a los requerimientos del mercado (etiquetado, inocuidad, presentación, durabilidad), sino hacerlo sin perder el vínculo con el territorio, los saberes locales y los derechos de quienes históricamente han sostenido la cadena productiva. Es decir, transformar sin desarraigar.

Además, debe considerarse la dimensión educativa y cultural de la demanda potencial. Muchas veces, la subvaloración del chontaduro se debe al desconocimiento de sus propiedades o a la falta de campañas de sensibilización sobre sus usos y beneficios.

La creación de agroindustrias con enfoque territorial debe incluir procesos de educación alimentaria, fortalecimiento del consumo responsable y revalorización de los alimentos propios como estrategia de soberanía. Este aspecto resulta clave para transformar hábitos de consumo y expandir mercados sin reproducir esquemas de dependencia.

Finalmente, el análisis de demanda debe ir acompañado de un mapeo de actores y capacidades existentes. En Buenaventura ya existen iniciativas incipientes de transformación del chontaduro, como emprendimientos familiares o asociaciones de mujeres rurales. Identificar estas experiencias, sus obstáculos y sus saberes puede permitir construir una cadena de valor inclusiva, que no sea impuesta desde afuera, sino que fortalezca procesos comunitarios ya en curso.

En suma, el chontaduro no solo tiene demanda: tiene sentido. Y en esa diferencia está la clave para pensar un modelo agroindustrial arraigado, justo y sostenible. La demanda no se construye únicamente con análisis estadísticos;

se cultiva en la historia, se negocia en la plaza, se transforma en el fogón y se defiende en la calle. Por eso, un estudio de mercado que se pretenda transformador debe comenzar por escuchar el territorio y construir desde él.

7.2 Tensiones entre cultura alimentaria, precios justos y competitividad

Toda iniciativa de desarrollo agroindustrial situada territorialmente debe navegar entre al menos tres fuerzas en tensión: la preservación de las culturas alimentarias locales, la necesidad de garantizar precios justos para productores y consumidores, y las exigencias de competitividad que impone la lógica del mercado formal.

Estas tres dimensiones, lejos de ser complementarias de forma automática, suelen entrar en contradicción, y su articulación constituye uno de los principales retos para cualquier apuesta transformadora como la del chontaduro en Buenaventura.

La cultura alimentaria de una comunidad no se limita a los ingredientes ni a las técnicas culinarias. Es una matriz simbólica que encarna cosmovisiones, memorias colectivas, vínculos con el territorio y formas de organización social.

En el caso del chontaduro, esta cultura se expresa en múltiples registros: en la recolección comunitaria en zonas rurales, en las recetas tradicionales transmitidas oralmente, en la venta callejera que dinamiza la economía popular y en las representaciones del fruto como símbolo de fertilidad, resistencia y salud.

Preservar esta cultura implica reconocer que los alimentos no son mercancías neutras, sino portadores de identidad, dignidad y derecho a decidir qué comer y cómo producirlo.

Sin embargo, cuando se intenta introducir el chontaduro en circuitos formales de mercado, surgen desafíos que desbordan lo técnico. Uno de ellos es la necesidad de adaptar el producto a los estándares sanitarios, logísticos y comerciales que exigen los grandes compradores o distribuidores, lo cual puede tensionar las formas tradicionales de producción y transformación.

Por ejemplo, la cocción artesanal en leña, valorada por las comunidades, puede no cumplir con los protocolos de inocuidad exigidos por INVIMA o por cadenas de supermercados. Esto genera un dilema: ¿cómo escalar sin desnaturalizar?

A esto se suma la cuestión del precio justo, que es un concepto polisémico. Desde la perspectiva del productor, un precio justo es

aquel que cubre los costos reales de producción, reconoce el esfuerzo y permite mejorar las condiciones de vida. Para el consumidor popular, en cambio, un precio justo es aquel que garantiza el acceso a un alimento tradicional sin que se vuelva un lujo inaccesible.

En contextos de desigualdad estructural como el de Buenaventura, en los que el desempleo y la informalidad superan la media nacional (DANE, 2022), subir el precio del chontaduro por su transformación industrial puede implicar excluir a los sectores que históricamente lo han consumido. En este sentido, se corre el riesgo de elitizar un alimento popular.

Por su parte, el discurso de la competitividad—muy presente en las políticas públicas y en la narrativa del desarrollo—impone criterios como eficiencia, productividad, estandarización y maximización de ganancia.

Si bien estas variables pueden ser necesarias para sostener una agroindustria en el tiempo, también pueden llevar a la homogenización del producto, la precarización del trabajo o la subordinación a dinámicas de mercado que excluyen a los actores más vulnerables de la cadena. Una agroindustria competitiva que no sea inclusiva corre el riesgo de replicar, en pequeña escala, las lógicas extractivistas que se pretende superar.

La tensión entre estas tres dimensiones no se resuelve con fórmulas. Requiere una ética del equilibrio, una deliberación comunitaria constante y la capacidad de innovar sin desarraigar.

Algunas experiencias latinoamericanas han demostrado que es posible construir circuitos cortos de comercialización, fomentar sellos de calidad cultural (como el “producto con identidad”) y promover esquemas de comercio justo adaptados al contexto local (Altieri & Toledo, 2011). Esto exige políticas públicas diferenciadas, financiamiento adecuado, fortalecimiento de capacidades locales y una institucionalidad dispuesta a dialogar con los saberes populares.

En el caso de Buenaventura, avanzar hacia un modelo que articule agroindustria y justicia alimentaria implica crear mecanismos de concertación entre productores, transformadores, consumidores y gobiernos locales, donde el valor del chontaduro no se mida solo en pesos por kilo, sino en función de su capacidad para generar empleo digno, mejorar la nutrición, reforzar identidades culturales y fortalecer la autonomía económica de los territorios.

En definitiva, el reto no es competir a toda costa, sino construir una competitividad con alma, que no sacrifique lo esencial por lo

rentable. Se trata de lograr que el chontaduro llegue a más mesas, sí, pero sin dejar vacías las que lo han sostenido históricamente.

7.3 Estrategias de comercialización con identidad y arraigo

El diseño de estrategias de comercialización para el chontaduro en Buenaventura no puede limitarse a replicar modelos genéricos de mercadeo. La singularidad del contexto social, la riqueza simbólica del fruto y la necesidad de articular economía con cultura y justicia obligan a imaginar rutas de circulación del producto que no solo sean viables financieramente, sino coherentes con el proyecto territorial que se busca construir.

Comercializar con identidad y arraigo implica transformar las formas en que el producto llega al consumidor, resignificando tanto su valor de uso como su valor simbólico, y evitando que se diluya en la lógica de mercado como una mercancía más.

En primer lugar, es fundamental comprender que el chontaduro no parte de cero: ya posee una marca cultural construida históricamente por las comunidades afrodescendientes del Pacífico. Su venta en calles y plazas, su presencia en celebraciones populares, su inclusión en saberes medicinales y culinarios, y su evocación en

canciones, dichos y relatos le confieren una potencia simbólica que pocas frutas locales poseen.

Esta “marca territorial” debe ser el punto de partida, no un obstáculo. Ignorarla, como sucede en muchos proyectos agroindustriales que buscan “blanquear” el producto para adaptarlo al gusto urbano o extranjero, significaría una forma de colonización comercial.

En este sentido, una primera estrategia es la revalorización de la identidad alimentaria local como herramienta de posicionamiento de mercado. Esto puede lograrse mediante sellos distintivos (como “Producto ancestral del Pacífico” o “Sabores de Buenaventura”), narrativas que acompañen el producto explicando su origen y preparación, o alianzas con chefs, restaurantes y marcas que valoren la cocina tradicional.

Como ha señalado Calvo (2022), las estrategias de marketing cultural pueden generar valor agregado sin necesidad de homogenizar el producto, apelando a la autenticidad y al vínculo con el territorio.

Una segunda estrategia clave es el fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización, es decir, relaciones directas entre productores y consumidores que reduzcan la intermediación, garanticen

trazabilidad y promuevan la transparencia en los precios.

Ferias locales, mercados campesinos, tiendas cooperativas y esquemas de consumo responsable en instituciones educativas o comunitarias son algunos ejemplos. Estos canales no solo permiten mejorar los ingresos del productor, sino también sensibilizar al consumidor sobre el origen del alimento y sus implicaciones sociales.

En Buenaventura, podrían potenciarse experiencias como las mingas productivas, los trueques comunitarios y los mercados veredales, articulándolos con procesos pedagógicos y de economía solidaria.

Otra estrategia indispensable es la diversificación del portafolio de productos derivados del chontaduro, orientada a distintos nichos de mercado. Esto incluye desde productos tradicionales listos para el consumo (fruto cocido y empacado), hasta líneas gourmet (mermeladas, conservas), cosmética natural (aceites y jabones) y alimentos funcionales (harinas fortificadas o snacks saludables).

La clave está en adaptar la presentación, el empaque y el mensaje a cada público objetivo, sin perder el vínculo con el relato original. Por ejemplo, un aceite de chontaduro para el cabello puede comercializarse en Bogotá o Medellín

como producto afrocolombiano natural y artesanal, mientras que una harina puede venderse en Cali a familias que deseen complementar la nutrición de sus hijos con alimentos tradicionales.

Asimismo, es fundamental construir redes comerciales solidarias a nivel regional y nacional, aprovechando espacios como cooperativas de mujeres rurales, asociaciones de productores del Pacífico, redes de comercio justo o plataformas digitales de venta directa.

Esto implica no solo vender, sino formar alianzas políticas y económicas que compartan principios éticos de reciprocidad, inclusión y justicia. Como advierte Gudynas (2011), toda estrategia de arraigo debe pensarse también como una estrategia de resistencia ante los modelos hegemónicos de desarrollo.

Finalmente, toda estrategia de comercialización con identidad debe estar acompañada por un proceso continuo de educación del consumidor, que trascienda la lógica del producto barato y estandarizado.

Es necesario generar conciencia sobre lo que implica consumir chontaduro local: apoyar economías campesinas, reducir huella ecológica, conservar saberes ancestrales y contribuir a la soberanía alimentaria. Campañas pedagógicas en colegios, medios comunitarios, redes sociales

y espacios públicos pueden cumplir un papel decisivo en este sentido.

En conclusión, comercializar con identidad y arraigo es apostar por una economía que no arrasa, sino que cuida; que no separa, sino que vincula; que no extrae, sino que retribuye. En el caso del chontaduro, no se trata solo de poner un fruto en el mercado, sino de sembrar una forma distinta de entender la relación entre territorio, alimento y dignidad.

Capítulo 8 Organización comunitaria y economía solidaria rural

Buenaventura y su zona rural, están marcados por siglos de despojo, fragmentación institucional y exclusión sistemática. Aquí las formas de organización comunitaria no han sido un lujo ni una opción marginal, sino una necesidad vital para la reproducción de la vida, la defensa del territorio y la búsqueda de bienestar colectivo.

Desde las mingas hasta los consejos comunitarios, pasando por las redes de trueque, las asociaciones de mujeres, las ollas comunitarias o los comités veredales, lo comunitario ha sido la principal infraestructura social frente a la ausencia o precariedad del Estado.

En ese entramado de solidaridades construidas “desde abajo” y a menudo al margen de las lógicas de mercado convencional, emerge con fuerza la noción de economía solidaria, entendida no simplemente como una alternativa económica, sino como un paradigma cultural, ético y político que reconfigura los fines y medios del desarrollo.

Como lo ha planteado Coraggio (2011), la economía solidaria pone en el centro la reproducción ampliada de la vida y la satisfacción de necesidades colectivas, y no la acumulación individual ni la rentabilidad financiera.

Esto supone una redefinición radical de conceptos como trabajo, valor, empresa y propiedad, y se expresa en prácticas que priorizan la cooperación por encima de la competencia, el cuidado sobre la explotación y el arraigo territorial frente a la deslocalización.

En el contexto de la agroindustria del chontaduro, este capítulo se propone reflexionar sobre las condiciones, desafíos y posibilidades de construir una cadena de valor local que no se base en la lógica de la concentración empresarial ni en la dependencia de grandes intermediarios, sino en la organización colectiva de los actores rurales, en particular campesinos, mujeres, jóvenes y comunidades étnicas.

A diferencia del modelo agroindustrial hegemónico, que fragmenta los eslabones productivos y debilita el poder de decisión de los productores primarios, la economía solidaria promueve esquemas asociativos capaces de garantizar mejores ingresos, autonomía organizativa, sostenibilidad ecológica y arraigo cultural (Razeto, 1999).

Así, este capítulo analizará tres dimensiones fundamentales. Primero, los modelos asociativos y cooperativos en contexto, explorando experiencias ya existentes en la región, sus aprendizajes y limitaciones. Segundo, las capacidades organizativas y los procesos de formación necesarios para la autogestión, entendida como una práctica política y técnica que empodera a las comunidades en la toma de decisiones.

Y tercero, se abordará la gobernanza económica territorial, es decir, los mecanismos mediante los cuales las comunidades pueden regular, gestionar y proyectar su economía desde una lógica de autonomía, interdependencia y dignidad.

Desde una perspectiva crítica y situada, este capítulo no idealiza lo comunitario ni romantiza la autogestión, sino que parte de reconocer tanto su potencia como sus tensiones internas: conflictos de liderazgo, desigualdades de

género, dependencia de recursos externos, entre otras.

Pero también afirma que en contextos como el del Pacífico colombiano, donde las soluciones impuestas han fracasado repetidamente, la organización solidaria desde el territorio no solo es una opción viable, sino una vía ineludible para construir futuro desde la dignidad colectiva.

8.1 Modelos asociativos y cooperativos en contexto

La historia de la economía rural en Colombia ha estado profundamente marcada por relaciones de subordinación, fragmentación productiva y dependencia de intermediarios, lo cual ha limitado las posibilidades de acumulación, sostenibilidad y autonomía de los pequeños productores.

En regiones como el Pacífico colombiano, estas dinámicas se agravan por condiciones estructurales de exclusión histórica, debilidad institucional, racismo ambiental y geografías del abandono (Escobar, 2018). En ese escenario, los modelos asociativos y cooperativos emergen no solo como estrategias económicas, sino como herramientas políticas de resistencia, inclusión y reconstrucción del tejido social.

Un modelo asociativo es mucho más que una unión formal de personas; implica una lógica

organizativa que redistribuye el poder en la toma de decisiones, articula objetivos comunes y busca el bienestar colectivo por encima de la competencia individual.

En su forma más desarrollada, como las cooperativas solidarias, estas organizaciones se rigen por principios de ayuda mutua, gestión democrática, participación económica equitativa y compromiso con la comunidad (Alianza Cooperativa Internacional, 2022).

En el campo agroindustrial, esto se traduce en mejores condiciones para negociar precios, compartir insumos, acceder a financiación colectiva y construir cadenas de valor localizadas.

En Buenaventura y su zona rural existen antecedentes valiosos de organización comunitaria en clave económica. Aunque muchos han sido invisibilizados o debilitados por la falta de apoyo técnico e institucional, se pueden identificar experiencias en torno a la pesca artesanal, la agricultura familiar, los mercados campesinos y las asociaciones de mujeres transformadoras de productos locales.

Algunas de estas organizaciones, como la Asociación de Productores Agroindustriales del Bajo Calima o las redes afrocomunitarias articuladas en torno a los Consejos Comunitarios, han demostrado una capacidad

notable de gestión autónoma, incluso frente a contextos adversos de violencia, abandono estatal y amenazas ambientales.

Sin embargo, construir y sostener un modelo asociativo en estos territorios no es un camino exento de tensiones. Entre los principales obstáculos se encuentran la desconfianza histórica generada por fracasos anteriores, la falta de procesos formativos en liderazgo y administración, el acceso restringido al crédito, la débil articulación con políticas públicas de fomento rural y las dinámicas de fragmentación territorial.

A ello se suma el hecho de que muchas organizaciones son creadas formalmente para acceder a recursos, pero carecen de cohesión interna, visión de largo plazo o mecanismos reales de autogestión.

A pesar de estas dificultades, la apuesta por la economía solidaria asociativa sigue siendo una vía estratégica para la consolidación de una agroindustria local del chontaduro.

En lugar de reproducir modelos empresariales convencionales que excluyen a los pequeños productores o los relegan a eslabones subalternos de la cadena productiva, la organización comunitaria puede garantizar una apropiación integral del proceso

productivo: desde la siembra hasta la transformación y comercialización.

Esta lógica, basada en redes de confianza, arraigo territorial y visión colectiva, permite crear valor no solo económico, sino también social, cultural y ecológico (Razeto, 1999).

Un elemento clave en este proceso es la apropiación cultural del modelo organizativo. No basta con replicar estructuras cooperativas importadas de otros contextos; se requiere diseñar esquemas que dialoguen con las formas tradicionales de organización comunitaria afrodescendiente y campesina del Pacífico.

Como advierten autores como Restrepo y Rojas (2010), el éxito de un modelo asociativo en territorios étnicos no depende solo de su eficiencia técnica, sino de su capacidad para enraizarse en las prácticas locales de solidaridad, reciprocidad y autoridad comunitaria.

Esto implica, por ejemplo, incluir liderazgos tradicionales, respetar los calendarios productivos culturales, redistribuir las cargas y beneficios de forma equitativa y vincular la producción a la defensa del territorio.

Así, este apartado plantea que cualquier propuesta de agroindustria del chontaduro en Buenaventura que pretenda ser viable, justa y

sostenible, debe anclarse en modelos asociativos fortalecidos, culturalmente legitimados y políticamente autónomos.

Lejos de ser un mero instrumento técnico, la organización cooperativa debe asumirse como una práctica de soberanía económica, que no solo genera ingresos, sino que contribuye a reparar el tejido social, consolidar el derecho a la alimentación digna y avanzar hacia la justicia territorial.

8.2 Capacidades organizativas y formación para la autogestión

Hablar de autogestión en contextos rurales como el de Buenaventura implica referirse a la capacidad concreta de las comunidades para tomar decisiones informadas, coordinar acciones colectivas y sostener procesos productivos y sociales sin depender de actores externos.

La autogestión no surge de la nada ni puede imponerse desde afuera; es el resultado de procesos históricos de aprendizaje, de capital social acumulado, de liderazgo comunitario legítimo y de acceso equitativo a saberes y recursos.

En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades organizativas no puede limitarse a talleres ocasionales o a la entrega de manuales

técnicos. Requiere una apuesta profunda por la formación política, económica y técnica, en clave crítica y situada, que parta de los saberes propios, reconozca los desafíos estructurales del entorno y promueva un enfoque emancipador del desarrollo.

Como ha argumentado Boaventura de Sousa Santos (2010), no se trata solo de capacitar a los pobres para insertarse en el sistema económico dominante, sino de fortalecer su poder para redefinir ese sistema desde sus necesidades, lenguajes y horizontes de vida.

La experiencia de numerosas comunidades rurales afrodescendientes en el Pacífico colombiano ha mostrado que las capacidades organizativas se construyen en el día a día, a partir de la resolución de conflictos, la gestión de bienes comunes, la negociación con actores externos y la generación de reglas internas que regulan la vida colectiva.

Sin embargo, estas capacidades pueden verse debilitadas cuando no existen procesos sistemáticos de formación, especialmente entre las nuevas generaciones. Por ello, es fundamental que cualquier proyecto de agroindustria local —como el que se propone en torno al chontaduro— incluya un componente formativo continuo, adaptado a las condiciones y aspiraciones del territorio.

Este componente formativo debe abordar, al menos, cuatro dimensiones clave. La primera es la dimensión técnico-productiva, que permita a los miembros de las organizaciones conocer y mejorar las etapas de cultivo, procesamiento, conservación y comercialización del producto.

Aquí el saber técnico no debe oponerse al conocimiento ancestral, sino articularse con él para fortalecer la identidad productiva local. La segunda dimensión es la formación en gestión organizativa, que incluya nociones de liderazgo democrático, manejo financiero colectivo, planificación participativa y mecanismos internos de control y evaluación.

La tercera dimensión tiene que ver con la formación jurídica e institucional, que prepare a los actores comunitarios para interactuar con el Estado, acceder a programas públicos, defender derechos colectivos y cumplir con los marcos normativos relacionados con la economía solidaria, la producción agroindustrial y los derechos territoriales.

Finalmente, la cuarta dimensión es la formación en economía política, que permita comprender las dinámicas estructurales del mercado, los mecanismos de exclusión y las alternativas posibles desde la solidaridad, la justicia social y el arraigo territorial (Coraggio, 2011; Razeto, 1999).

Es importante también reconocer que la formación para la autogestión no debe limitarse al aula ni a espacios formales, sino desarrollarse en prácticas cotidianas, a través del aprendizaje colaborativo, las mentorías comunitarias, los ejercicios de ensayo y error, y los espacios de reflexión colectiva.

Muchas comunidades rurales del Pacífico ya practican esta pedagogía de la vida, pero requieren apoyo institucional que valore sus procesos, respete sus tiempos y reconozca su potencial transformador.

Además, el enfoque de formación debe ser inclusivo y superar las brechas de género y generacionales. Las mujeres, por ejemplo, han jugado un papel central en la producción y comercialización de productos como el chontaduro, pero muchas veces son excluidas de los espacios de decisión.

Por su parte, las y los jóvenes requieren herramientas y narrativas que les permitan ver la economía rural no como una condena, sino como un campo de innovación, creatividad y arraigo. Sin su participación activa y protagónica, cualquier modelo de autogestión está condenado a envejecer y fragmentarse.

Este apartado sostiene que las capacidades organizativas son el corazón de cualquier economía solidaria con vocación

transformadora. No se trata simplemente de asociarse ni de ejecutar proyectos, sino de construir un sujeto colectivo capaz de sostener su economía, su cultura y su territorio desde la dignidad. En este proceso, la formación no es un fin en sí mismo, sino un camino para la autonomía, la justicia y la reexistencia territorial.

8.3 Gobernanza económica y construcción de autonomía local

En los territorios históricamente excluidos como el Pacífico colombiano, la gobernanza económica no puede reducirse a la regulación técnica del mercado ni al cumplimiento de normas estatales.

Se trata, ante todo, de una práctica social y política, que implica definir colectivamente cómo se produce, distribuye y consume la riqueza; quién toma las decisiones sobre los recursos; y qué principios orientan el desarrollo local. En este sentido, hablar de gobernanza económica en clave territorial es hablar de poder, justicia y autonomía.

En Buenaventura, como dijimos, la historia económica ha estado marcada por la desposesión, la dependencia y el extractivismo. Las decisiones sobre el puerto, las inversiones logísticas, las cadenas comerciales y los modelos

productivos no han sido tomadas por sus habitantes, sino por élites empresariales, actores institucionales externos y organismos multilaterales. Esta configuración ha generado una economía sin territorio, en la que la riqueza circula sin arraigo y los beneficios del comercio internacional coexisten con niveles alarmantes de pobreza, desempleo e inseguridad alimentaria (González, 2022).

Frente a esta situación, construir una gobernanza económica desde lo local implica revertir esa lógica: recuperar el control comunitario sobre los recursos, territorializar las decisiones productivas y crear mecanismos participativos que permitan que la economía responda a las necesidades de la población y no al interés del mercado global.

Este enfoque no niega la importancia de la eficiencia o la sostenibilidad financiera, pero las subordina a principios de justicia distributiva, equidad territorial y sostenibilidad ecológica (De Sousa Santos, 2010).

La agroindustria del chontaduro puede ser un punto de partida estratégico para ensayar nuevas formas de gobernanza económica local. Si su implementación se fundamenta en principios de economía solidaria, participación comunitaria y control territorial de la cadena de valor, puede convertirse en un instrumento de autonomía colectiva.

Pero si se deja en manos de actores externos, reproduciendo modelos empresariales convencionales, corre el riesgo de convertirse en otra forma de desposesión encubierta por el discurso del desarrollo.

Una gobernanza económica transformadora requiere, en primer lugar, instituciones locales legítimas y robustas. Estas pueden tomar la forma de consejos comunitarios, juntas agroindustriales, cooperativas o redes interinstitucionales, pero deben ser reconocidas por la población, funcionar con transparencia, y estar capacitadas para tomar decisiones informadas.

La construcción de estas instancias exige procesos largos, pedagógicos y deliberativos, en los que se debatan las reglas de juego, se distribuyan responsabilidades y se construya una visión compartida de desarrollo.

En segundo lugar, la gobernanza debe estar basada en datos y diagnósticos propios, no solo en información proveniente de entidades externas. Esto implica que las comunidades deben poder levantar sus propios censos productivos, monitorear los precios, evaluar los impactos sociales y ambientales de sus proyectos, y construir indicadores que reflejen su concepción de bienestar. El conocimiento técnico y el saber local deben articularse para

fortalecer la toma de decisiones desde abajo (Coraggio, 2011).

En tercer lugar, es clave establecer mecanismos de articulación entre escalas: la gobernanza económica local no debe encerrarse en lo micro, sino conectarse con redes regionales, políticas públicas nacionales y dinámicas globales en términos favorables. En lugar de aislarse del mundo, se trata de interactuar con él desde la soberanía.

La Red de Economía Solidaria del Pacífico, por ejemplo, puede ser un espacio estratégico para conectar experiencias, compartir aprendizajes y negociar colectivamente con instancias de poder estatal y de cooperación internacional.

Por último, la autonomía no debe entenderse como autosuficiencia absoluta ni como rechazo al Estado. Significa, más bien, capacidad para definir el rumbo propio, decidir sobre los modelos económicos que se desean construir y condicionar la participación en mercados más amplios a criterios de justicia, sostenibilidad e identidad. Como sostiene Arturo Escobar (2003), se trata de transitar hacia formas de “autonomía relacional”, en las que los territorios articulan sus vínculos con el exterior desde posiciones de dignidad y no de subordinación.

Así pues, sin gobernanza económica desde los territorios, no puede haber transformación

estructural. La agroindustria del chontaduro en Buenaventura no puede verse como un proyecto aislado, sino como parte de un ecosistema de decisiones colectivas, capacidades organizativas y soberanías en construcción. En ese camino, la economía se convierte en un campo de disputa por el futuro, y el territorio, en escenario y actor de su propio destino.

Allí donde las comunidades han logrado consolidar redes de cooperación, procesos formativos permanentes y estructuras de decisión colectiva, ha sido posible sostener experiencias productivas arraigadas en el territorio, con impacto económico y valor social.

Los modelos asociativos y cooperativos no son solo formas jurídicas o figuras organizacionales; son expresiones concretas de una racionalidad distinta, que antepone el bienestar común a la ganancia individual, y que valora la reciprocidad, el arraigo y la equidad como principios rectores. En este sentido, la formación para la autogestión no puede reducirse a la capacitación técnica, sino que debe ser una pedagogía crítica y territorial, que fortalezca sujetos colectivos con capacidad de gobernar su economía y defender su proyecto de vida.

La gobernanza económica, por su parte, representa el horizonte político de esta apuesta. Implica la recuperación del control sobre los

recursos, la democratización de las decisiones productivas y la construcción de circuitos económicos propios, anclados en el conocimiento local y articulados a redes más amplias de cooperación. Esta gobernanza no puede ser impuesta ni estandarizada: debe construirse desde las dinámicas, los liderazgos y las visiones del territorio.

En síntesis, cualquier intento de consolidar una agroindustria del chontaduro con impacto transformador debe ir más allá de la lógica empresarial clásica. Solo en la medida en que se inserte en un proceso de fortalecimiento organizativo, formación para la autogestión y construcción de una gobernanza económica autónoma, podrá contribuir a la justicia territorial y a la reconfiguración del modelo de desarrollo en Buenaventura.

Capítulo 9: Impacto social, ambiental y epistémico del proyecto

Toda intervención técnica, por más bienintencionada que sea, produce efectos que rebasan los límites de su diseño operativo. En contextos históricamente atravesados por la desigualdad, el racismo estructural y el extractivismo, como ocurre en el Pacífico colombiano, el impacto de una iniciativa comunitaria no puede entenderse únicamente en términos económicos o logísticos.

La dimensión social, ambiental y epistémica de cualquier propuesta es inseparable del entramado territorial, cultural y político en el que se inscribe. Impactar, en este sentido, no es solo modificar una variable medible; es también transformar relaciones, generar sentidos, alterar símbolos y disputar imaginarios.

Desde la perspectiva crítica del desarrollo, el impacto social no puede reducirse a cifras de empleabilidad o niveles de ingreso. En regiones como Buenaventura, donde las redes comunitarias han sido históricamente las verdaderas garantes de la vida frente al abandono estatal, lo social implica la calidad del tejido colectivo, la redistribución del poder en las decisiones, el reconocimiento de saberes

diversos y la dignificación de las condiciones de existencia.

Medir impacto aquí requiere atender a formas relacionales, procesos de confianza, construcción de autonomía y revitalización de las culturas organizativas propias (Restrepo & Rojas, 2020).

De igual modo, la dimensión ambiental no puede abordarse como un apéndice de la productividad, ni como un asunto de mitigación de daños.

En territorios racializados, donde los efectos del cambio climático, la contaminación industrial y el despojo ecológico se concentran con mayor intensidad, pensar el ambiente es pensar la vida en su integralidad.

Las comunidades del Pacífico no hablan de sostenibilidad como un concepto técnico, sino como una práctica de cuidado cotidiano, de relación armónica con los ecosistemas, de respeto a los ciclos naturales y de defensa del territorio como espacio de existencia y espiritualidad (Escobar, 2018; Leff, 2013).

A esta complejidad se suma el impacto epistémico, frecuentemente ignorado por los marcos tradicionales de evaluación. Cada acción técnica, cada modelo productivo, cada dispositivo de desarrollo, conlleva una forma de

ver el mundo, de clasificar lo legítimo y lo ilegítimo, de validar unos saberes mientras silencia otros. En este sentido, los proyectos insertos en comunidades afrodescendientes o indígenas no solo deben medir impactos materiales, sino también los efectos que generan en los sistemas de conocimiento locales.

¿Se reconocen las formas tradicionales de cultivar, cocinar, organizar y decidir? ¿Se valora el conocimiento ancestral como tecnología viva? ¿Se reconfiguran las jerarquías epistémicas o se refuerzan?

Desde la ecología política y los estudios decoloniales, evaluar el impacto es también preguntarse por la justicia cognitiva: ¿quién tiene el derecho a definir qué cuenta como conocimiento, qué prácticas son válidas, qué fines son deseables? (Santos, 2009).

En territorios donde el saber popular ha sido históricamente marginalizado, todo proyecto técnico que no dialogue con las epistemologías locales corre el riesgo de convertirse en un nuevo rostro del colonialismo, aunque se presente como progresista o solidario.

Así, en el Pacífico colombiano, hablar de impacto social, ambiental y epistémico exige una mirada situada, crítica y plural. No se trata de cumplir indicadores normativos diseñados desde centros de poder desconectados de la

realidad local, sino de comprender —y transformar— las condiciones estructurales que han mantenido a estos territorios al margen del modelo de desarrollo dominante. Solo entonces el impacto podrá ser entendido no como una imposición desde fuera, sino como una construcción colectiva desde adentro.

9.1 Evaluación integral: comunidad, ambiente y cultura

Evaluar el impacto de una iniciativa productiva comunitaria en el contexto del Pacífico colombiano exige romper con los moldes clásicos de la evaluación tecnocrática, centrados en indicadores cuantificables de rentabilidad, eficiencia o cobertura. Si el propósito es generar transformación real —y no solo contabilizar actividades ejecutadas—, la evaluación debe concebirse como una lectura integral del territorio: una lectura que interpele la experiencia de las comunidades, la sostenibilidad de los ecosistemas y la vitalidad de los procesos culturales que hacen posible la vida colectiva.

Desde la perspectiva territorial, la comunidad no es una “población beneficiaria”, sino el sujeto político, epistémico y organizativo que da sentido a los procesos. Evaluar el impacto comunitario implica preguntarse cómo el proyecto ha contribuido a fortalecer la

autonomía, la capacidad de incidencia, la cohesión social, la autoestima colectiva y la apropiación del territorio.

En territorios como Buenaventura, donde la exclusión estructural ha despojado a las comunidades de mecanismos de decisión sobre sus propios procesos, recuperar el control sobre el diseño, la ejecución y el destino de un proyecto económico es ya un acto de transformación política (Roa, 2019).

Las metodologías participativas, los diagnósticos comunitarios y los espacios de deliberación colectiva resultan entonces indispensables para comprender los efectos reales del proyecto.

No se trata solamente de evaluar cuántos empleos se crearon, sino qué tipo de relaciones laborales se promovieron; no basta saber cuántos productos se vendieron, sino si esos productos representaron saberes, memorias y formas de vida locales. En suma, el impacto comunitario debe entenderse como un proceso de subjetivación colectiva: ¿se reconocen los actores como productores dignos? ¿Se reconfiguró el sentido de comunidad y solidaridad? ¿Se fortaleció la autoestima territorial?

Desde el punto de vista ambiental, la evaluación no puede reducirse al cumplimiento

de estándares técnicos de “mínimo daño”. El Pacífico colombiano, como territorio de altísima biodiversidad y profunda relación ancestral con la naturaleza, requiere enfoques que vayan más allá de la mitigación.

La lógica extractivista, impuesta durante siglos, ha erosionado no solo los ecosistemas, sino las formas de relación espiritual, cultural y económica con la tierra, los ríos y el mar. Cualquier iniciativa transformadora debe reparar —o al menos no reproducir— estos daños históricos (Gudynas, 2011).

Una evaluación ambiental situada requiere tener en cuenta las prácticas de cuidado propias de las comunidades afrodescendientes, los saberes ancestrales sobre biodiversidad, las formas tradicionales de cultivo sin agroquímicos, la lógica del uso compartido y no acumulativo de los bienes naturales.

Estas prácticas no solo reducen el impacto ecológico, sino que constituyen modelos alternativos de sostenibilidad, profundamente vigentes frente a la crisis climática global. En ese sentido, un proyecto agroindustrial que utilice tecnología apropiada, reduzca huella ecológica, evite monocultivos y promueva una reforestación activa es ya, en sí mismo, una forma de resistencia ambiental y una contribución al debate sobre justicia ecológica (Acosta, 2016).

Por último, el impacto cultural — frecuentemente ignorado en los marcos de evaluación— resulta central en un territorio donde la cultura no es un ornamento, sino un modo de habitar, resistir y generar sentido. La producción, la alimentación, la música, la medicina tradicional, la forma de organizar el tiempo y el trabajo son expresiones de una racionalidad propia, muchas veces invisibilizada por la lógica del mercado o los marcos estatales.

Evaluar el impacto cultural exige preguntarse si el proyecto ha contribuido a fortalecer la identidad local, a visibilizar los saberes populares, a dignificar las prácticas tradicionales y a crear espacios de expresión simbólica.

En este plano, el chontaduro como producto no solo alimenta; también canta, cura, organiza la economía doméstica, cuenta historias. Convertirlo en harina no puede significar despojarlo de su valor cultural, sino expandir ese valor a nuevas formas de consumo, con respeto por su sentido original.

Por eso, evaluar el impacto cultural implica no solo medir el uso del producto, sino rastrear los sentidos que lo acompañan: ¿cómo se narran sus transformaciones? ¿Qué memorias y saberes moviliza su uso? ¿Qué imaginarios futuros se tejen en torno a él?

En suma, la evaluación integral no es un ejercicio de cierre administrativo, sino un momento ético, político y epistémico del proceso. Solo una evaluación situada, colectiva y sensible a las múltiples dimensiones del territorio puede decirnos si el proyecto ha contribuido a sembrar dignidad o si, por el contrario, ha reproducido las lógicas de despojo que dice combatir.

9.2 Enfoques de género, interculturalidad y diferencial étnico

Las apuestas transformadoras en territorios históricamente excluidos no pueden desligarse de las relaciones de poder que estructuran la vida social. Cuando hablamos de género, etnicidad e interculturalidad en el contexto de un proyecto agroindustrial en Buenaventura, no estamos ante dimensiones complementarias ni variables secundarias, sino ante el núcleo mismo de la desigualdad y de las posibilidades de transformación. El territorio no es neutro, ni lo son las dinámicas productivas, organizativas o simbólicas que lo atraviesan.

En primer lugar, el enfoque de género obliga a interrogar cómo las relaciones patriarcales y sexistas se reproducen o se disputan en los procesos comunitarios.

La agroindustria, como cualquier práctica económica, está atravesada por desigualdades estructurales que subordinan a las mujeres: división sexual del trabajo, invisibilización del cuidado, acceso desigual a tierras, insumos y financiamiento, o menor representación en espacios decisorios (Deere & León, 2001). Sin una intervención consciente, estos proyectos corren el riesgo de replicar lógicas de exclusión, aunque se autodefinan como comunitarios.

Por el contrario, aplicar un enfoque de género implica diseñar procesos que reconozcan y valoren el papel histórico de las mujeres en la producción y preservación del conocimiento alimentario; que garanticen su participación efectiva en la toma de decisiones; que promuevan condiciones de trabajo dignas y equitativas; y que revaloricen los saberes del cuidado, la cocina, la salud y la vida cotidiana, no como esferas privadas o marginales, sino como pilares de la soberanía alimentaria.

Esto supone desmercantilizar el valor de lo que las mujeres aportan a la economía y al tejido social, y asumir una mirada feminista del desarrollo rural (Luna & Montoya, 2020).

En segundo lugar, el enfoque intercultural exige reconocer que la diversidad cultural no es una “variable” a tener en cuenta, sino un principio organizador del territorio y de sus proyectos de vida. En Buenaventura coexisten

múltiples racionalidades: la afrodescendiente, profundamente vinculada al mar, a la oralidad, a las tramas familiares extensas, a las prácticas del fogón y la medicina tradicional; la indígena, con sus concepciones de la tierra como madre y de la producción como reciprocidad; y otras influencias urbanas, migratorias y populares que reconfiguran constantemente el horizonte cultural.

La interculturalidad no debe confundirse con un discurso de inclusión tolerante, sino asumirse como un ejercicio conflictivo y transformador de negociación entre saberes, prácticas y cosmovisiones.

En el caso de la agroindustria del chontaduro, por ejemplo, los conocimientos técnicos sobre procesos de secado, conservación o empaquetado deben dialogar —no suplantar— con los saberes locales sobre el momento óptimo de cosecha, el uso ritual del fruto, sus propiedades medicinales o los modos comunitarios de distribución.

El reto consiste en evitar tanto la folklorización (es decir, reducir lo cultural a lo pintoresco o decorativo) como la tecnocratización (imponer un modelo externo de eficiencia desconectado del territorio). La interculturalidad crítica, como la plantean Walsh (2010) y otros autores latinoamericanos, implica construir metodologías desde el diálogo

horizontal, el respeto por los saberes no hegemónicos y la creación conjunta de conocimiento.

Finalmente, el enfoque diferencial étnico, recogido por la legislación colombiana en normas como la Ley 70 de 1993 y el Auto 005 de la Corte Constitucional, obliga a reconocer que las comunidades afrodescendientes e indígenas no solo han sufrido formas particulares de discriminación, sino que tienen derechos colectivos a la tierra, a la consulta previa, a la identidad cultural y al desarrollo propio. Evaluar el impacto de un proyecto agroindustrial sin tener en cuenta estos derechos equivale a perpetuar la colonialidad del poder y del saber.

El diferencial étnico exige preguntarse si el proyecto ha contribuido a fortalecer las formas propias de gobierno, las organizaciones de base, los usos tradicionales del territorio, los sistemas normativos comunitarios y la autodeterminación económica. Esto implica no solo “consultar” a las comunidades, sino construir con ellas, desde sus tiempos, lenguajes y prioridades.

De lo contrario, incluso las iniciativas bien intencionadas pueden convertirse en nuevas formas de imposición, despojo simbólico o fragmentación comunitaria.

En síntesis, género, interculturalidad y etnicidad no son aderezos discursivos, sino claves analíticas y políticas fundamentales para construir proyectos agroindustriales que no solo transformen la economía, sino también las relaciones sociales. Incorporar estos enfoques de manera real y estructural es apostar por un desarrollo situado, justo y emancipador, donde el chontaduro no sea solo un producto, sino una semilla de dignidad.

9.3 Aportes al pensamiento crítico desde el sur global

El conocimiento no es neutro. Las formas de nombrar el mundo, de definir el desarrollo, de organizar la economía o de diseñar políticas públicas responden a estructuras históricas de poder que han situado al Norte global como centro epistémico, mientras han relegado a los territorios del Sur —y en particular a las poblaciones racializadas y subalternas— a la condición de objetos de estudio, beneficiarios de ayuda o portadores de atraso. En este marco, reivindicar los aportes de una experiencia agroindustrial comunitaria como la de Buenaventura implica también disputar el lugar desde el cual se produce y se valida el saber.

Los márgenes no son solo geográficos: son epistemológicos, políticos y simbólicos. Y desde esos márgenes se ha venido gestando una crítica

potente a los modelos hegemónicos de desarrollo, progreso y conocimiento. La agroindustria del chontaduro —con su apuesta por el arraigo territorial, la economía solidaria, la soberanía alimentaria y el diálogo de saberes— representa una fisura en el relato dominante.

No se trata simplemente de producir harina, sino de producir dignidad, agencia y saberes situados. En palabras de Catherine Walsh (2010), pensar desde el sur global no es replicar lo que se hace en el norte, sino construir otras formas de vida y conocimiento desde la diferencia y la resistencia.

En efecto, la experiencia de Buenaventura se inscribe en un horizonte más amplio de pensamiento crítico latinoamericano y del sur global que ha cuestionado la colonialidad del saber (Quijano, 2000), la violencia epistémica del desarrollo (Escobar, 2003) y la universalización de paradigmas científicos que excluyen las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Esta crítica no es solamente discursiva, sino también práctica: se expresa en procesos de economía popular, en escuelas comunitarias, en luchas por la tierra, en formas propias de organización, en alternativas al extractivismo.

El proyecto del chontaduro aporta así a la construcción de una “epistemología de la raíz”, por usar la expresión de Boaventura de Sousa Santos (2014), que parte de las necesidades y potencialidades del territorio, que reconoce la pluralidad de saberes como riqueza y no como déficit, y que se sitúa en la historia concreta de exclusión y resistencia del Pacífico colombiano. Desde ahí, se ensaya una ciencia otra, una tecnología otra, una política otra: no abstractas ni neutras, sino encarnadas en la experiencia social y cultural de las comunidades.

Este enfoque también interpela a las universidades, a las instituciones del Estado y a los organismos internacionales. ¿Qué saberes consideramos válidos? ¿Qué formas de innovación promovemos? ¿Quién define los problemas y las soluciones?

En un país donde el conocimiento afrocolombiano ha sido sistemáticamente invisibilizado o folklorizado, reconocer la inteligencia territorial expresada en un proyecto como este es un acto político y pedagógico. No se trata de “adaptar” el desarrollo al territorio, sino de reconfigurar el desarrollo desde el territorio, con sus lenguas, sus ritmos, sus memorias y sus aspiraciones.

En este sentido, la agroindustria del chontaduro no solo es un proyecto económico o social, sino también una propuesta epistémica.

Aporta a la crítica del capitalismo cognitivo, a la defensa del pluralismo epistemológico y a la construcción de horizontes posdesarrollistas.

Nos recuerda que la transformación no vendrá de aplicar fórmulas externas, sino de valorar lo propio, de tejer colectivamente alternativas, y de comprender que la producción de alimentos también puede ser producción de mundos.

Capítulo 10 Buenaventura propone: aprendizajes desde el margen para una Colombia distinta

Pensar Buenaventura no es únicamente una tarea geográfica o económica: es una forma de interpelar el modelo de nación que ha privilegiado históricamente los centros y despojado a los márgenes.

Este territorio, donde confluyen culturas afrodescendientes, memorias de resistencia y una relación íntima con los bienes naturales, encarna una paradoja radical: es el motor portuario del país, pero también uno de sus rincones más golpeados por la exclusión estructural, la violencia institucional y la negligencia planificada.

Sin embargo, lejos de asumir esta marginalidad como una condena, los actores locales han transformado el abandono en agencia, el olvido en propuesta, y la precariedad en innovación territorial.

En efecto, el Pacífico no se limita a resistir: también construye. Buenaventura ha sido cuna de formas organizativas inéditas, economías populares de reciprocidad, pedagogías comunitarias y visiones del desarrollo que no

caben en los marcos del extractivismo, la competitividad o la tecnocracia sin territorio.

Estas propuestas no son solo prácticas alternativas: son críticas vivas, encarnadas y viables al modelo dominante. Surgen de mujeres cuidadoras que reorganizan la vida cotidiana sin esperar permiso del mercado; de jóvenes que hacen de la cultura un vehículo de dignificación; de liderazgos ancestrales que articulan la espiritualidad con la gestión comunitaria; de procesos productivos como el del chontaduro, que entrelazan alimentación, identidad y justicia económica.

Lo que se juega en Buenaventura no es solo el futuro de un municipio, sino la posibilidad de que Colombia escuche a sus periferias no como zonas de intervención, sino como territorios de pensamiento, creatividad y poder político. En un país que ha naturalizado la desigualdad territorial, los aprendizajes del margen tienen un valor incalculable.

No son recetas listas para ser replicadas, pero sí horizontes posibles para reimaginar la justicia, la economía, la participación y el bienestar desde abajo, con otros lenguajes, otros ritmos y otros referentes.

Por eso, abordar este capítulo exige salir de las categorías clásicas de evaluación e impacto, y entrar en un terreno epistemológico, ético y

político. Lo que aquí se analiza no es una experiencia exitosa en términos de indicadores convencionales, sino una apuesta viva que desborda lo cuantificable. Se trata de reconocer que Buenaventura no solo demanda derechos: los reinventa; no solo denuncia el abandono: propone caminos; no solo sobrevive a pesar del Estado: crea desde el nosotros.

10.1 Obstáculos superados y aprendizajes colectivos

El camino de la agroindustria comunitaria del chontaduro en Buenaventura no ha estado exento de obstáculos. Como toda iniciativa que nace en contextos de marginación estructural, el proyecto ha debido enfrentar no solo las limitaciones materiales propias del abandono estatal, sino también desafíos culturales, organizativos, técnicos y simbólicos profundamente arraigados.

Superar estos obstáculos no ha sido un proceso lineal ni exento de contradicciones, pero sí ha generado una acumulación de aprendizajes que hoy se constituyen en un legado colectivo del territorio para otros procesos afines en Colombia y América Latina.

Uno de los primeros desafíos fue la escasa credibilidad en los procesos productivos propios. Durante décadas, la dependencia

estructural del centro ha generado una subjetividad marcada por la desconfianza hacia lo local, lo comunitario y lo ancestral.

La agroindustria, al estar asociada a grandes capitales y a circuitos de acumulación lejanos al territorio, parecía una empresa imposible para las comunidades rurales del Pacífico. Romper con esa lógica implicó un trabajo pedagógico y político de revalorización de saberes, de reconstrucción de la autoestima colectiva y de resignificación del chontaduro como símbolo de dignidad productiva.

Como ha señalado Boaventura de Sousa Santos (2009), “sin confianza epistemológica en nuestras propias experiencias, no hay emancipación posible”.

Otro obstáculo central fue la precariedad de las condiciones infraestructurales. Desde el acceso limitado a agua potable, energía eléctrica o conectividad vial, hasta la inexistencia de plantas de transformación adecuadas a las normas sanitarias del INVIMA, los condicionamientos materiales han puesto a prueba la capacidad de innovación de los actores comunitarios.

Sin embargo, lejos de esperar soluciones externas, se desarrollaron estrategias de adaptación con tecnologías apropiadas, alianzas

institucionales selectivas y una lógica incremental de escalabilidad territorial.

Estas decisiones evidencian un aprendizaje fundamental: no se trata de replicar modelos industriales ajenos, sino de construir soluciones técnicas contextualizadas, con pertinencia cultural y sostenibilidad ecológica (Altieri & Nicholls, 2012).

En el plano organizativo, uno de los principales desafíos fue consolidar formas de cooperación que escaparan a las dinámicas clientelares, personalistas o verticales que han marcado históricamente muchas intervenciones en el Pacífico.

La apuesta por formas asociativas horizontales, con énfasis en la autogestión y la corresponsabilidad, exigió procesos intensos de formación, confianza mutua y deliberación colectiva. Estos procesos permitieron construir una gobernanza interna basada en el cuidado, el respeto a la diversidad y el ejercicio cotidiano de la democracia participativa, sintonizando con los principios de la economía solidaria latinoamericana (Coraggio, 2011).

En el ámbito económico, la dificultad para insertar productos locales en circuitos comerciales amplios sin perder identidad ni ceder a lógicas mercantilistas ha sido uno de los aprendizajes más complejos. Evitar la

cooptación por el mercado, mantener precios justos, garantizar condiciones dignas de trabajo y, al mismo tiempo, asegurar sostenibilidad financiera, ha requerido decisiones estratégicas que no siempre responden a los parámetros convencionales de competitividad.

Aquí se ha gestado una noción de economía para la vida que redefine el valor del producto en términos éticos, culturales y territoriales, más allá del lucro (Acosta, 2016).

Finalmente, se ha enfrentado el obstáculo persistente de la invisibilización institucional. El Estado colombiano, en sus diferentes niveles, sigue operando desde una matriz centralista que desconoce la riqueza organizativa del Pacífico.

Las comunidades han debido posicionarse como interlocutoras válidas, exigir reconocimiento legal y disputar el sentido de las políticas públicas. En este proceso, se ha comprendido que la incidencia no se limita a la negociación con las autoridades, sino que implica una disputa simbólica por el derecho a nombrarse, a representarse y a construir política desde abajo (Escobar, 2018).

Todos estos desafíos superados han generado una constelación de aprendizajes colectivos que van más allá de lo técnico o lo productivo. Se trata de aprendizajes sobre el poder de la organización, la centralidad del territorio, la

importancia de la memoria, el valor de lo común y la posibilidad real de construir futuro desde el margen.

Son aprendizajes que no pueden ser medidos únicamente en toneladas procesadas o en ingresos económicos, sino en dignidad recuperada, en subjetividades transformadas y en horizontes abiertos.

En suma, lo que se ha gestado en Buenaventura no es simplemente una experiencia exitosa: es una pedagogía territorial que desafía las lógicas extractivas y propone otros modos de habitar el mundo. Una pedagogía que merece ser escuchada, documentada y replicada no como receta, sino como semilla.

10.2 Posibilidades de réplica y adaptabilidad regional

La experiencia de la agroindustria comunitaria del chontaduro en Buenaventura ofrece un laboratorio vivo para repensar el desarrollo territorial desde claves locales, inclusivas y sostenibles.

Si bien cada territorio tiene sus particularidades sociales, ecológicas y culturales, existen elementos replicables y lecciones transferibles que pueden ser adaptadas a otros contextos del país y del sur

global. Esta posibilidad de réplica no supone una traslación mecánica de un modelo, sino la apropiación creativa de principios, metodologías y aprendizajes que dialoguen con la realidad específica de cada lugar.

Uno de los primeros factores que favorecen la adaptabilidad del modelo es su anclaje en recursos bioculturales locales.

Así como el chontaduro representa un fruto identitario en Buenaventura, otros territorios cuentan con productos endémicos, saberes agroalimentarios ancestrales y sistemas de conocimiento que pueden convertirse en el punto de partida de una estrategia de transformación productiva con arraigo territorial.

Este enfoque es coherente con lo planteado por Toledo y Barrera-Bassols (2008), quienes defienden la noción de “territorios de vida” como espacios donde la biodiversidad y la diversidad cultural se entrelazan para sostener alternativas al desarrollo hegemónico.

La metodología de construcción participativa, basada en la articulación entre comunidad organizada, conocimiento local, instituciones académicas y aliados técnicos, constituye otro elemento replicable.

La experiencia muestra que la coproducción de saberes y la deliberación colectiva fortalecen no solo la pertinencia del proyecto, sino su legitimidad social y sostenibilidad política. En este sentido, la experiencia de Buenaventura contribuye a descentrar la noción de innovación, colocándola no en la tecnología importada, sino en las capacidades relacionales y organizativas del territorio (Gudynas, 2011).

La economía solidaria, como principio articulador del proyecto, también tiene potencial de réplica en territorios donde existen formas comunitarias de cooperación, confianza social y prácticas tradicionales de reciprocidad.

Experiencias similares en regiones como el sur del Cauca, la Sierra Nevada de Santa Marta o los Llanos orientales han demostrado que, con el acompañamiento adecuado, es posible construir sistemas económicos alternativos, basados en el valor de uso, el bien común y el respeto a los ciclos ecológicos (Coraggio, 2011; Chávez, 2021).

Sin embargo, para que la réplica sea viable, es necesario tener en cuenta al menos tres condiciones estructurales. En primer lugar, se requiere un entorno normativo que no obstaculice la producción comunitaria.

La legislación sanitaria, fiscal y de fomento productivo debe contemplar las

particularidades de los pequeños productores, y no imponerles exigencias desproporcionadas que terminan beneficiando a grandes empresas. Segundo, es imprescindible un proceso sostenido de formación y fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas y políticas en las comunidades. Sin sujetos empoderados, no hay economía alternativa que se sostenga. Y tercero, se requiere voluntad institucional para construir desde la horizontalidad, sin imponer modelos ni suplantarse la autonomía local.

En cuanto a la adaptabilidad regional, la experiencia de Buenaventura puede ofrecer rutas concretas para la diversificación productiva y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en regiones que comparten condiciones de exclusión histórica y riqueza biocultural.

Las zonas rurales de los Montes de María, el Catatumbo, el Chocó o el Amazonas colombiano enfrentan desafíos semejantes: precariedad infraestructural, abandono institucional, violencia territorializada y pérdida de prácticas agrícolas tradicionales.

En todos estos contextos, una agroindustria territorial de pequeña escala, articulada a redes comunitarias y sostenida sobre saberes locales, puede constituir una vía para el desarrollo con dignidad.

De igual forma, la posibilidad de establecer redes interterritoriales de cooperación solidaria —por ejemplo, entre experiencias agroindustriales del Pacífico, el Caribe y el suroccidente colombiano— permitiría no solo intercambiar aprendizajes y productos, sino también disputar colectivamente políticas públicas más justas.

Este tipo de articulaciones son coherentes con el enfoque de redes alternativas de producción, distribución y consumo que han sido documentadas en América Latina como expresiones de una economía postcapitalista emergente (Santos, 2020).

La replicabilidad del modelo bonaverense no reside, por tanto, en la copia de una receta, sino en la activación de un horizonte: producir sin explotar, organizar sin excluir, innovar sin desarraigar, y comercializar sin destruir la vida.

Esta es la enseñanza más poderosa que el proyecto puede ofrecer a otros territorios: la posibilidad real de construir economías para la vida desde abajo, con las manos, los saberes y los sueños del pueblo.

10.3. Agroindustria con alma: el fruto como horizonte

Pensar en una "agroindustria con alma" supone subvertir la lógica dominante que ha

separado históricamente la producción económica de los valores sociales, culturales y afectivos que sustentan la vida comunitaria.

En el caso de Buenaventura, atravesada por procesos de despojo, racialización y subordinación logística, la agroindustria no puede ser una mera estrategia de inserción en el mercado.

Tiene que ser una apuesta ética, política y estética que reencuentre a las comunidades con sus saberes, sus territorios y sus formas de existencia digna.

El chontaduro, en este sentido, no es solo un insumo agrícola ni una alternativa nutricional. Es un símbolo potente de lo que puede ser un modelo productivo enraizado, justo y regenerativo.

Su cultivo, transformación y consumo evocan una cadena de significados que incluye el cuidado de la tierra, la transmisión intergeneracional del conocimiento, la defensa de la autonomía alimentaria y la posibilidad de que lo rural afrocolombiano deje de ser periferia subordinada para convertirse en centro de innovación social.

Cuando se dice que el fruto tiene alma, se reconoce su capacidad para aglutinar memorias, deseos colectivos y horizontes posibles.

El enfoque de una agroindustria con alma requiere, por tanto, una triple dimensión. Primero, una dimensión cultural, que reconozca los significados simbólicos del alimento y del territorio como matrices de identidad y resistencia. Este componente es esencial para evitar que la agroindustria se convierta en un nuevo vector de desposesión, donde el valor añadido se extrae sin respetar los contextos de origen (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).

Segundo, una dimensión relacional, que privilegie las redes de cooperación solidaria, la reciprocidad entre actores del proceso productivo y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones. Y tercero, una dimensión ecológica y de cuidado, que garantice prácticas sostenibles, regenerativas y respetuosas con los ritmos de la naturaleza y las dinámicas del entorno.

Este enfoque ético-productivo implica también reconfigurar las relaciones entre el conocimiento técnico y el saber ancestral. En lugar de subordinar la agroindustria a una lógica de eficiencia homogénea, se propone un modelo de innovación situada, que articule las tecnologías apropiadas con las formas locales de hacer y comprender el mundo.

La harina de chontaduro, en este escenario, no es solo un producto final: es el resultado de

un diálogo entre la ciencia y la memoria, entre la necesidad y la creatividad popular.

Además, apostar por una agroindustria con alma implica disputar el concepto mismo de desarrollo. En lugar de medir el éxito en términos de rentabilidad, se plantea evaluar el impacto del proyecto en función de la justicia redistributiva, la mejora de la calidad de vida, la afirmación cultural y la sostenibilidad ecológica.

Se trata de sustituir el paradigma de crecimiento lineal por uno de regeneración comunitaria, en donde el fruto, en vez de convertirse en mercancía abstracta, conserve su enraizamiento territorial como parte de una ecología del cuidado (Escobar, 2018).

Desde esta perspectiva, el horizonte agroindustrial no se limita al chontaduro como fruto, sino que lo trasciende hacia una visión integral del territorio como sujeto productivo. En esta visión, las economías locales no son residuos del pasado ni nichos de subsistencia, sino núcleos de transformación capaces de imaginar y construir futuros otros. Y Buenaventura, con su memoria herida y su potencia viva, tiene todo el derecho y la capacidad de ser parte de esos futuros.

Así, el chontaduro se convierte en una metáfora y una posibilidad: un fruto que, al ser cultivado con cuidado, transformado con

sentido y distribuido con justicia, puede alimentar no solo cuerpos, sino también comunidades, paisajes, esperanzas. Una agroindustria con alma es aquella que reconoce, respeta y revitaliza esos vínculos. Que entiende que lo económico no está separado de lo ético, y que lo productivo no es opuesto a lo afectivo. Es aquella que hace del fruto un horizonte y del horizonte una causa común.

Conclusión

Pensar la agroindustria desde el Pacífico colombiano —y más aún desde Buenaventura— obliga a descentrar las lógicas dominantes del desarrollo, de la economía y de la producción de conocimiento. Este libro no ha pretendido ofrecer una guía técnica para emprender, ni una fórmula replicable para intervenir territorios históricamente empobrecidos.

Lo que se ha cultivado a lo largo de sus páginas es una mirada crítica y comprometida con la justicia territorial, que reconoce en el chontaduro, en su transformación comunitaria y en sus formas asociativas, una clave para reimaginar el futuro de las economías rurales en Colombia.

El recorrido realizado muestra cómo una fruta ancestral, habitualmente relegada a los márgenes del mercado formal, puede convertirse en eje articulador de procesos sociales complejos. El chontaduro no es aquí solamente un insumo agroalimentario, sino un símbolo de memoria viva, de autonomía posible, de agencia comunitaria y de relación profunda con el territorio.

Su agroindustrialización, cuando es pensada desde los saberes locales y las necesidades colectivas, se convierte en una herramienta de

dignificación social y cultural, no en una mera actividad comercial.

A lo largo de los capítulos hemos visto cómo esta propuesta no surge en el vacío, sino como respuesta histórica a un abandono estructural, a una colonialidad persistente y a una economía nacional que ha privilegiado el puerto por encima del campo.

En Buenaventura, como en muchas otras regiones afrodescendientes y rurales de Colombia, las comunidades han debido resistir no solo a la violencia armada, sino a formas cotidianas de despojo institucional, económico y epistémico.

Frente a ello, la apuesta por una agroindustria del chontaduro con enfoque comunitario emerge como una forma de reapropiarse del futuro, de resignificar el trabajo campesino y de sanar heridas territoriales desde la acción colectiva.

Pero también hemos advertido los retos: la dificultad de competir en mercados desiguales, la fragilidad de las infraestructuras locales, el riesgo de que la lógica del capital capture las iniciativas populares bajo la fachada de “emprendimiento social”.

Estos desafíos no deben ser negados, sino integrados críticamente como parte del proceso.

Reconocerlos permite fortalecer las capacidades organizativas, afinar las estrategias de comercialización con identidad y consolidar una gobernanza comunitaria más sólida y resiliente.

En ello, el diálogo con otras experiencias en América Latina —desde la economía popular en Argentina hasta las redes agroecológicas en Brasil— resulta imprescindible para nutrir horizontes comunes.

Desde una perspectiva metodológica y política, este libro también es un llamado a repensar cómo se construye conocimiento desde y para los territorios. Aquí no hay una división tajante entre teoría y práctica, ni entre investigador y comunidad.

Los saberes que sustentan esta agroindustria no están solamente en las universidades o en los planes de desarrollo, sino en las memorias orales, en las prácticas culinarias, en las formas de cooperación vecinal, en la intuición de quienes saben cuándo cosechar y cómo transformar el fruto sin dañarlo. Reconocer esa inteligencia colectiva, darle estatus epistemológico, es parte de la dignificación de los procesos.

Así, “de la semilla a la dignidad” no es solo una frase de cierre. Es una síntesis de todo lo que está en juego. La semilla representa lo ancestral, lo pequeño, lo aparentemente insignificante,

pero lleno de potencia vital. La dignidad, por su parte, es la meta que desborda el mercado: vivir bien, decidir sobre lo propio, habitar el territorio sin miedo ni subordinación.

El camino que conecta ambas no es recto ni rápido. Está lleno de obstáculos, disputas, aprendizajes y reveses. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque en él se tejen alternativas reales al despojo, al hambre y a la exclusión.

En definitiva, este libro ha querido mostrar que la agroindustria no tiene por qué estar reñida con la vida. Que es posible transformar sin depredar, producir sin explotar, comercializar sin perder el alma del territorio. Que el desarrollo puede ser otro si se siembra desde abajo, con afecto, con memoria y con justicia. Y que Buenaventura, con sus heridas y sus resistencias, con sus chontaduros y sus sueños, nos ofrece una hoja de ruta para pensar una Colombia distinta: más solidaria, más plural, más arraigada.

Bibliografía

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2012). *Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable*. Mundi-Prensa.

Ambrosio, A. F., Ortiz, M. A. G., Sánchez, A. F. S., Díaz, L. I. S., & Vernot, D. (2020). Chontaduro & coco en salsa de ciencia, cultura y técnica. Universidad de La Sabana. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=F7EAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&ots=XnYjKW3a8&sig=1Ojld03vIvievraUX8RUO9oig08&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Bartra, R. (2007). *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del mexicano*. Fondo de Cultura Económica.

Bebbington, A. (2007). *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: Una ecología política de transformaciones territoriales*. CEPES.

Boelens, R. (2015). *Water, Power and Identity: The Cultural Politics of Water in the Andes*. Routledge.

Constantino, L. M., Caicedo, H. C., & Torres, A. (2003). Manejo integrado del barrenador del fruto de chontaduro (*Palmelampus heinrichi* O'Brien & Kovarik) con pequeños productores del Municipio de Guapi, Cauca. Fundación Levante en marcha, Auspicio PRONATTA, Cali.

<https://investigacionagropecuaria.jimdofree.com/app/download/12376208657/CONSTANTINO+et+al.pdf?t=1622724565#:~:text=Constantino%2C%20L.M.%2C%20L.C.%20Pardo,1353.%20www.investigacionagropecuaria.com.mx>

Correa Díaz, C., & Mosquera Patterson, Z. L. (2007). *Diagnóstico socioeconómico del cultivo de la palma de chontaduro (Bactris gasipaes) en el municipio de Tumaco* [Trabajo de grado, Universidad de Nariño]. Repositorio Institucional Universidad de Nariño. <https://sired.udenar.edu.co/14792/>

Corte Constitucional de Colombia. (2017). *Sentencia T-622 de 2016*. Reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos.

Escobar, A. (2003). *El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿Globalización o postdesarrollo?*. Universidad Nacional de Colombia.

Escobar, A. (2018). Ubuntu: una invitación para comprender la acción política, cultural y ecológica de las resistencias afroandina y afropacífica.

de Alimentos, P. M. (2021). América Latina y el Caribe–Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2021: Estadísticas y tendencias (Vol. 2021). Food & Agriculture Org.

Freire, P. (1996). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI.

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principios de administración financiera* (14.^a ed.). https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Principios+de+administraci%C3%B3n+financiera&author=Gitman&publication_year=2015

Haraway, D. (2016). *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Duke University Press.

Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores.

Mignolo, W. D. (2011). *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Duke University Press.

Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO.

Oslender, U. (2008). *Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano: hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales*. ICANH.

PARDO-LOCARNO, L. C. (Editor). 2022. *La Agricultura del Pacífico y el Cultivo de Chontaduro: Antología y Novedades Científicas*.

Corpovalle Unipacifico. Santiago de Cali. 325 p.
ISBN. 978-958-49-8338-1

Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. CLACSO.

Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón.

Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.

Scott, J. C. (2009). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. Yale University Press.

Shiva, V. (2016). *¿Quién alimenta realmente al mundo?*. Capitán Swing.

Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Icaria Editorial.

Zibechi, R. (2017). *Territorios en resistencia: Cartografía política de las periferias latinoamericanas*. Editorial Lavaca.

El autor

Silvio Hurtado Rodríguez es un docente investigador multidisciplinario, actual director del grupo de investigación *International Business*, con una sólida formación académica que integra un Magíster en Administración Económica y Financiera, especializaciones en Revisoría Fiscal y en Auditoría y Gestión en Salud, además de su título profesional como Contador Público. Esta base académica, complementada por una trayectoria profesional que abarca tanto el sector público como el privado, se conjuga con una activa experiencia docente en áreas clave como las finanzas, la economía, la administración y la gestión de proyectos. Todo ello le permite abordar la investigación desde una perspectiva integral, aplicada y teóricamente fundamentada.

Su experticia se manifiesta de forma especial en los campos de la planeación financiera estratégica, las finanzas corporativas, la valoración de empresas y el análisis de costos, desde un enfoque orientado a la generación de valor en las organizaciones. Su capacidad para analizar problemas financieros complejos, evaluar proyectos de inversión y comprender a fondo los sistemas de indicadores de gestión lo posiciona como un académico preparado para enfrentar los desafíos prácticos con solvencia teórica y metodológica.

Entre sus principales líneas de investigación se encuentran el análisis del impacto de las decisiones financieras en la creación de valor empresarial; el desarrollo y aplicación de modelos de valoración en contextos económicos específicos; los estudios comparativos de sistemas de costos y su influencia en la eficiencia operativa; la evaluación financiera de proyectos y su viabilidad en distintos sectores productivos; así como el diseño y análisis de indicadores para la optimización del desempeño organizacional. Asimismo, ha desarrollado investigaciones en la intersección entre gestión financiera, administrativa y del sector salud.

En cuanto a su producción académica, destaca como coautor del libro *Ruta de la investigación formativa en las ciencias empresariales*, publicado por la Universidad del Pacífico en 2024. Además, tiene en preparación un capítulo de libro titulado *Análisis de riesgo financiero en las Pymes: Aplicación empírica en las empresas de transporte de carga de Buenaventura*, cuyo. Ha dirigido múltiples trabajos de grado en la Universidad del Pacífico, entre los que se encuentran propuestas de mejora y análisis operativos en entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Buenaventura, así como planes de negocios y pasantías que abordan temáticas de relevancia para el desarrollo organizacional y territorial.

Con un conjunto de habilidades analíticas robustas, pensamiento estratégico, actitud colaborativa y compromiso sostenido con la producción de conocimiento, Silvio Hurtado Rodríguez representa una figura académica que incide tanto en la formación de profesionales como en la consolidación de líneas de investigación relevantes para el desarrollo económico, financiero y social desde la región.

